

PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS COLOMBIA

CICLO DEL PROGRAMA
HUMANITARIO

2023

Publicado en Marzo 2023



Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por OCHA en nombre del Equipo Humanitario País y de los socios. Proporciona una comprensión compartida de la crisis, incluyendo las necesidades humanitarias más urgentes y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Representa una base de pruebas consolidada y contribuye a la planificación estratégica conjunta de la respuesta.

FOTO DE LA PORTADA

Poblados amazónicos de La Chorrera, Puerto Arica y Tarapacá.
Foto: OPS/OMS Colombia, Karen González, 2022.

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

Para obtener las últimas actualizaciones



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por emergencias reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por emergencias y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/colombia
twitter.com/ochacolombia

Humanitarian RESPONSE

Humanitarian Response es el sitio web central para las herramientas y servicios de gestión de la información, permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios del IASC que operan en una emergencia prolongada o repentina.

www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia

Humanitarian Action

ANALYSING NEEDS AND RESPONSE

Humanitarian Action apoya a los tomadores de decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios. La herramienta provee la última información verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las contribuciones financieras.

<https://humanitarianaction.info/plan/1142/document/hno-glance>



El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor primario de los datos reportados constantemente sobre el financiamiento humanitario global y contribuye a la toma de decisiones estratégicas identificando brechas y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en los principios humanitarios.

fts.unocha.org/appeals/overview/2022

Tabla de Contenido

04 Resumen Ejecutivo de las Necesidades Humanitarias y los Hallazgos Clave

19 Parte 1: Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias

- 20 Contexto de la Crisis
- 22 Contexto demográfico, económico y ambiental
- 23 Marco legal existente
- 24 Contexto de Seguridad
- 26 Acceso humanitario

29 Choques e impacto de la crisis

- 29 Impacto por factores de la violencia armada y conflicto en las personas, los sistemas y en el acceso
- 31 Impacto en las personas: desplazamiento interno
- 33 "Análisis sobre la tendencia de los eventos de desplazamiento - UARIV con el apoyo de Blumont
- 34 Encuesta de Situaciones Humanitarias Ronda 2 - Foro de Organizaciones Humanitarias en Colombia
- 35 Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) Colombia (2022)
- 40 Personas confinadas

42 Alcance del Análisis

- 47 Número de Personas en Necesidad
- 51 Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades
- 53 Gravedad intersectorial de las necesidades
- 53 Condiciones de vida
- 54 Mecanismos de afrontamiento a la crisis

55 Grupos en situación de vulnerabilidad

- 55 Grupo en situación de vulnerabilidad: mujeres
- 57 Grupo en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes
- 59 Grupo en situación de vulnerabilidad: Personas que viven bajo la influencia y control de grupos armados
- 61 Grupo en situación de vulnerabilidad: Comunidades étnicas
- 64 Grupo en situación de vulnerabilidad: personas desplazadas, confinadas y población de acogida

66 Impacto regional

- 66 Frontera (nororiental)
- 69 Región Noroccidental
- 73 Región Pacífico
- 78 Región Centro-Sur

83 Parte 2: Análisis de Riesgo y Monitoreo de la Situación y de las Necesidades

- 84 Análisis de Riesgos
- 90 Proyección de las necesidades
- 91 Monitoreo de la Situación y Necesidades

92 Parte 3: Análisis Sectorial


- 93 3.1 Protección
- 101 3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición
- 105 3.3 Salud
- 108 3.4 Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
- 112 3.5 Educación en Emergencias (EeE)
- 115 3.6 Alojamiento y Asentamiento (AyA)
- 117 3.7 Recuperación Temprana

120 Parte 4 Anexos

- 121 Fuente de datos
- 122 Metodología
- 124 Brechas y Limitaciones de la Información
- 126 Acrónimos

Resumen Ejecutivo de las Necesidades Humanitarias y los Hallazgos Clave

Cifras actuales

PERSONAS EN NECESIDAD	TENDENCIA (2015-2023)	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	GRUPOS ÉTNICOS
7.7M		50,6%	31,2%	28%



CHOCÓ, COLOMBIA

Niñas habitantes del departamento de Chocó.
Foto: Fundación SAHED, 2022.

Colombia avanza en la consolidación de la paz, pero aún se enfrenta a múltiples choques que generan necesidades humanitarias.

En la última década, Colombia ha hecho importantes esfuerzos en materia de desarrollo y consolidación de la paz. En agosto de 2022, un nuevo Gobierno fue elegido anunciando una agenda renovada para promover la equidad social, la justicia económica y ambiental, y la generación de espacios de diálogo con los GANE encaminados a lo que se denomina la Paz Total en los territorios más afectados por la violencia. De estas iniciativas, se resaltan los esfuerzos por mejorar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, la promoción de la participación de la sociedad civil en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el énfasis transversal de los enfoques territoriales, la seguridad humana y las víctimas. El nuevo Gobierno también tomó medidas rápidas para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que se espera tenga un impacto positivo para la población que cruza o vive a lo largo de la frontera.

No obstante, durante los últimos cuatro años se ha observado un deterioro del contexto humanitario del país, dejando a unos 7,7 millones de personas en situación de necesidad.

Esta situación deriva de la confluencia entre un deterioro del conflicto armado interno por la expansión y consolidación de múltiples grupos armados no estatales (GANE), el incremento de los desastres agravados por la variabilidad climática, el aumento de las necesidades socioeconómicas generadas por la COVID-19, el repunte en la tasa de inflación durante el 2022 y las limitadas capacidades institucionales para atender tanto a población afectada internamente como la llegada masiva de refugiados y migrantes.

Por una parte, el incremento de acciones armadas y la presencia de los GANE ha aumentado los riesgos de protección y emergencias humanitarias que afronta la población.

En 2022 ha persistido la presencia, expansión y reconfiguración de los GANE, reflejada

en el incremento de víctimas y eventos por desplazamiento forzado y confinamiento en un 47 por ciento frente al 2021, para un total de 253 eventos y 266.700 personas afectadas y focalizadas en particular, en la costa Pacífica, en las zonas fronterizas y en los departamentos de la zona Centro-Sur del país. Según la [Defensoría del Pueblo](#), la presencia de estos grupos está en las zonas rurales de cerca de la mitad de los municipios del país, poniendo en riesgo a al menos 7,2 millones de personas que viven bajo la influencia de los GANE. A esto se suman los altos niveles de violencia sexual relacionada con el conflicto, el aumento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes (incluidos aquellos refugiados y migrantes), así como el uso de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE) que siguen afectando de manera desproporcionada a la población civil.

Por otro lado, la prolongación del Fenómeno de La Niña por tercer año consecutivo extendió la temporada de lluvias hasta finales de 2022¹ y, con ella, las emergencias humanitarias en el territorio nacional que, en consecuencia generó la Declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional el 1 de noviembre de 2022, indicando una afectación del 96 por ciento de los municipios del país. Entre enero y diciembre de 2022, más de 616.400 personas fueron afectadas por inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales y otros eventos que además de generar necesidades humanitarias, han dificultado la recuperación en el mediano y largo plazo de la población. Una de las mayores crisis se produjo en la subregión de La Mojana, donde más de 166.000 personas resultaron con afectaciones para el acceso a bienes y servicios básicos. También se estima que, solo entre agosto y octubre, 120.000 personas se vieron afectadas por la intensificación de las lluvias y el paso del huracán Julia en La Guajira. En el Pacífico, se destacan las dinámicas de múltiple afectación, en poblaciones afectadas por desastres y que viven también los impactos por la presencia o injerencia de GANE.

1 Probablemente se extenderá hasta el primer semestre de 2023, conforme a las proyecciones del IDEAM



SUCRE, COLOMBIA

Inundación en región de La Mojana.
Foto: OCHA Colombia, 2022.

Ante este panorama, preocupan los niveles de inseguridad alimentaria a los que se verán enfrentadas las personas en mayor situación de vulnerabilidad en 2023. Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo de FAO y WFP, en 2022, el número de personas subalimentadas y con diferentes formas de malnutrición es creciente. **Más de 2.300 millones de personas** están en inseguridad alimentaria a nivel global y **15,5 millones** de personas están en inseguridad alimentaria en Colombia (30% de la población nacional). Esta situación podría empeorar por dinámicas macroeconómicas como la inflación anual que reporta sus mayores niveles desde 1999 (**13,12% para diciembre del 2022**) y el incremento del dólar a nivel global que ha empezado a tener un impacto reflejado en el aumento del precio de los alimentos, la energía, los agro-insumos y combustibles que llevan a su vez, a un incremento en los costos de

producción. Esta situación podría afectar los medios de vida y el acceso a alimentos de poblaciones ya afectadas por el conflicto y los eventos de variabilidad climática.

DATOS CLAVE	CIFRAS
Eventos por desplazamiento y confinamiento	253
Personas desplazadas masivamente ²	82.800
Personas desplazadas individualmente ³	123.000
Personas confinadas	102.400
Personas afectadas por variabilidad climática	616.500

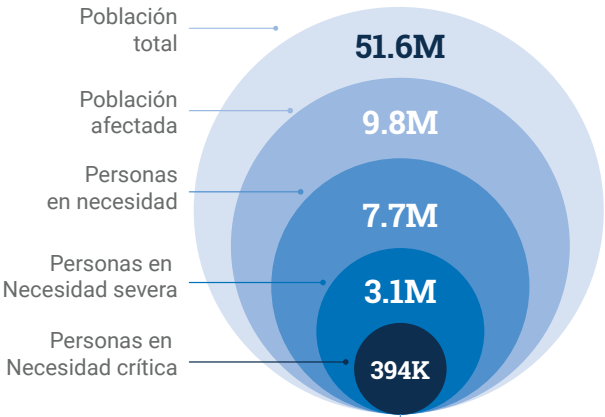
2 Según reportes de los ELC y EHL consolidados por OCHA entre enero y diciembre.
3 Según información del Registro Único de Víctimas (RUV), con corte a 31 de octubre de 2022.
[Base desplazamientos individuales UARIV](#)

Resumen de Necesidades Humanitarias y Resultados Claves

Personas en Necesidad (PiN)



**PiN Intersectorial
situación interna**



Desagregación por sexo y edad de personas en necesidad		Hombres	3.810.926
		Niñas	1.177.806
		Adultos mayores	1.009.925
		Personas en condición de discapacidad	191.230
		Hombres	3.900.130
		Mujeres	1.228.602



Refugiados y Migrantes*

**Refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y sus comunidades de acogida*



	Hombres	1.861.902
	Niñas	760.861
	Hombres	2.016.861
	Mujeres	770.253

Grupos en situación de vulnerabilidad con necesidades



1.4M

Comunidades afrodescendientes



704.6k

Pueblos indígenas



793.6k

Personas afectadas por variabilidad climática



2.4M

Vocación de permanencia



349.5k

Población en Transito



919k

Comunidades anfitrionas



578,6k

Personas desplazadas



137.6k

Personas confinadas



1.2M

Población pendular



541.5k

Colombianos Retornados



885.2k

Comunidades de acogida

5.8M

Personas que viven bajo influencia de los GAO/GAD

Personas en Necesidad (PiN) por año:

Factores para el marco del análisis del PiN:



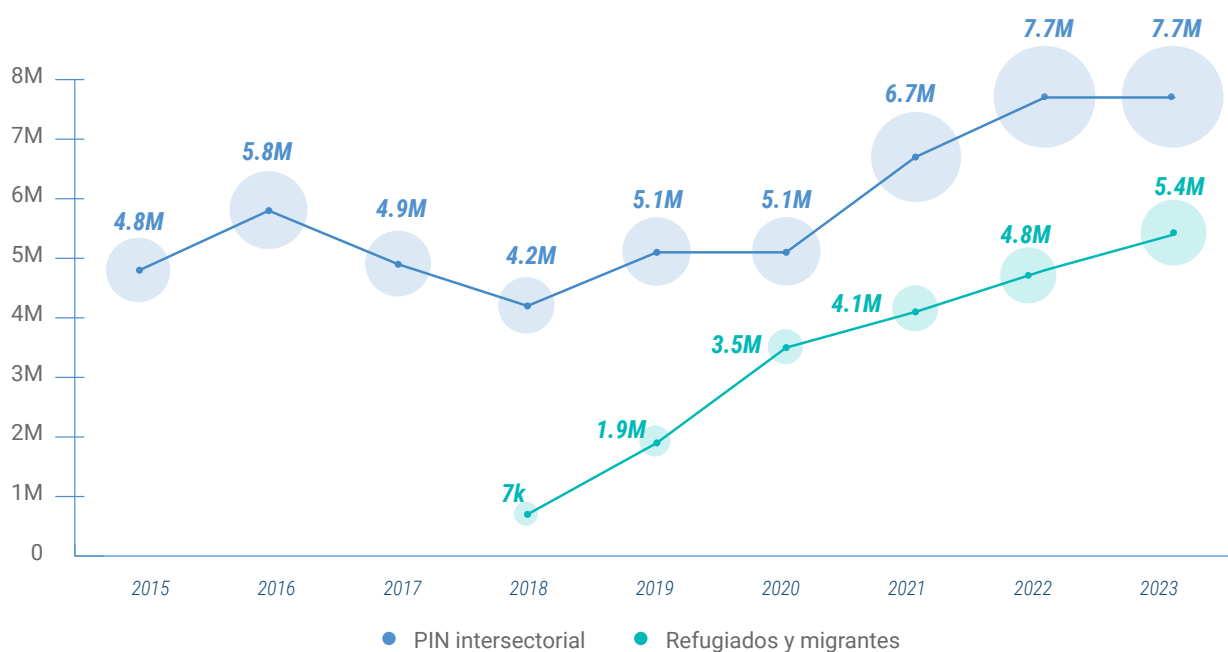
Factores de violencia y conflicto armado



Variabilidad climática
Desastres



Refugiados y Migrantes



Personas en Necesidad (PiN) por clúster:



Cifras clave:

7.7 millones

Personas con necesidades humanitarias (PiN) en

806 municipios

3.1 millones

tienen necesidades agudas (severidad 4 y 5) en

364 municipios



72%
del país

35%

4,6M

Personas con **necesidades humanitarias** que habitan principalmente en **zonas rurales**



El **porcentaje de municipios** que concentra a las personas con necesidades humanitarias en **zonas rurales** es del

70%

394 mil

personas se encuentran en severidad extrema (5) en

25 Municipios

en la región pacífico y Orinoquía, **están requiriendo asistencia humanitaria a corto plazo**

7.2M viven bajo la influencia de grupos armados en al menos 462 municipios

5.8M

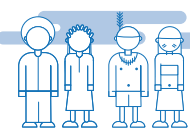
de personas viven bajo la influencia de grupos armados **están en necesidad** y viven en

375 municipios

con presencia de MAP/MUSE y cultivos ilícitos, lo que ha generado un riesgo advertido en alertas tempranas, masacres y homicidios a líderes, lideresas, defensores y defensoras.

El **impacto del conflicto armado** es uno de los **factores determinantes** de las necesidades

Afectación especial para **pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes**



2.1M

de personas de grupos étnicos tienen **necesidades humanitarias**

18,4%

1'424.709
comunidades
afrodescendientes

9%

704.615
población
indígena

1.2M

personas afectadas por **variabilidad climática entre 2021 y 2022**

Fuente UNGRD



793 mil

personas se encuentran en necesidad humanitaria se concentran en **587 municipios**

52%

Están bajo la **influencia de grupos armados** (308 municipios)

** Cifra entre enero 2021 al 30 de junio 2022. Datos UNGRD.

673 mil

personas en necesidad **por variabilidad climática** están bajo influencia de grupos armados, es decir:

85%

de estas personas en necesidad **también son víctimas del conflicto armado**, configurando en varias ocasiones una **doble afectación**



48%

a nivel nacional

Al menos **5.5M** de personas no cuentan con acceso a **fuentes de agua mejorada**

Antioquia, Nariño, Chocó, La Guajira, Cauca, Meta y Magdalena.



60%

a nivel nacional

Al menos **2.9M** de personas no cuentan con acceso a **servicios sanitarios seguros**

Antioquia, La Guajira, Nariño, Chocó, Cauca y Bolívar.



66%

a nivel nacional

Aproximadamente **2.4M** de personas enfrentan barreras de acceso a los **servicios de salud**

Cauca, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Meta y Caquetá.

919 mil



Personas de **Comunidades anfitrionas** tienen **necesidades humanitarias**

en 806 municipios

70%

vive en zonas bajo **influencia de grupos armados**

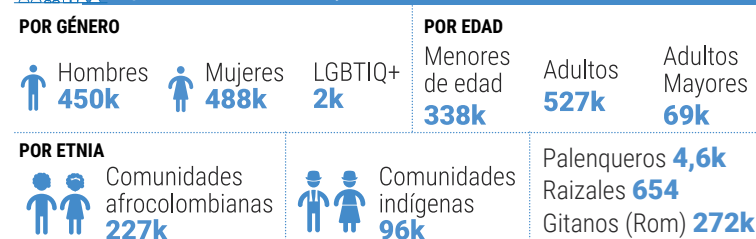
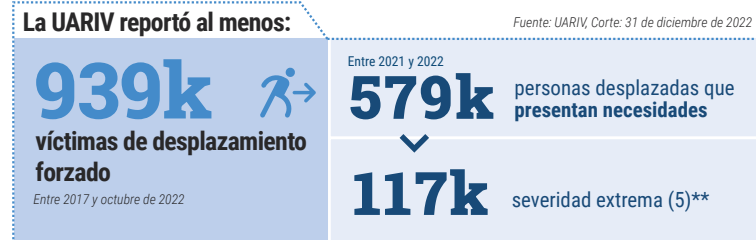
643.026

**** Fuente: UARIV.

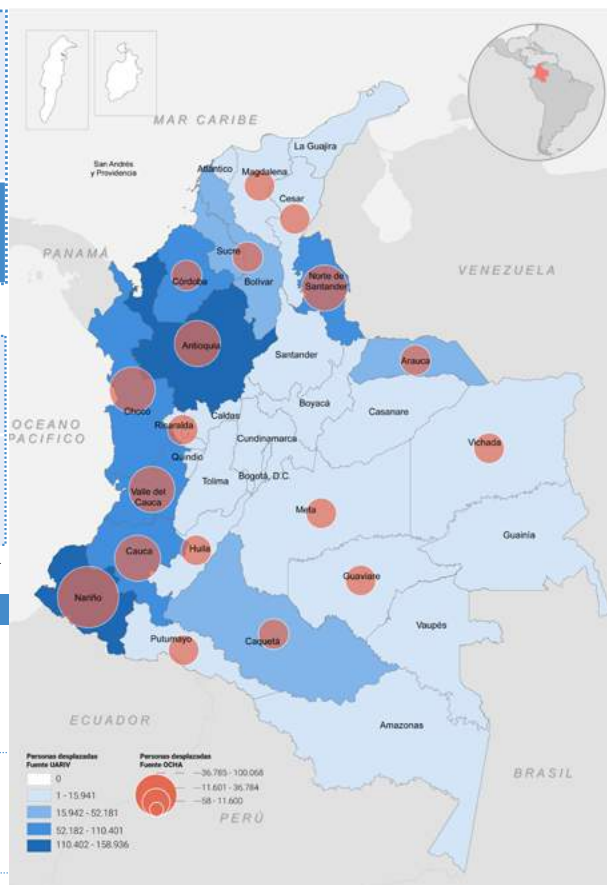
Lugares que concentran las mayores necesidades

Para más información consulte: **Resultados PiN intersectorial, Colombia 2023 y Desagregación grupos vulnerables**

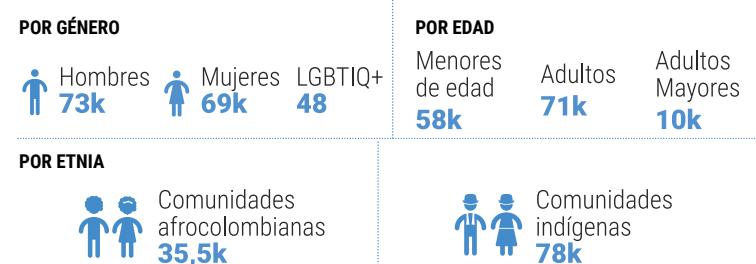
Cifras clave desplazamiento forzado



No aparecen registrado en ningún grupo étnico **620k**

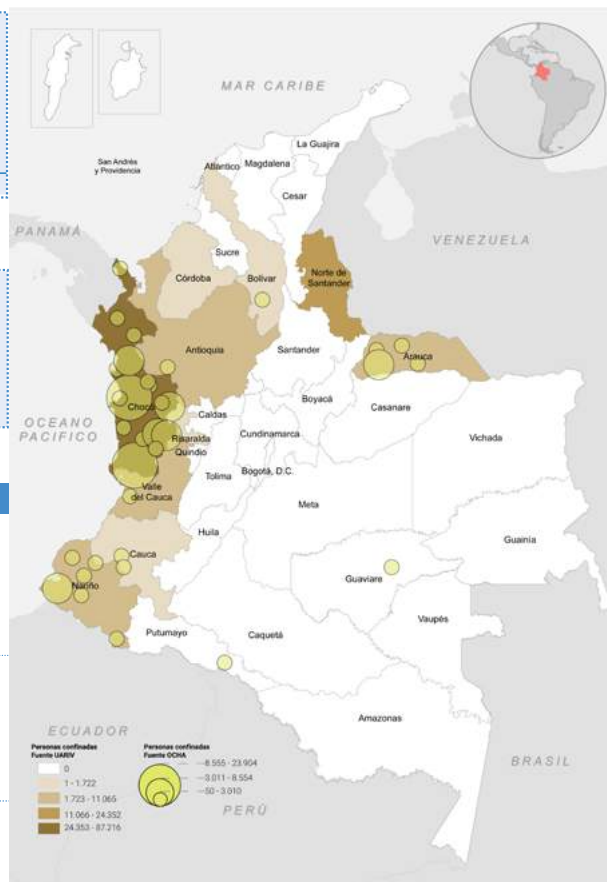


Cifras clave confinamiento



No aparecen registrado en ningún grupo étnico **27k**

Para más información consulte: [Base desplazamiento individual UARIV](#)



Personas con necesidades sectoriales



Protección

4.9M de personas en el país:

han sufrido y están en riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos humanos por el impacto del conflicto armado interno y la recurrencia de desastres de origen natural y variabilidad climática.

3.7M

se encuentran en necesidades con severidad agudas y en de riesgo de sufrir violaciones a sus derechos.



Protección de la niñez

Para 2023 se estiman

1.5M de NNA en riesgo y con necesidades de protección

Por lo menos **242.241 niños, niñas y adolescentes** fueron afectados en **127 eventos del conflicto armado** durante el primer semestre del 2022, mientras que para el mismo período del 2021 se verificó un evento más y la afectación de 14.321 niños, niñas y adolescentes.



Violencia Basada en Género VBG

La población en necesidad por VBG 2023 presenta un aumento y se han considerado como posibles víctimas y sobrevivientes

Más de

2.8M de personas estimadas en riesgo de VBG

Aproximadamente **680 mil** en severidad aguda



Acción Contra Minas AcM

En 2023 **520.041** personas en **122 municipios** están en riesgo de sufrir un accidente por MAP/AEI/MSE o de ser confinadas o desplazadas por la presencia de estos artefactos explosivos, además de otras restricciones y prácticas de sus costumbres.



Agua, Saneamiento e Higiene

4.6M personas con necesidad y en **419 municipios** se concentran quienes tienen un nivel de severidad agudo (4 y 5)



Los municipios que concentran mayor población en necesidad están en el departamento de la Guajira.



El departamento con el mayor porcentaje de municipios con un nivel de severidad aguda es:

Chocó con el:

93%

Esto se relaciona con las bajas coberturas de servicios de Agua, Alcantarillado y Aseo, además de la baja vigilancia del agua para consumo.



Alojamiento y Asentamiento

3.3M personas con necesidad

sobre todo en acceso a artículos domésticos esenciales. Al menos **400k personas** requieren asistencia en un corto plazo.

La variabilidad climática cada vez mas impacta viviendas y pone en riesgo más municipios que en años pasados de manera prolongada (La Mojana).



Seguridad Alimentaria y Nutrición

7.1M de personas con:

necesidades en seguridad alimentaria y nutrición en **1122 municipios** en el 2023



6'827.069 para seguridad alimentaria



317.678 para nutrición



de los hogares de **23 ciudades** consumen **dos comidas o menos**

Fuente: DANE

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social>

*Instituto Nacional de Salud. Informes del evento- Vigilancia integrada en muertes en menores de 5 años (SE36), Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años (SE36) y bajo peso al nacer a término (SE24)



El estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años se ha afectado negativamente.

Entre 2021 y 2022 aumentaron en:

75%

Mortalidad por y asociada a desnutrición

49%

Prevalencia de desnutrición aguda

18%

Bajo peso al nacer a término*



Salud

6.3M personas con necesidad

Aproximadamente **5.3M** personas se encuentran en municipios donde la capacidad del sistema es insuficiente

3.2M personas se encuentran en zonas rurales afectadas por el conflicto y desastres naturales

En Colombia hay cerca de

1.3M personas

en condición de discapacidad que experimentan barreras para acceder a servicios de salud y equipos de apoyo biomotor, cognitivo y sensorial, habría que analizar la discapacidad por causas evitables y afectaciones por MAP y MUSE.



Con datos del DANE se observa que la población ha crecido más rápido que el número de personas aseguradas.

La población no asegurada ascendería a **3.6M**



Respecto a salud mental

En 2022 se evidencia aumento en los intentos de suicidio

27%

Esta situación afecta particularmente a las comunidades indígenas de la Amazonía, Chocó y Antioquia.



Educación en Emergencias

3.6M niños, niñas y adolescentes

con necesidades y en riesgo de acceder al derecho de la educación



Deterioro en la continuidad de los procesos educativos y la garantía del derecho a la educación en situaciones de emergencia, con las brechas más amplias en la educación inicial (más de 400 mil niños y niñas en necesidad) y media.

La dispersión geográfica y características socio-culturales, implican retos en el abordaje y la implementación de propuestas asociadas al acceso, permanencia, calidad y pertinencia del sistema educativo.



Por cuenta de fenómenos de variabilidad climática se han evidenciado graves afectaciones a la infraestructura escolar, que deja a niños, niñas y adolescentes sin asistir a clases o haciéndolo en condiciones inadecuadas e inseguras.

67 alertas humanitarias

recibidas por el clúster de Educación en emergencias por afectaciones en este sector, principalmente por impactos en áreas afectadas por desplazamientos y confinamientos.



Recuperación Temprana

5.6M en 193 municipios

requieren soluciones duraderas a las necesidades y garantizar ingresos y medios de vida en contextos de crisis

Severidad de las necesidades 2023

MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
676k	1.4M	4.6M	2.7M	394k

Severidad de las necesidades por nodos* de ruralidad

NODOS DE RURALIDAD	SEVERIDAD/ # MUNICIPIOS					TOTAL
	MÍNIMO (1)	ESTRÉS (2)	SEVERA (3)	EXTREMO (4)	CATASTRÓFICA (5)	
Ciudades intermedias	67	63	131	53		314
Ciudades y aglomeraciones	44	19	34	18	2	117
Rural	52	29	163	126	3	373
Rural disperso	31	11	114	142	20	318
TOTAL GENERAL	194	122	442	339	25	1.122
Participación %	17%	11%	39%	30%	2%	100%
Participación %	(Severidad 1 y 2) 28%		(Severidad 3,4 y 5) 72% PIN			

*Territorios con características homogéneas entre sí pero heterogéneas en comparación con otros nodos, conformando categorías de clasificación de desarrollo

 Para más información consulte: [Resultados PiN intersectorial, Colombia 2023](#)

Por población en situación de vulnerabilidad

GRUPO VULNERABLE	PERSONAS EN NECESIDAD
Personas que habitan en municipios con presencia de GANE	5.8M 
Niñas, niños y adolescentes	2.4M 
Comunidades afrocolombianas	1.4M 
Población adulto mayor	1M 
Comunidades anfitrionas	919k 
Afectados por variabilidad climática	793k 
Población Indígena	704k 
Personas desplazadas	578k 
Personas en condición de discapacidad	191k 
Personas confinadas	137k 

Las personas pertenecientes a los afectados por desastres naturales, comunidades de acogida y las personas que están bajo la influencia de grupos armados, pueden también hacer parte de otros grupos vulnerables al mismo tiempo.

La tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años se da por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años



AÑO	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
2017	13 
2018	14 
2019	14 
2020	12 
2021	13 
2022*	14 

Fuente DANE: Defunciones No Fetales-Estadísticas Vitales
*Proyectado (fecha de corte julio de 2022)






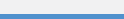
Por género

GÉNERO	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Mujeres	3.9M 	51%
Hombres	3.8M 	49%
Niños	1.2M 	16%
Niñas	1.1M 	15%

Por edad

EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Adultos (18 - 60)	4.2M 	56%
Adultos mayores (61+)	1M 	13%

Evolución anual de población en situación de desplazamiento

AÑO	VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
2017	131k 
2018	183k 
2019	166k 
2020	106k 
2021	198k 
2022*	155k 

*Fuente: UARIV (fecha de corte 31 de octubre 2022)

Aclaraciones técnicas:

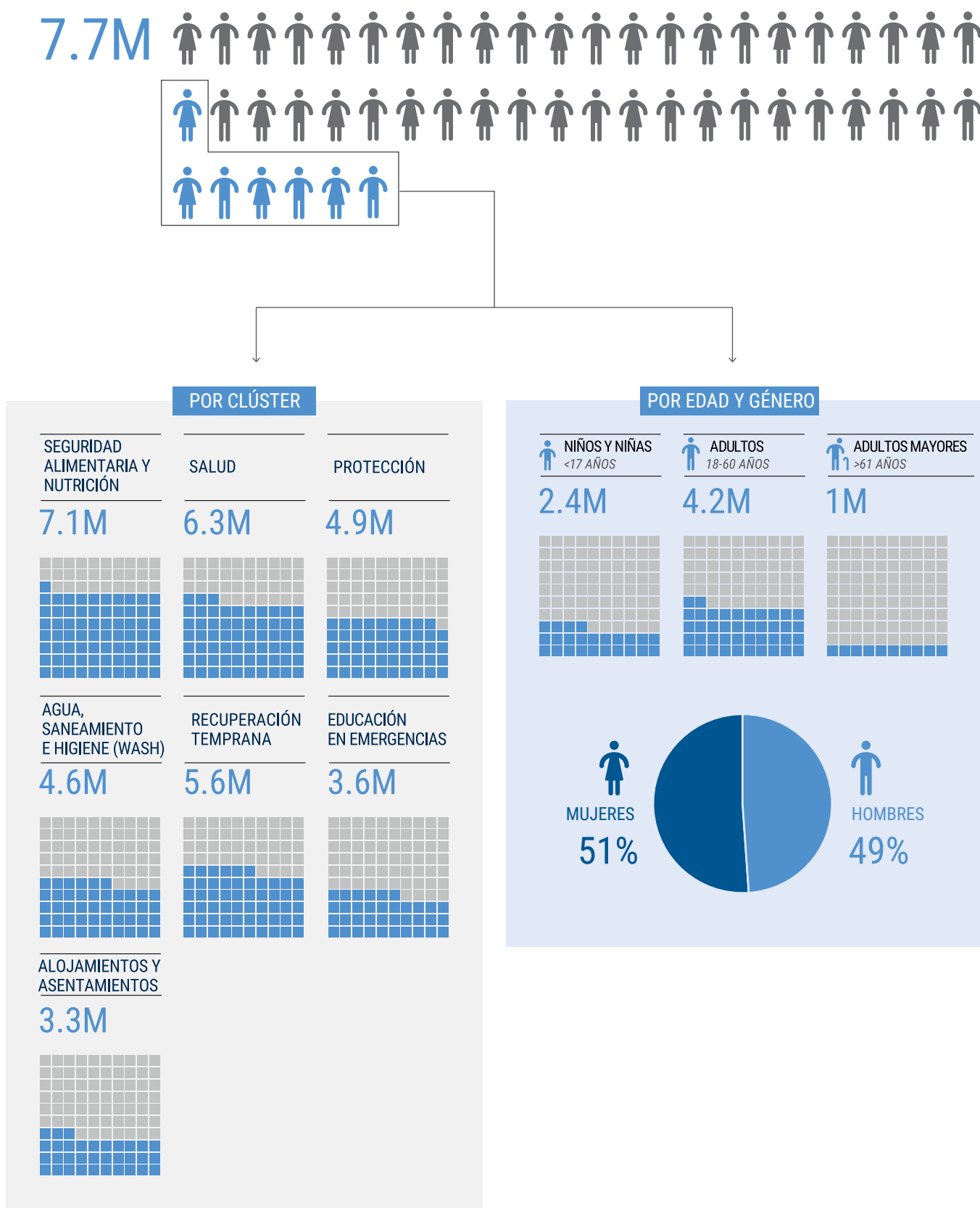
Para el presente análisis no se toma en cuenta:

- Los registros que no tienen código divipola en los municipios de ocurrencia.
- El tipo de desplazamiento que está "vacío" y que, por ende no especifica si es individual o masivo.

Para más información consulte:

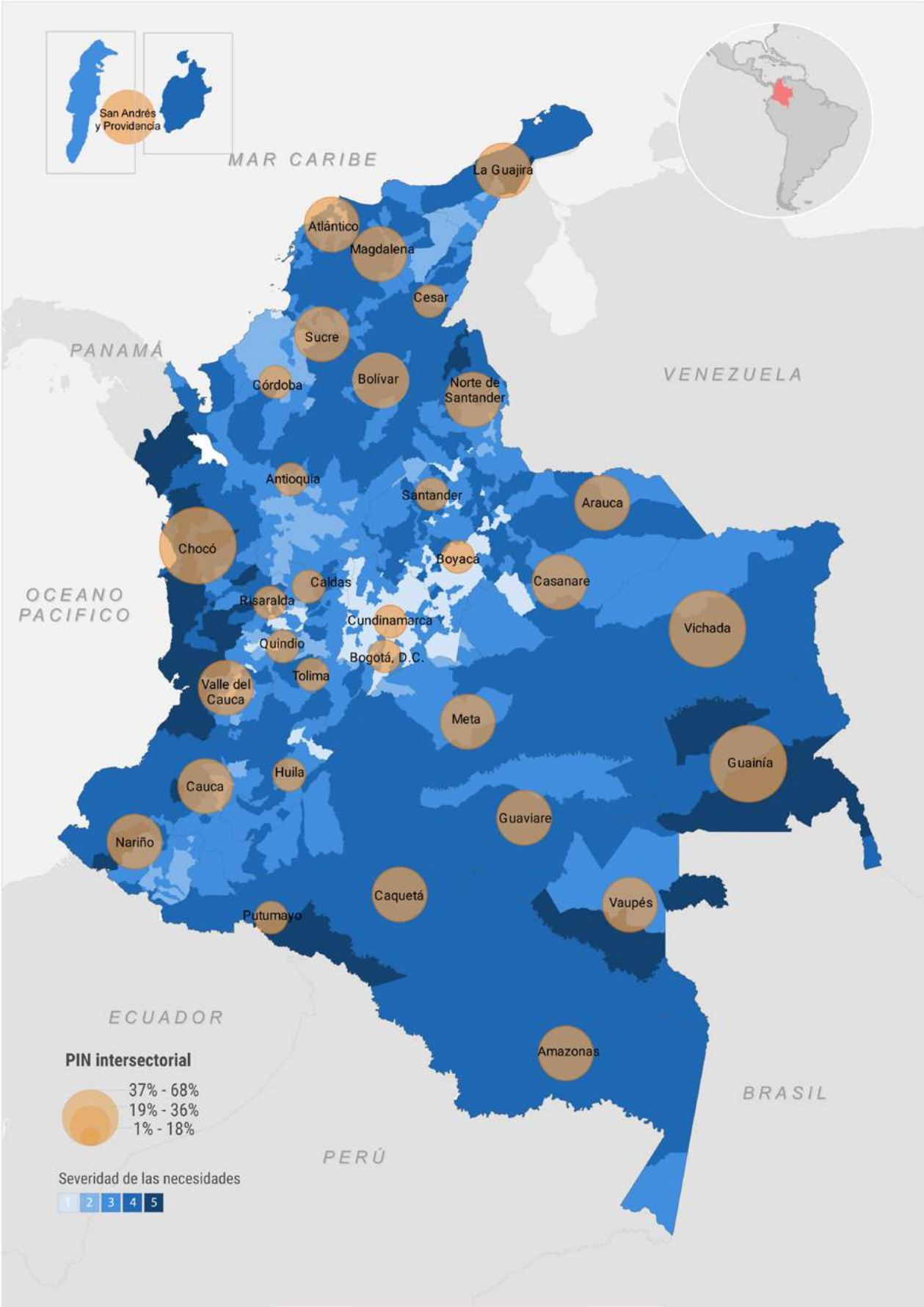
[PiN Intersectorial, Colombia 2023](#)
[Datos HNO Colombia 2023](#)
[Desagregación grupos vulnerables](#)
[Base desplazamiento individual UARIV](#)

Número estimado de personas en necesidad



Fuente: Monitor OCHA

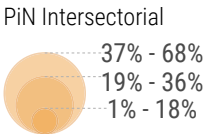
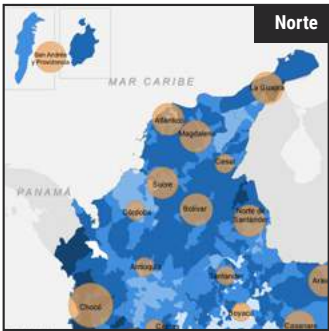
Severidad de las Condiciones Humanitarias y número de personas en necesidad



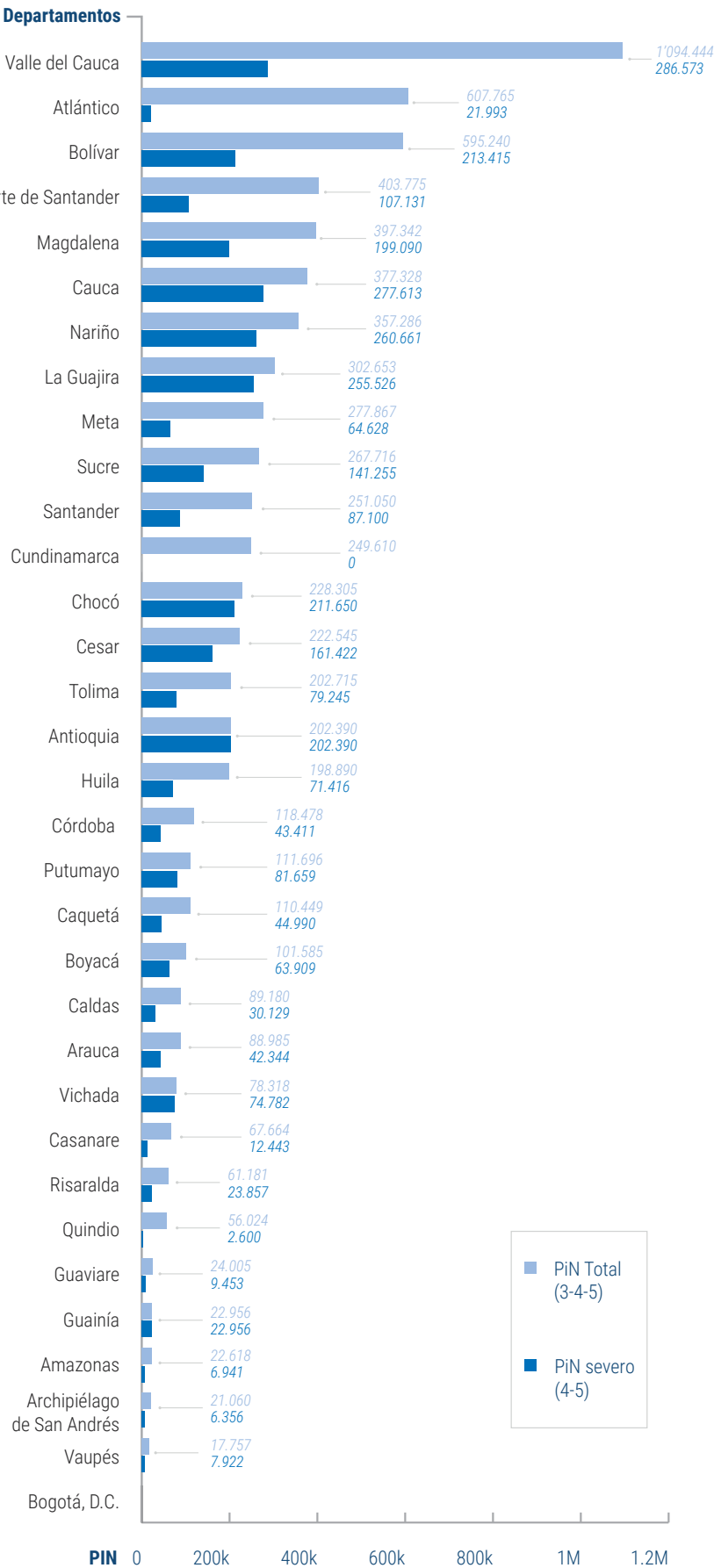
Para más información consulte: [Resultados severidades PiN intersectorial, Colombia 2023](#)

Fuente: Monitor OCHA

Personas en necesidad por departamento













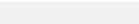
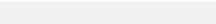
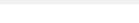
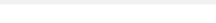



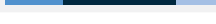











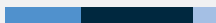








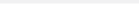
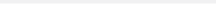
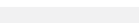
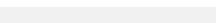
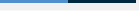


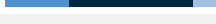

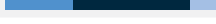


















Severidad de las necesidades



PIN por departamento, población y severidad

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE PERSONAS EN CADA NIVEL DE SEVERIDAD					PIN AGUDO (4-5)	PIN TOTAL
	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO		
Amazonas	-	-	15.677	6.941	-	6.941	22.618
Antioquia	-	623.376	482.388	202.390	-	202.390	202.390
Arauca	-	-	46.641	42.344	-	42.344	88.985
Archipiélago de San Andrés	-	-	14.704	6.356	-	6.356	21.060
Atlántico	24.711	-	585.772	21.993	-	21.993	607.765
Bogotá, D.C.	184.741	-	-	-	-	0	0
Bolívar	-	-	381.825	213.415	-	213.415	595.240
Boyacá	70.001	-	37.676	63.909	-	63.909	101.585
Caldas	25.691	62.604	59.051	30.129	-	30.129	89.180
Caquetá	-	-	65.459	44.990	-	44.990	110.449
Casanare	26.195	-	55.221	12.443	-	12.443	67.664
Cauca	-	70.111	99.715	264.515	13.098	277.613	377.328
Cesar	-	78.689	61.123	161.422	-	161.422	222.545
Chocó	-	-	16.655	82.927	128.723	211.650	228.305
Córdoba	4.807	280.485	75.067	43.411	-	43.411	118.478
Cundinamarca	137.951	7.680	249.610	-	-	0	249.610
Guainía	-	-	-	11.384	11.572	22.956	22.956
Guaviare	-	-	14.552	9.453	-	9.453	24.005
Huila	27.747	-	127.474	71.416	-	71.416	198.890
La Guajira	-	12.971	47.127	187.864	67.662	255.526	302.653
Magdalena	-	-	198.252	199.090	-	199.090	397.342
Meta	-	5.546	213.239	64.628	-	64.628	277.867
Nariño	-	125.118	96.625	218.324	42.337	260.661	357.286
Norte de Santander	-	15.208	296.644	89.448	17.683	107.131	403.775
Putumayo	-	-	30.037	72.923	8.736	81.659	111.696
Quindío	12.432	-	53.424	2.600	-	2.600	56.024
Risaralda	91.560	-	37.324	23.857	-	23.857	61.181
Santander	57.074	29.195	163.950	87.100	-	87.100	251.050
Sucre	-	-	126.461	141.255	-	141.255	267.716
Tolima	1.073	76.823	123.470	79.245	-	79.245	202.715
Valle del Cauca	12.220	41.554	807.871	187.631	98.942	286573	1.094.444
Vaupés	-	-	9.835	2.608	5.314	7.922	17.757
Vichada	-	-	3.536	74.782	-	74.782	78.318
TOTAL GENERAL:	676.204	1.429.360	4.596.405	2.720.793	394.067	3.114.860	7.228.877

PIN total desagregado por género, edad y personas desplazadas por departamento

DEPARTAMENTO	POR GÉNERO HOMBRES / MUJERES (%)	POR EDAD NIÑOS / ADULTOS / ADULTOS MAYORES (%)	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD(%)	PERSONAS DESPLAZADAS (QUE NO SUPERARON SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD)
Amazonas	52 / 48 	42 / 50 / 8 	3%	302
Antioquia	49 / 51 	30 / 57 / 13 	3%	97.758
Arauca	50 / 50 	34 / 57 / 9 	2%	16.164
Archipiélago de San Andrés	48 / 52 	27 / 58 / 16 	2%	0
Atlántico	49 / 51 	29 / 58 / 13 	1%	668
Bolívar	50 / 50 	32 / 56 / 12 	2%	31.404
Boyacá	51 / 49 	30 / 52 / 18 	4%	1.346
Caldas	50 / 50 	27 / 53 / 20 	4%	314
Caquetá	50 / 50 	35 / 55 / 10 	3%	11.268
Casanare	51 / 49 	34 / 56 / 10 	4%	681
Cauca	50 / 50 	30 / 57 / 13 	2%	31.930
Cesar	50 / 50 	36 / 54 / 10 	3%	3.575
Chocó	50 / 50 	39 / 52 / 9 	1%	60.319
Córdoba	50 / 50 	36 / 52 / 12 	1%	29.601
Cundinamarca	49 / 51 	28 / 60 / 12 	1%	452
Guainía	52 / 48 	48 / 46 / 6 	1%	723
Guaviare	53 / 47 	37 / 54 / 9 	2%	1.565
Huila	51 / 49 	33 / 54 / 13 	7%	3.619
La Guajira	49 / 51 	40 / 52 / 8 	1%	2.247
Magdalena	50 / 50 	33 / 55 / 12 	3%	3.740
Meta	50 / 50 	30 / 58 / 12 	2%	4.290
Nariño	49 / 51 	32 / 55 / 13 	3%	109.293
Norte de Santander	49 / 51 	30 / 57 / 12 	2%	79.846
Putumayo	50 / 50 	33 / 57 / 10 	3%	7.717
Quindío	49 / 51 	23 / 57 / 20 	5%	132
Risaralda	50 / 50 	28 / 53 / 19 	3%	2.557
Santander	51 / 49 	28 / 56 / 16 	3%	1.299
Sucre	50 / 50 	31 / 55 / 13 	4%	10.112
Tolima	51 / 49 	29 / 52 / 19 	4%	4.763
Valle del Cauca	47 / 53 	27 / 56 / 17 	2%	59.721
Vaupés	52 / 48 	52 / 42 / 6 	1%	236
Vichada	53 / 47 	44 / 50 / 6 	1%	1.016
TOTAL GENERAL:	49 / 51 	31 / 56 / 13 	2%	578.656

Para más información consulte: [Desagregación grupos vulnerables](#)

Parte 1:

Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias

CHOCÓ, COLOMBIA

Misión conjunta de visibilización en comunidades indígenas.

Foto: Claudia Rodríguez, OCHA Colombia, 2022.



“Somos hijas de cultura ancestral, de curanderos, parteras, sobanderas y de un pueblo alegre. El conflicto rompió nuestro proyecto social, nuestros sueños y anhelos. Pero somos mujeres guerreras y estamos aquí para construir. Tenemos ganas de vivir sin miedo”

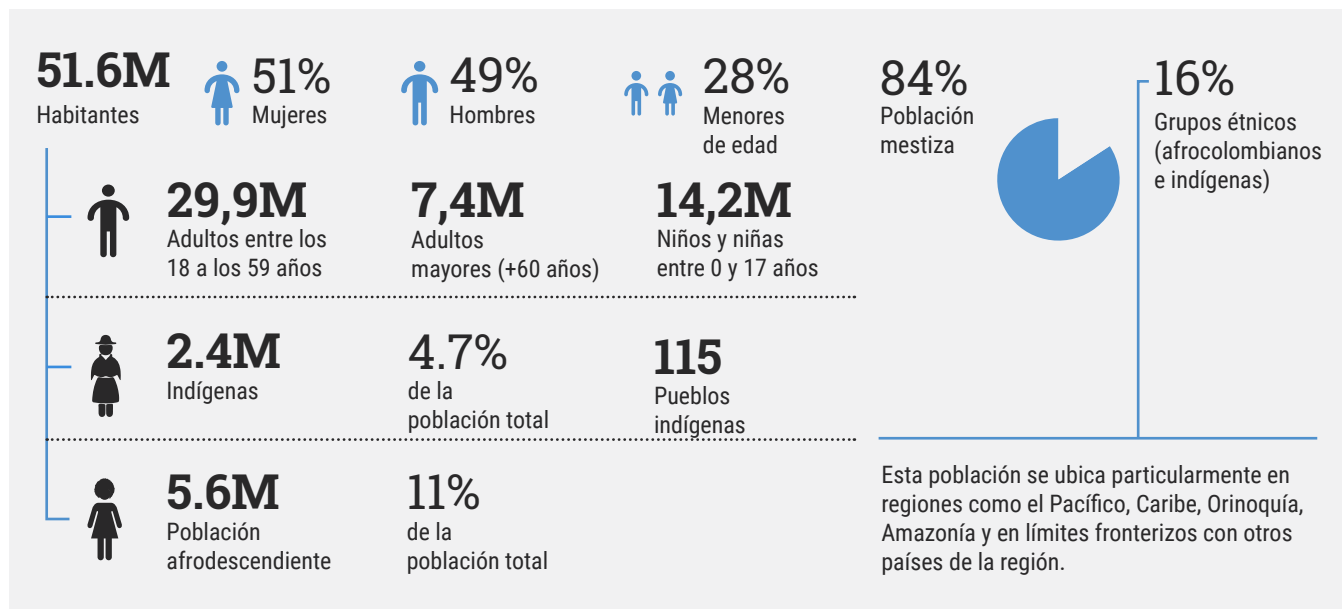
Lideresas y representantes de sobrevivientes de la violencia del Pacífico. Chocó, febrero de 2023.



1.1

Contexto de la Crisis⁴

Total población Colombia según proyección del DANE:



Fuente: Censo DANE 2018, cifras proyectadas a 2022



"Los grupos armados presentes en el territorio limitan mucho las actividades de caza y pesca"

Grupo Focal de Mujeres, MSNA en Quibdó, Chocó.

Durante los últimos cuatro años, se ha observado un proceso de fragmentación, expansión, y consolidación de diversos GANE que han buscado ocupar territorios en las zonas antiguamente controladas por las extintas FARC-EP. Si bien la Firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo un periodo de calma durante su negociación y posterior a su firma, para 2022, el CICR ha identificado que Colombia afronta seis conflictos armados internos (según su [Informe de Retos Humanitarios](#)). Estos conflictos se reflejaron directamente en acciones contra la población civil que generaron desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos, restricciones a la movilidad e impactos en la seguridad

alimentaria de la población y al acceso a servicios de protección, salud, educación, saneamiento básico y alojamientos temporales.

Las acciones de los GANE generan emergencias masivas por desplazamiento y confinamiento, afectando mayoritariamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas de las periferias del país. En enero y febrero, el país observó la intensificación de las acciones armadas de los GANE en la frontera con Venezuela, que generó desplazamientos masivos de población en búsqueda de protección internacional en los departamentos de [Arauca](#) y [Vichada](#), lo que a la vez resultó en un efecto *spill-over* de desplazamientos hacia Norte de Santander, Meta y Casanare. Las tendencias de desplazamiento están en aumento y a diciembre de 2022, la Unidad para las Víctimas ha registrado cerca de 164.400 personas desplazadas en eventos masivos y a nivel individual.

⁴ Para uso de este documento se entiende por crisis o emergencias las situaciones humanitarias ocasionadas por los factores de violencia y/o conflicto armado, los desastres agravados por el cambio climático entre otros que puedan llegar a generar afectaciones en la protección y/o la pérdida de medios de vida de la población civil.

Para más información consulte: [Cálculo PiN Intersectorial, fuentes secundarias](#)

De igual manera, en 2022 se rompió el récord con el mayor número de personas afectadas por confinamiento y restricciones a la movilidad desde que OCHA inició el registro de este impacto en 2008.

A lo largo del año se incrementaron las dinámicas de control social de los GANE en algunos territorios del país, especialmente en los departamentos del Pacífico, de la zona Noroccidental y de la frontera con Venezuela. Sumado a ello, se reportó un incremento en la instalación Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MSE) los cuales han resultado en el confinamiento de más de 102.300 personas⁵ la cifra más alta desde que OCHA inició sus registros. El 74 por ciento de la población confinada se encuentra en Chocó, con un impacto desproporcionado en comunidades indígenas y afrodescendientes. Así mismo, las restricciones a la movilidad son una estrategia implementada por los GANE para aumentar su control sobre el territorio y las poblaciones. En mayo, inició un [paro armado](#) y el denominado “*Plan Pistola*” por parte de un GANE que cuenta con presencia en los departamentos del Caribe, Pacífico y Urabá, donde por casi tres semanas seguidas 2 millones de personas reportaron restricciones a la libre movilidad y al transporte intermunicipal, homicidios selectivos, detención de personal de organizaciones humanitarias, entre otros hechos violentos.

Finalmente, en el mes de agosto de 2022, el Gobierno Nacional declaró la apertura de posibles escenarios de diálogo con diversos GANE en el marco de la Ley 418 de la Paz Total, y en diciembre se retomó la mesa de diálogos lo que tendrá implicaciones en los niveles de violencia que se observen en el 2023.

Además de la violencia, Colombia se enfrenta a fenómenos climáticos que han resultado en la prolongación de las necesidades humanitarias. Entre abril y septiembre la prolongación del Fenómeno de La Niña y las repercusiones del huracán Julia generaron nuevamente emergencias a gran escala por los efectos de las inundaciones. Según el [Reporte Global de Riesgo](#), Colombia hace parte de los países con mayor riesgo frente a desastres. En abril, la temporada de lluvias produjo cuatro nuevos rompimientos de los

jarillones en la subregión de [La Mojana](#), donde más de 166.000 personas de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia (11 municipios en total) se vieron afectadas. Así mismo, entre agosto y octubre, la temporada de lluvias y el paso del huracán Julia por el Caribe y Pacífico colombiano generaron que solo durante el mes de octubre del 2022 se afectaran a ocho veces más personas (131.000 personas) que, en el mismo mes reportado del 2021 en los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Cesar y Chocó. Los desastres por variabilidad climática han resultado en la pérdida de más de 182.000 hectáreas de cultivos, el daño parcial o total de más de 96.400 viviendas, y la afectación de más de 616.400 personas.

El contexto humanitario del país es más grave en departamentos donde se da una múltiple afectación como Chocó, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Vichada donde confluyen situaciones de múltiple afectación por la ocurrencia de desplazamientos, confinamientos e inundaciones. Estos departamentos reportan capacidades de respuesta muy limitadas tanto para llegar hasta las áreas afectadas como para brindar atención inmediata en todos los componentes, dadas las limitaciones presupuestales y de recurso humano; agravados por las restricciones de acceso impuestas por parte de los GANE.

Cabe resaltar que, mientras Colombia se enfrenta a los choques internos, también trabaja por brindar respuesta humanitaria y oportunidades de integración a millones de refugiados y migrantes, en su mayoría de Venezuela. Finalmente, se destaca la solidaridad de Colombia con la población migrante Venezolana (estimada en más de 2,5 millones de personas) a quienes se han ofrecido medidas de protección e integración lo cual ha implicado retos para la institucionalidad en cuanto a las garantías de servicios de protección social tanto para la población migrante como comunidades de acogida, en zonas donde han tenido acceso limitado a servicios de salud, educación, protección, entre otros. De especial interés son los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca que además de sufrir los efectos del conflicto armado también observan un alto impacto por los flujos migratorios mixtos.

⁵ Según monitoreo de los Equipos Locales de Coordinación registrados en el sistema Monitor.

Contexto demográfico, económico y ambiental



NARIÑO, COLOMBIA

Población de Barbacoas, Magüi, Roberto Payán.

Foto: OCHA Colombia, Felinto Córdoba,,2022.

Las comunidades en Colombia se enfrentan a grandes niveles de desigualdad y brechas para acceder a bienes y servicios básicos. En Colombia habitan 51.6 millones de personas, de las cuales el **38,2 por ciento** vive en situación de pobreza, el **19,2 por ciento** vive en situación de pobreza extrema y un 15 por ciento afronta necesidades humanitarias intersectoriales. Ante este contexto y el incremento de la tasa de inflación que se estima aún más en aumento durante el 2023 -especialmente frente a productos cuya cadena de valor incluye insumos importados-, preocupa que las familias en situación de vulnerabilidad no puedan acceder a bienes y servicios básicos, aun cuando se ha reportado, paralelamente, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un **12,6 por ciento** durante el 2022 y la **reducción** de la tasa de desempleo de 2,3 puntos porcentuales, con respecto al

2021. En ese sentido, se estima una **lenta recuperación** y crecimiento económico para el 2023 dadas las variables macroeconómicas descritas con anterioridad.

Adicionalmente, las personas que ejercen liderazgos sociales para solventar algunas de dichas desigualdades enfrentan múltiples riesgos que atentan contra su vida. En materia ambiental, la ONG Global Witness declaró a Colombia como el país más peligroso para los defensores de derechos medioambientales y derechos humanos con más de **322 líderes** medioambientales asesinados en la última década. En muchos escenarios, las personas defensoras de derechos humanos y los líderes medioambientales se ven coaccionados para disminuir su activismo y el consecuente impacto positivo que podría generar en las comunidades por cuenta de intereses económicos sobre estos territorios.

También, es de considerar la existencia histórica de conflictividades sobre la tenencia de la tierra en el país, situación que se ha hecho más evidente y relevante tras los anuncios del nuevo Gobierno nacional sobre el impulso de la reforma rural basada, en gran parte, en el punto 1 del Acuerdo de Paz del 2016. En este contexto, se destaca que el Gobierno nacional haya ratificado el [Acuerdo de Escazú](#) en pro de permitir el acceso

a los mecanismos de justicia enmarcados en la ley nacional en casos relacionados a cualquier tipo de violencia ejercida en contra de líderes defensores del medio ambiente y el llamado reiterativo en escenarios internacionales donde se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de la protección del Amazonas.

Marco legal existente



La arquitectura humanitaria en Colombia trabaja de manera coordinada con los marcos jurídicos e institucionalidad existente en el país. Los diferentes mecanismos como la Constitución Política, la adherencia a mecanismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la extensión de la ley de víctimas del conflicto armado (Ley 2078 de 2021), la ley de gestión de riesgo (Ley 1523 de 2012), entre otros mecanismos legales adaptados a las coyunturas de la situación interna, se implementan como el marco legal para coordinar y proveer asistencia humanitaria en el país.

A través de estos mecanismos, la población afectada por conflicto (especialmente por desplazamiento) y por desastres han sido registradas y han accedido a las rutas de atención. Al menos **9.4 millones** de personas se han registrado oficialmente bajo la ley de víctimas por diversos hechos victimizantes. De estas, 7,4 millones aún son sujetos de atención y reparación establecidas en la ley y el 89 por ciento corresponde a personas desplazadas internamente. Se destaca que, en 2022 se logró firmar el [protocolo nacional para la articulación de eventos de doble afectación](#) con el liderazgo de la Cruz Roja Colombiana. Este protocolo permitirá coordinar las acciones de respuesta desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y el Sistema para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y también facilitar la preparación y respuesta ante eventos masivos para atender a las víctimas del conflicto que además sufren las devastadoras consecuencias del cambio climático.

El marco legal también cubre los derechos especiales de los que son sujeto las personas de pueblos étnicos afectadas por necesidades humanitarias. En referencia a los derechos especiales de los que son sujeto las personas de pueblos étnicos, especialmente indígenas, el país está en línea con lo establecido en la Constitución de 1991, como lo es el Convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Más del **4 por ciento** de la población en Colombia (2 millones de personas) se autoreconoce como parte de uno de los 115 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Llama la atención que, según Autos de la Corte Constitucional, casi el **30 por ciento** de los pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción por cuenta del conflicto armado interno. En este panorama de necesidades humanitarias el EHP calculó que cerca de 705.000 personas indígenas y 1.4 millones de afrodescendientes afrontan necesidades humanitarias urgentes, especialmente en los departamentos de las regiones Pacífico y Centro-Sur.



"Las cosas han cambiado, no solo se quedan con nuestra comida, sino que las plantas pareciera que tienen miedo, están tristes, ya no quieren producir alimentos. Cuando uno entra al bosque ya los árboles no se mueven, los pájaros ya no cantan, la selva se siente sola se siente triste y eso nos preocupa porque todo es diferente ya nada es igual, cada día estamos más y más sumidos en las cosas difíciles que generan los grupos"

Miembro de la Comunidad Émbera en el municipio de Nuquí, Chocó.

CHOCÓ, COLOMBIA

Misión conjunta visibilización doble afectación en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Foto: Alejandra Jiménez, OCHA Colombia, 2022.

Contexto de Seguridad

El conflicto armado interno del país, producto de las dinámicas de expansión territorial y fragmentación de diversos GANE, se vio agravado durante el 2022. OCHA realizó un estudio sobre los impactos humanitarios en la población que habita zonas con presencia, injerencia o control de los GANE en Colombia⁶. De acuerdo con las estimaciones realizadas por OCHA, más de 7,2 millones de personas que habitan mayoritariamente zonas rurales de 462 municipios del país afrontan múltiples riesgos de protección por la presencia de los GANE, los cuales generan necesidades humanitarias intersectoriales en el corto, medio y largo plazo. Dichas

estimaciones se acercan a las mencionados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana [004-22](#) que indica que 521 municipios están en riesgo por la presencia de los GANE. El monitoreo de acciones de violencia armada en el país, realizado por los Equipos Locales de Coordinación y Equipos Humanitarios Locales, señala que, durante 2022, [3,2 millones de personas](#) han sido directamente afectadas por acciones armadas en contra de la población civil, entre las que se incluyen amenazas, restricciones a la movilidad, asesinatos y secuestros, entre otras.

⁶ Basado en reportes propios de OCHA, en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, datos de ACLED, entre otras fuentes.

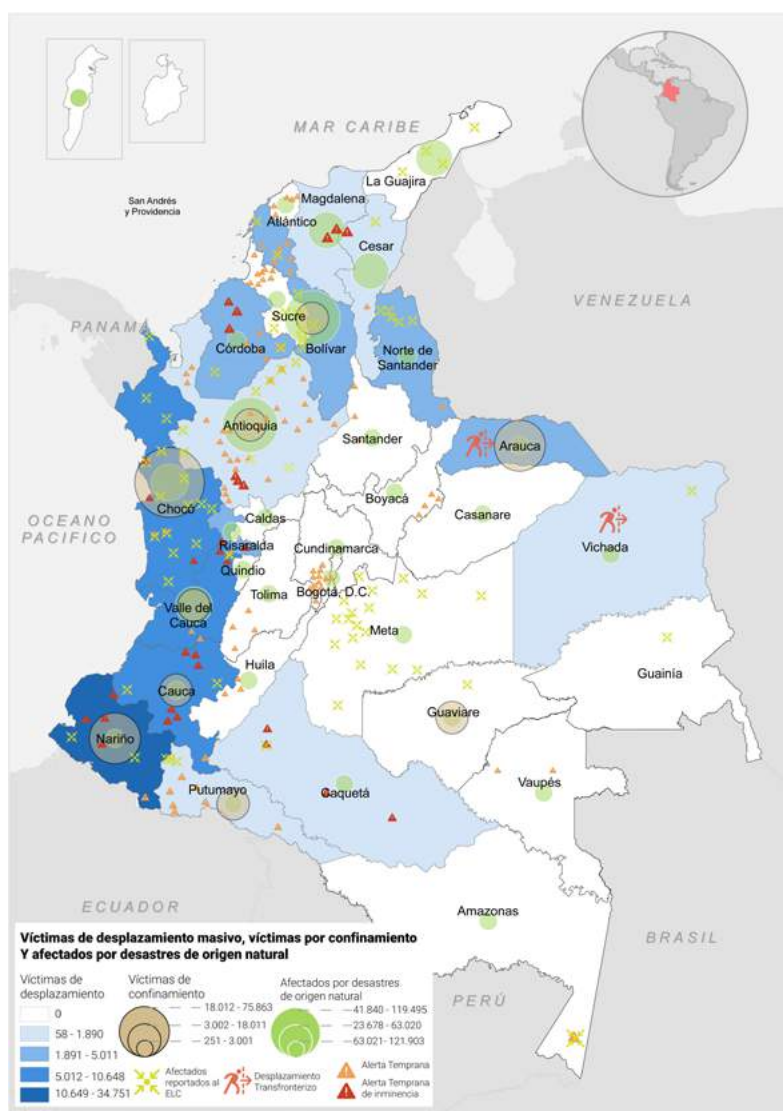
Es de destacar que la lucha por el control territorial de los GANE está ligada estrechamente a la expansión de sus formas de financiación, entre las que se mantienen las extorsiones, el contrabando, los retenes ilegales terrestres y fluviales, la explotación ilícita de minerales y petróleo, la siembra y procesamiento de cultivos de uso ilícito, la tala de árboles y tráfico de personas, madera, armas y drogas, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual y las actividades de agroindustria. Esto ha cambiado las dinámicas de interacción de los GANE con la población y ha exacerbado la violencia ejercida en los territorios, aumentando las disputas por el control sobre las economías ilícitas o generando alianzas

para el manejo de éstas. Así mismo, la continua fragmentación y/o multiplicación de los GANE resulta en continuas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos.



"Las juventudes son las más afectadas porque socialmente hablando son presionados a meterse a las bandas, en muchas ocasiones si no se meten matan a la familia, los de los grupos armados se fijan en las niñas y es un problema si dicen que no; con las fronteras (refiriéndose a las fronteras invisibles en los barrios) son más afectados los hombres porque los violentan mucho, sin preguntar quiénes son"

Grupo focal de Mujeres, MSNA en Quibdó, Chocó.



Se resaltan principalmente las repercusiones de la violencia en el Pacífico, la región Noroccidente, y la frontera con Venezuela; así como en la zona Centro-Sur -donde las emergencias masivas no son frecuentes pero se mantienen las restricciones a la movilidad, asesinatos selectivos, desplazamientos individuales y otras dinámicas de control social-; y nuevas zonas con reporte de violencia en 2022 como los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, en la región Caribe, que se ha constituido como un enclave para las economías ilícitas por su ubicación estratégica para la salida hacia el norte del continente.

Para más información consulte: [Afectaciones por conflicto armado, Monitor OCHA](#), y [Afectaciones por desastres de origen natural UNGRD](#)

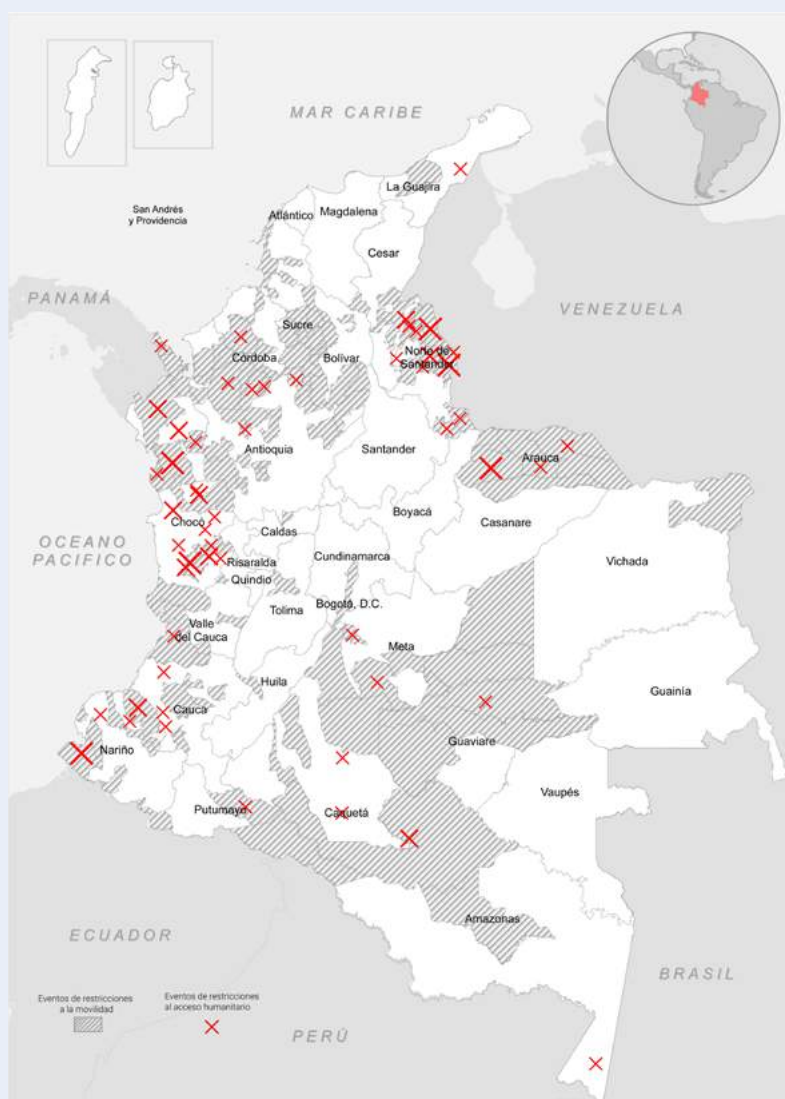
Acceso humanitario

Si bien el acceso humanitario en Colombia ha tenido una tendencia relativamente favorable, durante los últimos años ha incrementado el número de incidentes en contra de actores humanitarios, configurándose como un reto para llevar a cabo actividades de respuesta.

Entre enero y diciembre de 2022 se registraron **159 eventos** en contra de las organizaciones humanitarias y 199 relacionados a las restricciones en la movilidad y acceso a bienes, servicios o derechos para las comunidades. La mayoría de los incidentes de acceso estuvieron asociados a los anuncios de paros armados por medio de panfletos que han resultado en restricciones o interferencias a la movilidad de las agencias, el personal y

los bienes humanitarios dentro del país (46 registros). Los departamentos más impactados por estas restricciones fueron Antioquia, **Chocó**, Córdoba, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Cabe destacar que **los paros armados** se han configurado como una estrategia de los GANE para demostrar control sobre el territorio o posicionarse ante el Estado a través de amenazas, movilización de tropas y ejecución de acciones violentas ejemplarizantes que generan temor en la población. Estos eventos han impactado gravemente la capacidad de los trabajadores humanitarios para acceder a los lugares donde las comunidades evidencian necesidades multisectoriales, en tanto existen restricciones de movilidad estrictas impuestas por los GANE.

Restricciones a la movilidad y eventos de restricciones al acceso humanitario



Para más información consulte:
[Restricciones de acceso humanitario](#)

Las operaciones militares, amenazas y violencia contra el personal y los bienes humanitarios fueron los tipos de eventos predominantes (93%) de incidentes de acceso humanitario notificados en 2022 (45 eventos). Durante 2022 y con corte a diciembre, el 33 por ciento de los incidentes de acceso humanitario por estos motivos se concentró en los territorios fronterizos con Venezuela de Norte de Santander, Arauca y La Guajira; seguidos por Chocó (34%), Nariño (8%), Córdoba (6%) y Cauca (5%). La gravedad y el impacto de estos incidentes (por ejemplo, la [quema y robo de vehículos](#), [ataques directos](#), retención de las misiones y del personal, intimidación, etc.) han impedido brindar atención oportuna a la población. [La instalación de MAP/MSE y otros AEI](#) es la cuarta tipología que más afecta el acceso en Colombia. La región de frontera con Venezuela concentra el 82 por ciento de los incidentes de acceso por esta causa. Además de generar impactos en las comunidades, la instalación de estos artefactos también supone impedimentos para el acceso de equipos humanitarios ante el riesgo de caer en caminos minados o por la presencia de artefactos en las vías.

Las limitaciones de acceso producto del ambiente físico han sido los eventos más reportados, se relacionan con las condiciones meteorológicas, las deficiencias en la infraestructura vial y la ubicación geográfica de las zonas más afectadas. Debido a las particularidades geográficas del país, [la temporada de](#)

[lluvias agravada por el fenómeno de La Niña](#), ha tenido fuertes implicaciones en este aspecto, especialmente si convergen con una infraestructura vial deficiente. Los riesgos por causas naturales, como las inundaciones, los deslizamientos y vientos torrenciales han sido los eventos más recurrentes. Estas barreras han obstaculizado la respuesta a la emergencia y el levantamiento de información para la caracterización de las comunidades afectadas y el seguimiento de la situación humanitaria.



Si bien para 2022 los ataques contra misiones médicas disminuyeron en un 51 por ciento en 2022 (271 eventos frente a 553 en 2021), de acuerdo con el [Ministerio de Salud y Protección Social](#), se mantiene la preocupación por la ocurrencia de los mismos, especialmente en el departamento de Antioquia, donde se observó la persistencia de amenazas, lesiones personales, irrespeto a las prioridades médicas, ataques contra medios de transporte sanitarios y la obstaculización de la atención de heridos y enfermos. Este departamento concentra el 86 por ciento por todos los tipos de eventos ocurridos. Los cinco departamentos más afectados por este hecho son Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila y Valle del Cauca.

CHOCÓ, COLOMBIA

Misión conjunta de visibilización en comunidades indígenas.
Foto: Claudia Rodríguez, OCHA Colombia, 2022.




Línea de tiempo de eventos relevantes 2022

2022

Inicio de fuertes enfrentamientos entre GANE en Arauca

Dejando a

 **6.225**
personas
desplazadas

 **4.069**
personas
confinadas

Enero

Enero ----> Febrero

Incremento en el número de personas confinadas

Solo entre enero y febrero, unas **51.478** personas se vieron confinadas como consecuencia de las disputas entre grupos armados no estatales y su accionar.

Más del

85%

de personas confinadas se concentraron en el departamento de Chocó.



Febrero

Declaración de paro armado por parte del ELN

Dejando a más de **200.000** personas afectadas por restricciones a la movilidad en 8 departamentos.

Extradición de exlíder de las AGC y declaración de paro armado de las AGC

Dejando a **2 millones** de personas afectadas por restricciones a la movilidad en 5 departamentos de las regiones Pacífico y Caribe principalmente.

Mayo

Prolongación del fenómeno de la Niña

Agravando la afectación por inundaciones en la subregión de La Mojana.

Dejando un total de **166.000** personas afectadas.

Junio

Agosto ----> Septiembre

Repunte en el número de personas desplazadas en eventos masivos

Entre agosto y septiembre, alrededor de **20.928** personas se vieron desplazadas por emergencias masivas

Especialmente en la región Pacífico con cerca del

65%

de personas concentradas en la región

Así como en Bolívar y Norte de Santander.



Inicio de nuevo gobierno para el periodo 2022-2026

Inicio de Diálogos Regionales Vinculantes.

Agosto

Septiembre

Octubre

Afectaciones por temporada de huracanes y lluvias en el norte del país

Paso de Huracán Julia por la región Caribe del país, dejando a más de **159.000** personas afectadas en La Guajira, Atlántico y Bolívar.

Incremento de personas afectadas por la persistencia del fenómeno de la Niña en Chocó, con un total de **47.272** personas afectadas por inundaciones.

Por otro lado, en la Amazonía, se presentan inusuales sequías, disminuyendo de manera acelerada los niveles de los ríos.

Anuncio de ceses unilaterales al fuego por parte de diversos GANE, y posterior anuncio de cese bilateral al fuego por parte del gobierno nacional.

Radicación de la ley referente a la política de Paz Total del Estado

Incremento en hostilidades entre GANE en la región amazónica Resultando en el aumento de confinamientos y desplazamientos en Guaviare, Putumayo y Caquetá.

Diciembre

Noviembre

1.2

Choques e Impacto de la Crisis



NARIÑO, COLOMBIA

Mercado local en población de Barbacoas, Magüi, Roberto Payán.

Foto: OCHA Colombia, Felinto Córdoba,,2022.



"Nosotros lo único q queremos es vivir en paz en el territorio que nos dejaron nuestros padres"

Población afectada por el conflicto en Nariño.

Impacto por factores de la violencia armada y conflicto en las personas, los sistemas y en el acceso

La prolongación e intensificación del conflicto ha generado graves impactos humanitarios, especialmente en la protección de la población viviendo bajo injerencia de los GANE. En particular, la presencia activa de los GANE supone riesgos de reclutamiento, uso y utilización de la niñez, así como riesgos de VBG y por el uso de MAP. Adicionalmente,

se han evidenciado **graves limitaciones en el acceso a alimentos y a servicios básicos**. Es así que las restricciones a la movilidad, la imposición de estrictas normas de convivencia por los GANE, -aunado al impacto del fenómeno de la Niña, los rezagos de impacto socioeconómico por la COVID-19, las condiciones geográficas y estructurales de algunos territorios y las relativas a la inflación de los precios de los alimentos y fertilizantes, entre otros factores han derivado en una preocupante situación de inseguridad alimentaria que afecta a aproximadamente 21.5

millones de personas⁷, impacto que podría verse agravado con la continuación de la ola invernal y con los impactos económicos de la guerra en Ucrania. Se destacan las consecuencias que estas afectaciones tienen sobre mujeres, niños, niñas, adolescentes, y comunidades étnicas en el país.

Las afectaciones del conflicto armado van más allá de los desplazamientos y confinamientos. Durante 2022, al menos **2,9 millones de personas** (en 3.669 eventos) se vieron afectadas por el conflicto armado⁸. Estas afectaciones se enmarcaron en eventos como los paros

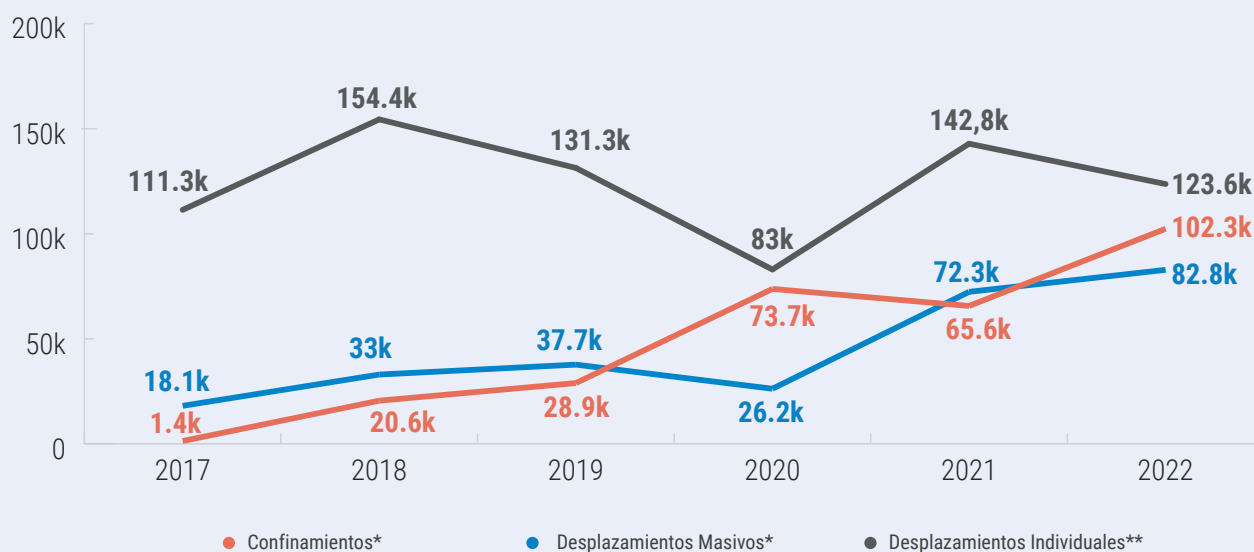


"Aquí todos sabemos que después de las 6:00 pm no podemos movernos, ni terrestre ni fluvial"

Comunidades rurales del sur de Córdoba

armados impuestos por los GANE en el primer semestre de 2022, que generaron restricciones a la movilidad y/o al acceso a bienes y servicios para la supervivencia de población rural y urbana (al menos 2,6 millones de personas), que además sufren por la imposición de normas de control e intimidación por parte de los GANE; por la misma causa también se suspendió la asistencia humanitaria en algunas comunidades, privando a 36.200 personas de recibir asistencia humanitaria por la cancelación de misiones. La presencia de estos grupos en el territorio nacional también ha generado el confinamiento de al menos 102.000 personas y el desplazamiento masivo de al menos 82.000 personas⁹. Por su parte, los registros de la UARIV indican que, hasta octubre de 2022, más de 155.400 personas han sido desplazadas forzosamente, de las que se estima que 123.000 lo han hecho de manera individual.

Evolución de desplazamiento y confinamiento



Fuente:

* Confinamiento y desplazamiento masivo - Monitor OCHA corte diciembre 2022.

** Desplazamiento Individual- UARIV corte junio 2022. Nota: No se toma en cuenta Los registros que no tienen código divipola en los municipios de ocurrencia.



Según información recopilada por el Foro de Organizaciones Humanitarias en Colombia, se pudo estimar que entre enero y diciembre de 2021 se vieron forzadas a desplazarse:

378.204

personas dentro del territorio colombiano por factores de violencia armada.

► [Más información](#)

se amplía en el enlace y mensajes de la página 34.

7 WFP (2022) Computer-Assisted Telephone Interviewing. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security- World Food Programme Official. Información del trimestre Enero-Marzo 2022. Boletín interno de WFP.

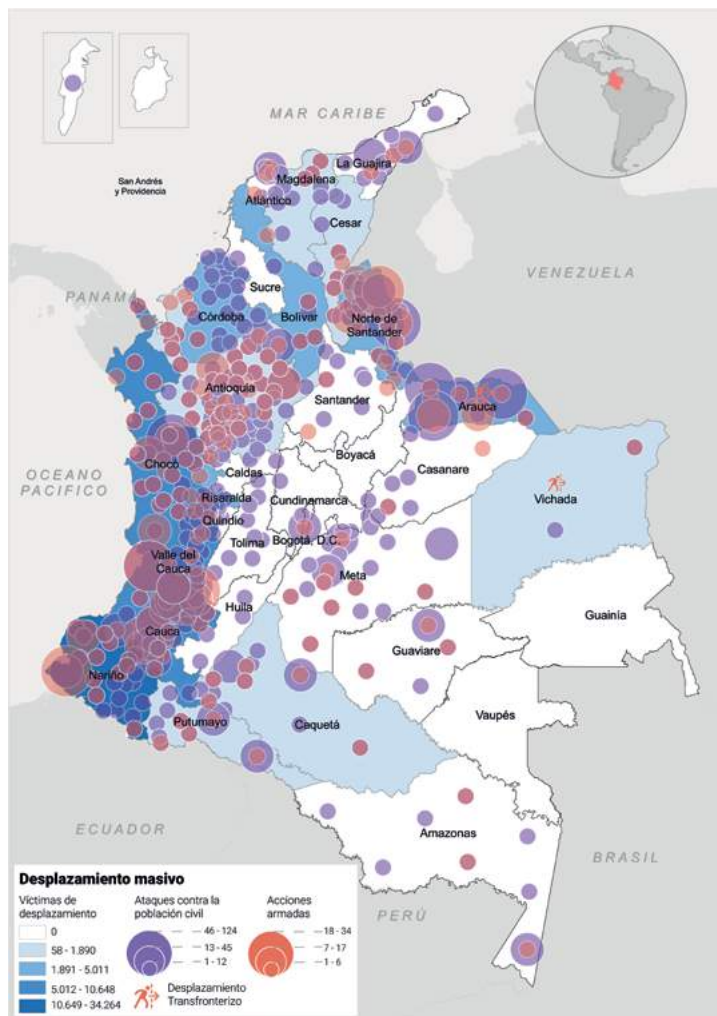
8 Según reportes de los Equipos Locales de Coordinación en el sistema Monitor.

9 Según reportes de los ELC y EHL consolidados por OCHA entre enero y diciembre de 2022.

Para más información consulte: [Histórico OCHA](#) y [Desplazamiento individual UARIV](#)

Impacto en las personas: desplazamiento interno

Desplazamiento masivo en 2022



NARIÑO, COLOMBIA

Desplazamiento de población indígena Awá en Llorente, Tumaco.

Foto: OCHA Colombia, Felinto Córdoba,,2022.



Para más información consulte: [Afectaciones por conflicto armado](#) , [Monitor OCHA](#)

Además, se evidencia un incremento en la utilización de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE) por parte de los GANE, especialmente en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito, despliegue de actividades de erradicación forzada y territorios en disputa por parte de los GANE como medida de defensa. Entre enero y diciembre de 2022, [Descontamina Colombia](#) ha registrado oficialmente 123 víctimas de MAP/MSE, incluyendo 9 niñas y niños y 34 personas de comunidades étnicas. Para 2023, el Área de Responsabilidad de Acción contra Minas del EHP estima que más de 520.000 personas de 122 municipios corren el riesgo de sufrir un accidente con MAP o MSE o de quedar confinadas o ser desplazadas debido a la contaminación por armas en sus territorios.

Personas desplazadas en eventos masivos

La tendencia de desplazamientos masivos está aumentando desde 2017 con emergencias más largas y miles de familias que se ven forzadas a no retornar a sus territorios de origen. Entre enero y octubre de 2022, al menos a 132.000 por desplazamiento forzado y 20.000 víctimas de confinamiento , entre otros hechos victimizantes¹⁰. no obstante, hay que considerar el subregistro y rezago de información que presentan los desplazamientos individuales, repercutiendo en las limitaciones o falta de acceso a la ayuda humanitaria por parte de las víctimas.

10 Según información del Registro Único de Víctimas (RUV). Es importante mencionar que la UARIV a corte de 31 de octubre de 2022.

Las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en situación de desplazamiento se enfrentan a graves necesidades intersectoriales de protección, alojamiento, seguridad alimentaria, salud y agua, saneamiento e higiene, entre otros. En las regiones del Pacífico, noroccidente, nororiente y suroriente del país, la capacidad limitada de recursos del primer respondiente genera demoras y vacíos en la respuesta a las personas afectadas; en la mayoría de los casos, no se asegura el acompañamiento a las familias desplazadas para un retorno seguro a sus lugares de origen, debido a las condiciones de seguridad inadecuadas por la presencia y accionar de los GANE. En 2022, se realizó una evaluación multisectorial de necesidades (MSNA) que indica que cerca del 94 por ciento de la población desplazada tiene necesidades no cubiertas en al menos un sector, frente a un 67 por ciento de la población de acogida -demostrando que la persistencia de vacíos en la respuesta a las necesidades sectoriales en la fase posterior de la emergencia suele ser común.

Además de las emergencias humanitarias por conflicto y desastres, los ataques en contra de la población en 2022 siguen teniendo un impacto relevante; estos incluyen ataques contra líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, masacres e inclusive acciones de violencia ejemplarizante por parte de los GANE para imponer códigos de conducta a la población civil. Esto implica que las afectaciones en la población no se presentan sólo a nivel de su integridad física, también es necesario considerar que las personas en necesidad afrontan graves consecuencias en su salud mental debido a la recurrente exposición a riesgos de protección por la presencia y accionar de los GANE y por el impacto desmedido de los desastres agravados por el cambio climático. La revictimización, en el caso de los choques de violencia, y la doble o múltiple afectación en contextos de desastres aumenta el tiempo de recuperación que pueden obtener las comunidades a través de soluciones duraderas.

NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Misión conjunta a municipio de Tibú.

Foto: Mariana Duque, OCHA Colombia, 2022.



"Yo quiero volver a mi casa porque aquí tengo mucho miedo y aquí no tenemos nada, necesitamos todo porque nos quedamos sin nada"

Población afectada por el conflicto en Nariño.



GUAJIRA, COLOMBIA

Mujer indígena habitante de la Alta Guajira.

Foto: Camilo Romero, UNICEF Colombia, 2022.



Las organizaciones del EHP han adelantado análisis complementarios sobre el desplazamiento forzado en Colombia basados en las cifras oficiales al igual que a través del uso de otras metodologías.

“Análisis sobre la tendencia de los eventos de desplazamiento y situación de vulnerabilidad de los hogares víctimas por hechos recientes de desplazamiento forzado en Colombia 2016 – 2022”. Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV con el apoyo de Blumont

El año 2022 rompe récord de afectación reportadas desde el Acuerdo de Paz y es necesario prestar atención especial a los desplazamientos individuales.

Dentro de los principales hallazgos del estudio de UARIV y Blumont, se destaca que el 2022 supera las afectaciones reportadas en 2016 (año de la firma del Acuerdo de Paz) e iguala las de 2018, con una probabilidad de llegar a al menos 250.000 víctimas por este hecho victimizante al final del año. También, de las 737.204 víctimas de desplazamiento forzado reportadas oficialmente desde noviembre del 2016 hasta mayo del 2022, un 79 por ciento (595.000 personas) corresponde a desplazamientos

individuales y el 21 por ciento (158.000) a desplazamientos masivos. Denotando la intensidad de los desplazamientos individuales como un fenómeno que requiere mayor visibilidad y atención.

Se reitera que los lugares más afectados son nuevamente las regiones Pacífico, noroccidente, nororiental y suroriental del país. Una alerta especial de la concentración geográfica es la situación de Sincelejo (quinto municipio con mayor recepción de desplazamientos desde 2016 y cuarto con mayor índice de presión después de Hacarí, Buenaventura y Ocaña) y el efecto que tiene la violencia y

desplazamiento del sur de Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño y sur de Bolívar en este municipio. En la mayoría de los desplazamientos recientes no se tiene certeza de la atención humanitaria inmediata brindada, el 36 % ha recibido atención humanitaria inmediata por parte de la UARIV en el marco del esquema subsidiario persistiendo las necesidades hasta un año después del evento (86% de las familias, según la aplicación del último instrumento de caracterización disponible, continúan con carencias extremas o graves de alimentación y alojamiento para su subsistencia mínima).



Para más detalle consultar el siguiente dashboard:

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/colombia-dashboard-desplazamiento-forzado-por-lugar-de-ocurrencia-y>

Encuesta de Situaciones Humanitarias Ronda 2 – el Desplazamiento Forzado Interno por los Conflictos Armados en Colombia es una Historia que Continúa. Foro de Organizaciones Humanitarias en Colombia

Una gran proporción de víctimas de desplazamiento forzado no están declarando oficialmente el hecho victimizante. Sobre los hallazgos del Foro con base en el monitoreo y recolección de información sobre **desplazamiento** realizado en población residente en Colombia, se resalta un preocupante **48 por ciento** de población desplazada durante el 2021 que no declaró su situación por temor, desconocimiento de las rutas de atención, desconfianza frente a una respuesta efectiva y obstáculos en la recepción de la declaración. Esta situación se replica en el 1,2 % de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela que ha tenido que desplazarse dentro de Colombia como consecuencia del conflicto armado y que no declaró el desplazamiento ante ninguna oficina del Ministerio Público (45% de esta población).

Las personas afectadas por desplazamiento requieren atención humanitaria inclusive cuando han retornado a sus lugares de origen. Del total de personas desplazadas en 2021 (**378.204 personas** en el

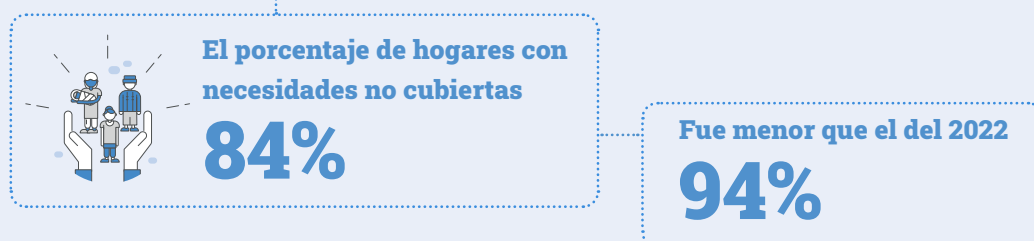
estudio del Foro), al menos el 67 por ciento ya habían retornado a sus territorios y el 14 por ciento restante, se encuentran en situación de calle, en albergues o en paga-diaros; denotando nuevamente necesidades para el fortalecimiento en alojamientos temporales y soluciones efectivas para evitar retornos sin garantías de dignidad, seguridad y voluntariedad.

Asimismo, el Foro estimó que, entre enero y diciembre de 2021, en Colombia se desplazaron 163.709 personas como consecuencia de desastres naturales o de origen antrópico, a la fecha de la encuesta 81 por ciento ya habían retornado. Ahora bien, en términos de protección, durante el primer semestre del 2022, el 3,9 por ciento de las personas reportaron que, en su comunidad o su familia, han estado expuestos al reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados y el dos por ciento reportó que han estado expuestos a la explosión de minas antipersonas o incidentes con **municiones sin explotar**.

Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) Colombia (2021-2022)

Considerando que la cobertura del 2021 y 2022 fue diferente, durante el 2022 se pretendió cubrir aquellas zonas, como el Chocó, Putumayo y Cauca con brechas de información que quedaron en 2021. A partir de un ejercicio comparativo¹¹ en siete municipios cubiertos en 2021 y 2022 (Arauca, Cúcuta, Mocoa, Pasto, Quibdó, Riohacha y Valle del Guamuez) para población de acogida, se observó un aumento de necesidades no cubiertas en 2022. En la mayoría de los municipios se observó un aumento del MSNI (que osciló entre 12 y 28 puntos porcentuales adicionales), con excepción de Mocoa y Valle del Guamuez donde se observó una ligera disminución.

Se observó que para la población desplazada interna a nivel agregado en el 2021:

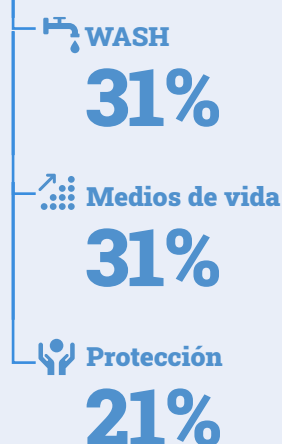


También se destacan otros aspectos relevantes como:

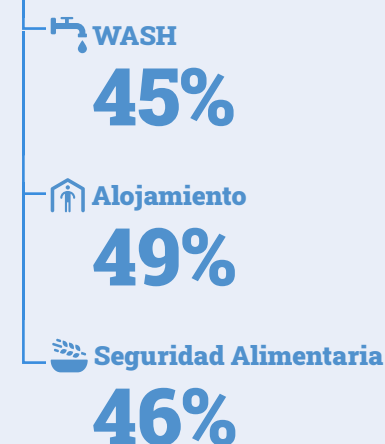
Los sectores con mayores necesidades sectoriales no cubiertas para la **población de acogida** en el año 2021 fueron:



Mientras que en 2022, los sectores que presentaron porcentajes más altos de necesidades fueron:



En 2021, los hogares de la **población desplazada** interna reportaron los sectores de:



11 La comparación de resultados entre 2021 y 2022 se hizo en 7 municipios cubiertos en ambos años donde se habían recolectado al menos 50 encuestas en cada uno: Arauca, Cúcuta, Mocoa, Pasto, Quibdó, Riohacha y Valle del Guamuez. Las variables utilizadas fueron de un lado indicadores idénticos y/o alineados entre ambos años que permitían una comparación, y del otro el Índice de Necesidades Multisectorial (MSNI) agregado a nivel hogar calculado en las dos ediciones. Los resultados son únicamente indicativos y no pueden ser extrapolados al resto de la población.

Tanto en 2021 como en 2022, coinciden tres sectores con las principales necesidades no cubiertas; sin embargo, para la población de acogida las proporciones de necesidad son más elevadas para los sectores de:



La comparación en

7 municipios cubiertos en 2021 y 2022

(Arauca, Cúcuta, Mocoa, Pasto, Quibdó, Riohacha y Valle del Guamuez) para población de acogida, se observó un **aumento de necesidades no cubiertas en 2022.**



Entre los dos años, el porcentaje de hogares que reportaron haber recibido ayuda, subsidio o apoyo de alguna persona o institución en los 30 días previos a la recolección de datos tendió a aumentar en la mayoría de los municipios (que osciló entre 3 y 18 puntos porcentuales adicionales), con excepción de Cúcuta y en Quibdó (este último reporta la proporción más baja de recepción de asistencia con 9 por ciento de los hogares en 2022 comparado a 21 por ciento en 2021).

Por su parte, **los hallazgos y tendencias más relevantes para los hogares entrevistados de Población de acogida¹² y Población desplazada interna (PDI) en 2022 y la zona del Occidente de Colombia incluyendo municipios del Pacífico y del norte de la Amazonía, así como en la frontera nororiental con Venezuela.**

En 24 municipios de ocho departamentos¹³ priorizados por el Equipo Humanitario País

(EHP), 14 organizaciones¹⁴ implementaron 1.982¹⁵ encuestas presenciales entre el 16 de mayo y el 27 de agosto 2022 a las dos poblaciones de interés, abarcando siete temáticas principales: Educación, Seguridad alimentaria y nutrición (SAN), Salud, Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Salud, Alojamiento, Protección, así como Medios de Vida¹⁶. Aun cuando en 10 municipios se alcanzaron resultados representativos para población de acogida¹⁷, los resultados agregados presentados en esta sección deben interpretarse de manera indicativa. Asimismo, se implementaron seis grupos focales de discusión (GFD) en Quibdó, Chocó para ambas poblaciones con el objetivo de brindar elementos de triangulación e interpretación a la evaluación. Los hallazgos clave presentados provienen principalmente del Índice de Necesidades Multisectoriales (MSNI)¹⁸, construido a su vez de índices sectoriales que identifican necesidades sectoriales no cubiertas (LSG).

12 Comunidades colombianas a las que llegan refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.

13 Arauca (Arauca), Cauca (Argelia, Caldono, Corinto, El Tambo, Guapí, Santander de Quilichao), Chocó (Quibdó, Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Novita y Niquí), La Guajira (Riohacha), Nariño (Pasto), Norte de Santander (San José de Cúcuta), Putumayo (Mocoa, San Miguel, Puerto Asís y Valle del Guamuez) y Valle del Cauca (Buenaventura). Cuatro municipios adicionales formaban parte de la cobertura original de la evaluación, sin embargo, por falta de acceso y cobertura por parte de socios en terreno no se alcanzó ninguna encuesta en: El Litoral de San Juan, Timbiquí, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo.

14 Los socios participantes para 2022 áreas de cobertura de OCHA/EHP fueron: REACH, ACH, WFP/PMA, UNICEF, FUPAD, HAI, APS, NRC, OCHA, FAO, UNFPA, OPS/OMS, ACNUR, Fundación Makikuna.

15 1204 de Población de acogida y 778 de Población desplazada interna.

16 Indicadores sectoriales construidos en consultación con Clústeres y Sectores humanitarios en Colombia.

17 Representatividad a nivel municipal en dos grupos donde la muestra fue alcanzada: 1) 90% de nivel de confianza y 10% de margen de error en Santander de Quilichao, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Mocoa y El Tambo. 2) 95% de nivel de confianza y 10% de margen de error en Arauca, Cúcuta, Pasto, Riohacha, San Miguel.

18 El Índice de necesidades multisectoriales (MSNI) mide las necesidades no cubiertas de un hogar determinado. En el marco del MSNI se asigna a cada hogar una puntuación de severidad expresada en una escala de 1 a 4+ (mínima, estrés, severo, extremo, extremo +). La puntuación del MSNI proviene de un agregado de escalas de severidad sectoriales que determina si el hogar tiene una brecha de nivel de vida (LSG por sus siglas en inglés) en un determinado sector y en qué nivel de severidad se encuentra; la escala de cada LSG es igual a la del MSNI y se considera que una LSG igual o superior a 3, representa una necesidad sectorial no cubierta.



VAUPÉS, COLOMBIA

Evaluación MIRA en Comunidad indígena de Bocas del Yi.

Foto: Andres Torres, OCHA Colombia, 2022.



En su segunda edición, la Evaluación de Necesidades Multisectoriales de Colombia (MSNA, 2022) indagó acerca de las condiciones de vida de los hogares colombianos y venezolanos¹⁹ en distintas zonas del país, con el objetivo de identificar potenciales necesidades humanitarias no cubiertas. Entre los resultados destacados están:

Porcentaje de la población encuestada

Dos tercios

67%

de los hogares de **población de acogida** reportaron tener al menos una necesidad no cubierta en uno o más sectores evaluados.

Por su parte, en hogares de **población desplazada interna** esta proporción abarcó la gran mayoría de los hogares

94%

resaltando el amplio impacto por este hecho.



La proporción de hogares con necesidades no cubiertas más elevada para **población de acogida** (al momento de la recolección de datos) se observó en:

La Guajira

94%

Seguido de Chocó

91%

Mientras, la **población desplazada interna** reportó la proporción más alta de hogares con al menos una necesidad no cubierta en:

Chocó

99%

(especialmente en los municipios rurales fuera de Quibdó, la capital del departamento).

¹⁹ En 2022 la MSNA incluyó también poblaciones prioritarias para Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), sin embargo, esta sección se enfoca únicamente en resultados de poblaciones de interés para el Equipo Humanitario País.



WASH

31%



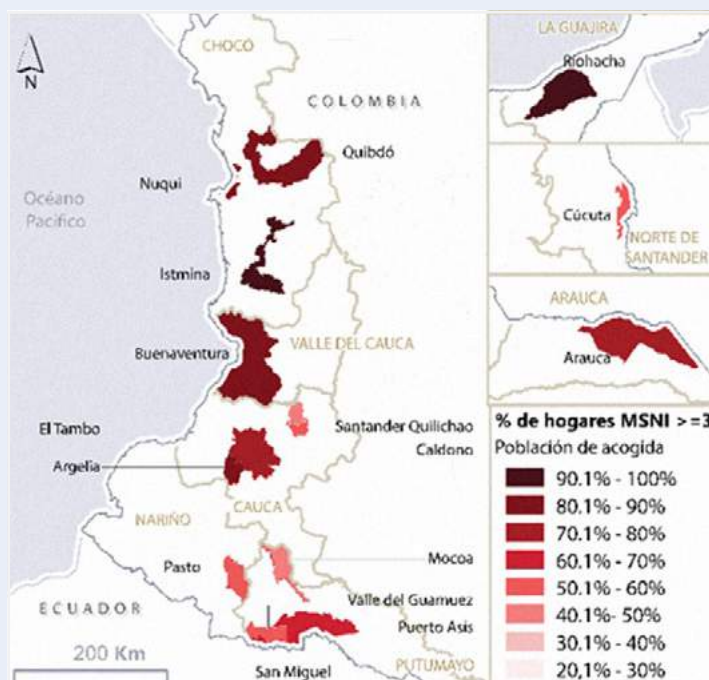
Medios de vida

31%



Protección

21%



fueron los sectores que presentaron porcentajes más altos de necesidades no cubiertas para **población de acogida**. Como elemento de interpretación, durante los GFD de población de acogida reportó el uso estrategias de afrontamiento negativas en WASH, como beber agua de lluvia o del río e implementar sistemas de alcantarillado improvisados hacia el río, ante la generalizada falta de infraestructura de agua potable y sistemas de manejo de aguas residuales en el Chocó.

La necesidad reportada como la más prioritaria según la percepción de los hogares de Población de acogida fue:

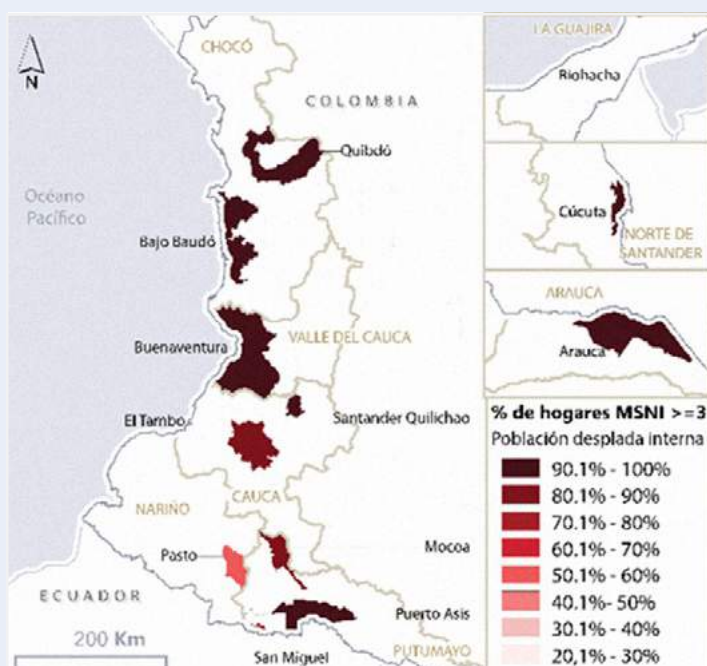
Comida

67%

Seguida por Empleo o generación de recursos

63%

En menor proporción, algunas necesidades sobresalieron según el departamento, como: Educación para niños, niñas o adolescentes en Valle del Cauca (38%), agua potable en La Guajira (37%) y atención médica en Cauca (30%).



En lo que respecta a la **población desplazada interna**, las tres principales necesidades sectoriales no cubiertas fueron las mismas en comparación con la población de acogida, pero con proporciones más elevadas de necesidad:



WASH

66%



Medios de vida

57%



Protección

53%



En cuanto a medios de vida, durante los GFD los participantes abordaron diversas barreras de acceso a los mismos, por ejemplo: la falta de oportunidades de empleo, las condiciones de seguridad en la zona que limitan su movilidad o la contaminación medioambiental para la pesca.

Más de un tercio de los hogares de población de acogida

35%

indicaron tener una necesidad sectorial no cubierta en dos o más sectores simultáneamente, mostrando la interconexión de estas necesidades.

Esta proporción es más del doble para población desplazada interna

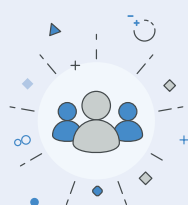
76%

y en ambos casos los dos sectores más comúnmente relacionados fueron WASH y Medios de Vida.

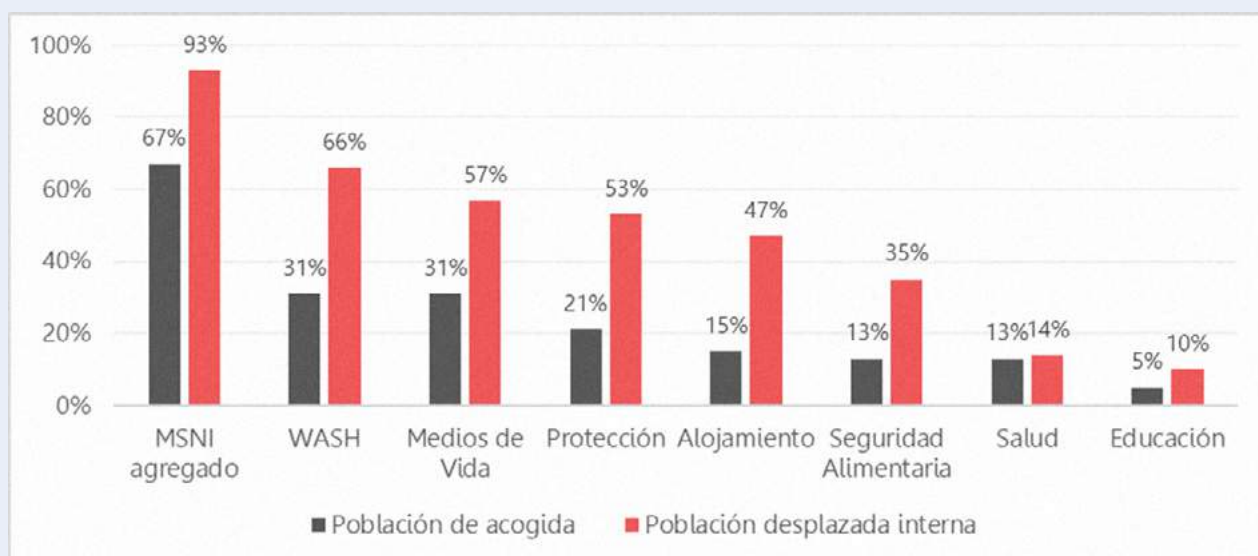


"...las personas que quieren volver a sus comunidades, son desplazados y están aguantando hambre y lo que quieren es volver a sus comunidades; nosotros no queremos ayuda humanitaria para solucionar lo que necesitamos ahora, queremos volver a las comunidades"

Grupo focal de Hombres, MSNA en Quibdó, Chocó.



Proporción de hogares que reportaron necesidades no cubiertas por sector y por población



Para ampliar información sobre los hallazgos de las MSNA en 2022 y 2021, consulte el

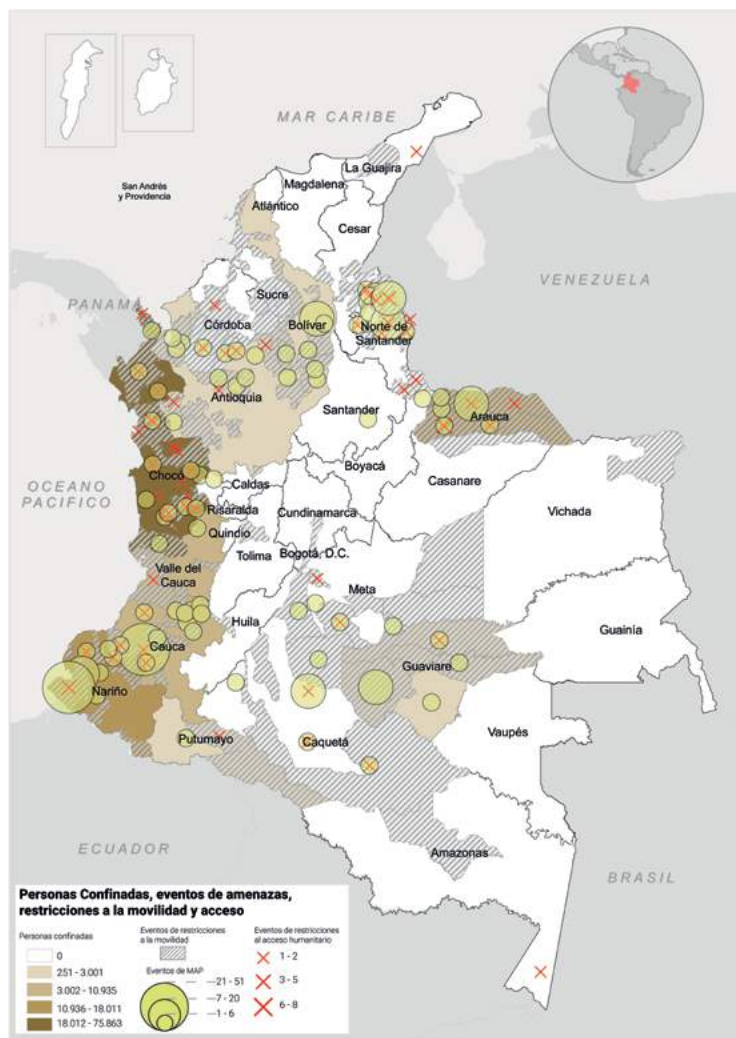
Centro de recursos de REACH para Colombia - [MSNA 2021](#) y [MSNA 2022](#)

Personas confinadas

El 2022 se ha configurado como el año con mayor número de confinamientos desde que OCHA empezó el monitoreo de este hecho victimizante en 2008, dejando impactos diferenciales en niños y niñas, población afrodescendiente y población indígena. Chocó es el departamento más afectado por confinamientos recurrentes, a diciembre de 2022, 75.800 personas fueron confinadas en este departamento, seguido de Nariño (10.800 personas) y Arauca (7900 personas). Según el EHP, entre los principales impactos generados por las situaciones de confinamiento se encuentra el aumento de casos

de desnutrición e inseguridad alimentaria por la falta de acceso a cultivos por periodos prolongados, las afectaciones en la salud mental, que se traducen en casos de suicidios de jóvenes y mujeres (especialmente en comunidades indígenas) por la pérdida de roles y las amenazas de reclutamiento forzado, el debilitamiento de las estructuras organizativas y casos de mortalidad materna por la falta de acceso a servicios de salud. Durante el 2022 se evidenció un incremento del 55 por ciento en el total de personas confinadas registradas por OCHA en el 2022 (102,000 personas²⁰ con relación al 2021 (65.685 personas).

Confinamientos en 2022



Tendencia confinamientos 2012-2022



Fuente: Monitor-OCHA



"No nos dejan ir a los cultivos y ahora estamos comiendo solo hierba y la boleja con sal se la damos a los niños"

Comunidad Nejondó, Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, Tierralta (Córdoba)

En el [estudio desarrollado durante el 2022 por el Foro de ONGs Humanitarias en Colombia y la Federación Nacional de Personeros](#), se resaltan diversos obstáculos que enfrenta la población confinada a la hora de acceder a las rutas de atención.

► Más información

20 Con corte a Noviembre 2022

Para más información consulte: [Afectaciones por conflicto armado](#) e [Histórico OCHA](#)

En el estudio en el que participaron 268 personerías municipales, se identificó que, en el 18,5 por ciento de los municipios se considera que potencialmente hay confinamiento consecuencia del conflicto armado sin registrar. En el 6,9 por ciento de los casos las Personerías saben que hay confinamientos en donde no se ha logrado hacer censo ni declaración, el 11.6 por ciento consideran que es posible, que haya confinamientos en sus municipios, pero no están seguros de que esta sea la situación. En ese sentido se evidencia la preocupación por las capacidades limitadas (presupuestales y técnicas) de las Personerías municipales para llegar hasta las comunidades afectadas y verificar la situación de confinamiento, así como para lograr tomar las declaraciones de la totalidad de la población.

Las principales razones por las que las comunidades se declaran confinadas se asocian a la presencia y accionar armado de los GANE, incluyendo amenazas,

homicidios, instalación de MAP/MSE, reclutamiento forzado, enfrentamientos entre GANE, ataques directos contra la población civil, entre otros. Los confinamientos evidencian una nueva estrategia en medio de las disputas por parte de los GANE al lograr mayor control de la población, al tiempo que invisibiliza otros impactos y agresiones que se cometen contra los civiles durante las restricciones.

Adicionalmente, las restricciones en la movilidad (que no configuran un confinamiento en el marco legal colombiano) de las comunidades incrementaron en 2022, principalmente por los paros armados realizados por GANE en los meses de febrero y mayo. Según registros de OCHA, se conoce de al menos 2,7 millones de personas que han afrontado restricciones a la movilidad en 2022 donde se vio afectado el acceso a asistencia humanitaria interinstitucional e interagencial.

REGIÓN DE LA MOJANA, COLOMBIA

Población con restricciones de movilidad por inundaciones.

Foto: Laura Arias, OCHA Colombia, 2022.



“En todos los barrios son difíciles en tema de seguridad, cuando íbamos a los ríos a lavar a veces nos tocaba salir corriendo porque iniciaban tiroteos, las reuniones comunales también se dejaron de hacer porque después de las 6:00 p.m. la seguridad es muy difícil; los robos han aumentado mucho; y las niñas se meten con los malos”


Grupo focal de Mujeres, MSNA en Quibdó, Chocó.



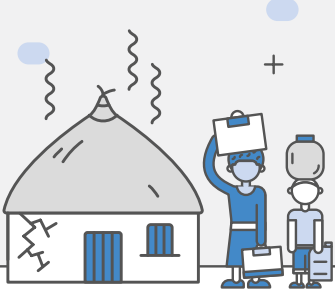
1.3

Alcance del Análisis

Cifras actuales

PERSONAS EN NECESIDAD	TENDENCIA (2015-2023)	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	GRUPOS ÉTNICOS
7,7M		50,6%	31%	28%

El Panorama de Necesidades Humanitarias busca identificar el número de personas con necesidades humanitarias intersectoriales que resultan de las dinámicas del conflicto armado y los eventos producto de la variabilidad climática; manteniendo un enfoque particular en zonas rurales que cuentan con una baja capacidad de respuesta institucional y áreas donde existen situaciones de múltiple afectación en Colombia.



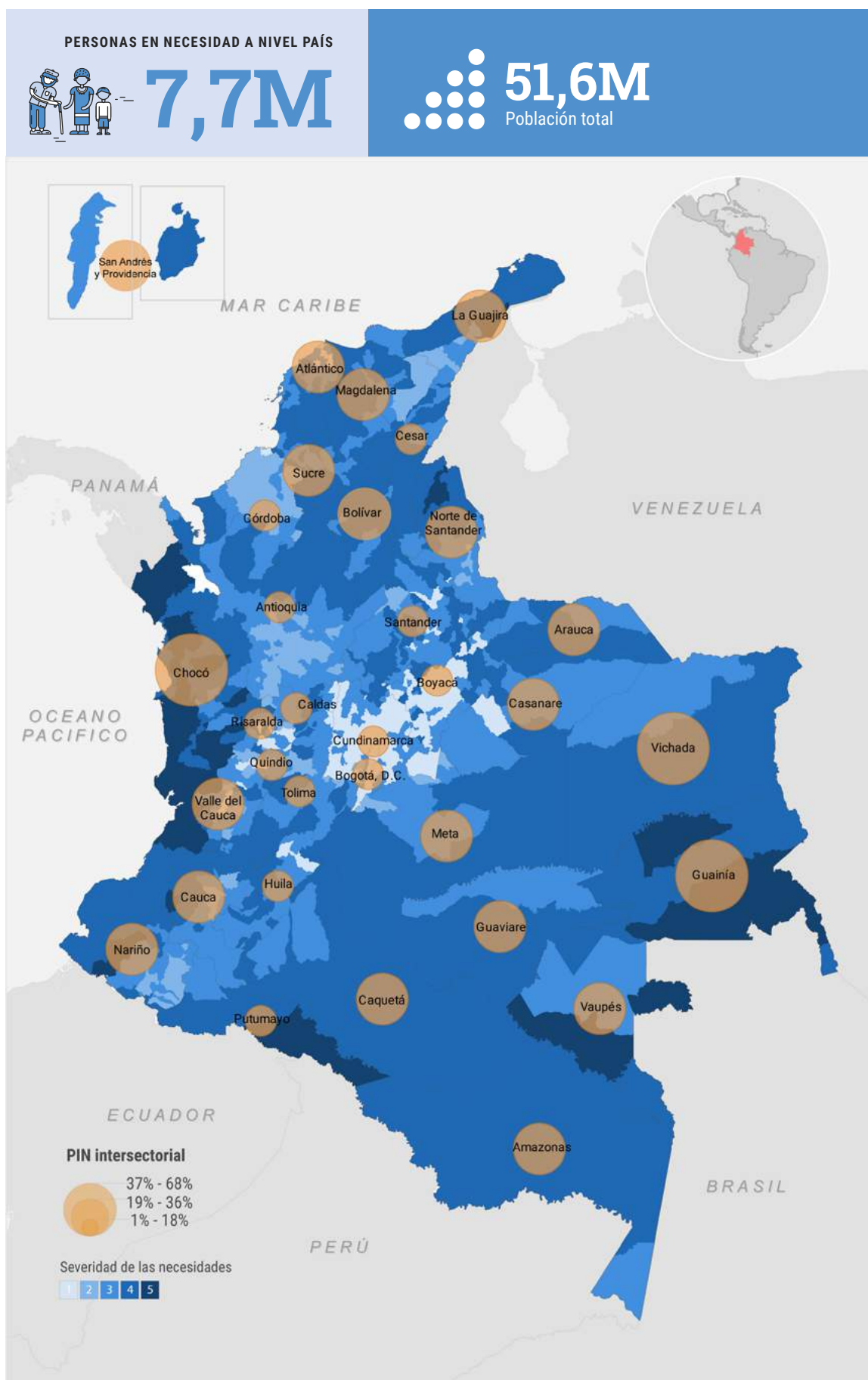
Además, el HNO intenta establecer el nivel de severidad de las afectaciones para sustentar las prioridades de respuesta humanitaria. El HNO considera de manera transversal a los grupos 12 grupos poblacionales vulnerables: i) personas que viven bajo la presencia, injerencia y/o control de los GANE; ii) las niñas, niños y adolescentes; iii) las mujeres, iv) hombres adultos; v) los adultos mayores, vi) las personas con discapacidad, vii) los pueblos afrocolombianos, viii) los pueblos indígenas; ix) las personas desplazadas que no han superado su situación de vulnerabilidad; x) las personas confinadas que sufren restricciones a la movilidad y al acceso prolongadas; xi) las personas afectadas por desastres y xii) las comunidades anfitrionas que reciben a personas desplazadas y/o afectadas por desastres.

El HNO hace un análisis cuantitativo y cualitativo en consulta con los socios de Equipo Humanitario País (EHP), los 15 equipos locales de coordinación

(ELC) y equipos locales humanitarios (EHL); el monitoreo remoto realizado en los 17 departamentos restantes, incluyendo el distrito capital, la Unidad para las Víctimas (UARIV) y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a nivel técnico, representantes de la sociedad civil y pueblos étnicos, y directamente con las comunidades afectadas, a través de procesos de consultas y aplicación de evaluaciones de necesidades como los MIRA y en particular el MSNA 2022.

Como resultado, se identifican geográficamente a municipios en Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Guainía con las necesidades más críticas dada su dispersión en zonas rurales donde la presencia integral de las instituciones del Estado es débil o nula, sumado a las fuertes restricciones de movilidad de las poblaciones y restricciones de acceso para las organizaciones humanitarias por la presencia y accionar de los GANE.

Personas en necesidad y niveles de Severidad 2023



Para más información consulte: [Resultados PiN Intersectorial, Colombia 2023](#)

Alcance del Análisis en Colombia



VAUPÉS, COLOMBIA.

Evaluación MIRA en Comunidad indígena de Bocas del Yi.

Foto: Andres Torres, OCHA Colombia, 2022.

CONDUCTORES



Factores de violencia
y conflicto armado



Variabilidad
climática

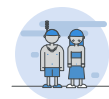
GRUPOS VULNERABLES



Desplazados/Confinados



Población bajo
control/influencia GANE



Comunidades
étnicas



Mujeres, hombres,
niños y niñas



Adultos mayores/
Personas en situación
de discapacidad



Comunidades anfitrionas/
Afectados por variabilidad
climática

NECESIDADES SECTORIALES



Mortalidad/
morbilidad



Inseguridad alimentaria
severa/malnutrición



Barreras de acceso a
servicios/bienes/derechos



Acceso a medios
de vida

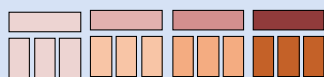


Pobreza
multidimensional

Evaluaciones
Datos cualitativos

MSNA, otras evaluaciones
PIN sectorial y severidad

Necesidades
intersectoriales
sectoriales



+



+



=

PIN
intersectorial/
Severidad

El análisis de necesidades humanitarias en Colombia se llevó a cabo con el marco JIAF. Ver anexo

PiN de grupos vulnerables por departamento

DEPARTAMENTO	INTERSECTORIAL	INDÍGENAS	AFROS	NIÑAS	NIÑOS	NIÑAS Y NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS MAYORES	MUJERES	HOMBRES
Amazonas	22.618	13.877	293	4.619	4.855	9.474	11.367	1.777	10.882	11.736
Antioquia	684.778	10.762	131.185	100.662	105.792	206.454	389.700	88.623	346.149	338.628
Arauca	88.985	2.422	4.495	15.005	15.657	30.662	50.381	7.942	44.278	44.707
Archipiélago de San Andrés	21.060	31	16.052	2.781	2.859	5.640	12.142	3.278	10.884	10.176
Atlántico	607.765	6.510	72.549	86.430	89.636	176.066	351.911	79.788	312.311	295.454
Bolívar	595.240	1.675	173.938	92.358	97.085	189.443	331.466	74.332	299.398	295.843
Boyacá	101.585	3.784	3.710	14.840	15.780	30.619	52.548	18.417	49.436	52.149
Caldas	89.180	4.187	6.134	11.432	12.213	23.645	47.622	17.913	44.505	44.675
Caquetá	110.449	2.894	3.824	18.914	19.822	38.737	60.524	11.188	54.822	55.627
Casanare	67.664	2.400	1.161	11.087	11.688	22.775	38.025	6.864	33.184	34.480
Cauca	377.328	105.319	114.235	55.938	58.220	114.158	213.266	49.903	189.409	187.919
Cesar	222.545	7.498	44.732	39.167	40.492	79.659	120.254	22.632	111.635	110.910
Chocó	228.305	48.632	165.870	43.168	44.925	88.094	118.663	21.548	114.416	113.889
Córdoba	118.478	30.137	16.242	20.682	21.598	42.280	62.209	13.989	58.675	59.803
Cundinamarca	249.610	611	2.835	33.946	35.344	69.290	150.834	29.486	126.767	122.843
Guainía	22.956	17.738	176	5.359	5.639	10.998	10.433	1.316	10.889	11.858
Guaviare	24.005	2.623	1.139	4.337	4.517	8.854	12.986	2.164	11.318	12.687
Huila	198.890	3.509	3.011	32.329	34.115	66.444	107.197	25.249	98.012	100.878
La Guajira	302.653	175.276	32.406	58.978	60.739	119.717	159.532	23.404	154.864	147.789
Magdalena	397.342	6.280	49.883	64.566	68.071	132.637	218.258	46.447	198.435	198.907
Meta	277.867	6.462	6.495	40.370	42.609	82.979	160.607	34.281	137.869	139.998
Nariño	357.286	79.820	165.320	55.791	58.129	113.920	198.081	45.285	180.597	176.689
Norte de Santander	403.775	3.166	6.736	59.507	62.691	122.198	231.824	49.753	204.259	199.516
Putumayo	111.696	21.086	5.528	18.057	18.545	36.602	63.991	11.102	55.625	56.071
Quindío	56.024	255	817	6.325	6.738	13.063	31.716	11.245	28.301	27.723
Risaralda	61.181	9.480	2.273	8.304	8.972	17.276	32.579	11.326	30.458	30.724
Santander	251.050	334	3.934	34.521	36.640	71.162	140.613	39.275	123.939	127.111
Sucre	267.716	34.988	41.585	40.973	42.965	83.938	148.381	35.397	133.153	134.562
Tolima	202.715	19.575	2.981	28.176	29.947	58.123	107.049	37.543	99.524	103.191
Valle del Cauca	1.094.444	9.894	344.433	147.770	149.872	297.642	614.075	182.727	580.623	513.822
Vaupés	17.757	15.059	112	4.542	4.654	9.196	7.522	1.039	8.492	9.265
Vichada	78.318	58.331	622	16.873	17.790	34.663	38.965	4.690	37.020	41.297

PiN de grupos vulnerables por departamento

DEPARTAMENTO	INTERSECTORIAL	PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	COMUNIDADES ANFITRIONAS	PERSONAS DESPLAZADAS	PERSONAS CONFINADAS	AFECTADOS POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA	PiN BAJO INFLUENCIA GANE
Amazonas	22.618	637	1.036	302	-	185	36.324
Antioquia	684.778	18.599	59.211	97.758	6.530	115.406	702.851
Arauca	88.985	2.112	11.669	16.164	5.773	35.441	106.284
Archipiélago de San Andrés	21.060	526	1.000	-	-	60	-
Atlántico	607.765	8.513	5.593	668	-	70.003	10.016
Bolívar	595.240	12.875	61.351	31.404	-	100.802	345.944
Boyacá	101.585	3.919	29.736	1.346	-	3.589	26.669
Caldas	89.180	3.367	3.268	314	-	1.466	-
Caquetá	110.449	3.201	12.580	11.268	-	14.475	144.293
Casanare	67.664	2.472	4.727	681	-	1.325	51.608
Cauca	377.328	7.513	54.978	31.930	1.428	30.800	814.818
Cesar	222.545	7.304	24.327	3.575	-	5.935	215.069
Chocó	228.305	1.890	113.712	60.319	108.083	92.507	305.370
Córdoba	118.478	1.758	23.733	29.601	283	10.878	155.335
Cundinamarca	249.610	3.535	22.847	452	-	4.431	33.371
Guainía	22.956	182	1.702	723	-	4	14.257
Guaviare	24.005	426	1.322	1.565	-	9.041	39.172
Huila	198.890	13.115	7.480	3.619	-	8.054	173.179
La Guajira	302.653	3.876	6.113	2.247	-	12.178	366.062
Magdalena	397.342	11.107	14.413	3.740	-	82.937	251.887
Meta	277.867	6.025	9.497	4.290	-	14.745	208.296
Nariño	357.286	10.600	176.662	109.293	8.621	10.699	532.969
Norte de Santander	403.775	7.329	126.908	79.846	-	10.945	233.624
Putumayo	111.696	3.153	9.095	7.717	1.104	59.740	165.795
Quindío	56.024	2.813	2.710	132	-	757	7.181
Risaralda	61.181	2.066	12.145	2.557	222	5.188	13.390
Santander	251.050	8.373	44.067	1.299	-	7.790	76.165
Sucre	267.716	9.810	53.687	10.112	-	58.395	209.017
Tolima	202.715	7.645	16.974	4.763	-	9.558	66.857
Valle del Cauca	1.094.444	25.709	5.435	59.721	5.635	12.070	463.804
Vaupés	17.757	265	14	236	-	1.712	1.849
Vichada	78.318	515	1.069	1.016	-	2.568	84.005

Para más información consulte: [Desagregación grupos vulnerables](#)



CAUCA, COLOMBIA

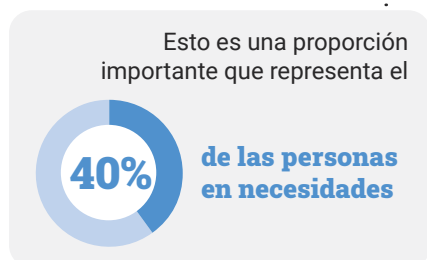
Población en necesidad en el municipio de Rosas.
Foto: Susan Mejía, OCHA Colombia, 2023.

1.4
Número de Personas en Necesidad

PiN distribuido por grupos vulnerables



Para más información consulte: [Desagregación grupos vulnerables](#)



A diciembre de 2022, el EHP ha recibido solicitudes de las entidades del Estado para complementar la respuesta humanitaria en algunos lugares con impacto de gran magnitud. En algunos municipios de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca la población sufre doble impacto, tanto por emergencias causadas por el conflicto armado como por desastres agravados por el cambio y variabilidad climática.



Por otro lado, los movimientos de refugiados y migrantes de múltiples nacionalidades hacia el norte del continente, pasando por la frontera entre Colombia y Panamá, han aumentado significativamente en 2022. Esto se debe a varios factores, como los impactos de mediano plazo del COVID-19 (dado el deterioro de la situación económica en los países de acogida²¹) y la expectativa de acogida en terceros países²². A falta de pasos terrestres oficiales, dignos y seguros estas personas viajan por tramos peligrosos (como la región del tapón del Darién) que ponen en peligro sus vidas.

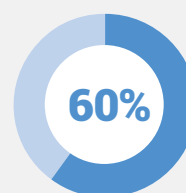
De este total
**2,7M
de personas**

Están en el nivel de severidad más alto (extremo)

Lo que indica que esta población requiere una respuesta humanitaria intersectorial a corto y mediano plazo para mitigar afectaciones por la falta de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales.

Por su parte

**4,6M
de personas**



**del total de
las personas
en necesidad**

Reportan necesidades severas ante la degradación de sus condiciones de vida habituales adoptando mecanismos de afrontamiento negativos y también la reducción de acceso a bienes y servicios, entre otros factores, razón por la cual es importante brindar no solo asistencia humanitaria sino acciones enfocadas al nexus de paz y desarrollo que permita mitigar sus necesidades y asegurar su supervivencia a un mediano y largo plazo.

21 Mixed Migration Centre. La migración extrarregional en América del Sur, Central y del Norte y la necesidad de respuestas más coordinadas. Diciembre 2021. <https://mixedmigration.org/resource/getting-it-together-extra-regional-migration-in-south-central-and-north-america/>

22 El 12 de octubre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció un nuevo proceso migratorio, en donde las personas de nacionalidad venezolana que crucen de manera irregular la frontera terrestre de Estados Unidos y México estarán sujetas a las disposiciones del Título 42, medida que establece restricciones de ingreso de extranjeros a dicho país bajo consideraciones de salud pública por enfermedades transmisibles. Adicionalmente, se anunció un programa de admisión humanitaria que podría beneficiar hasta 24.000 personas venezolanas elegibles para ingresar a Estados Unidos por un periodo de 2 años, con posibilidad de solicitar permiso de trabajo. El 5 de enero, el DHS extendió la medida a cubanos, haitianos y nicaragüenses y eliminó el límite numérico para venezolanos. Aun cuando estas normas indican que el ingreso irregular a Panamá, México o Estados Unidos les hace no elegibles para la medida, según datos recolectados por IMMAP/GIFMM, 63% de los grupos de viaje venezolanos evaluados en diciembre 2022 en Necoclí (Urabá) que conocen las medidas expresaron intenciones de aplicar a este programa.

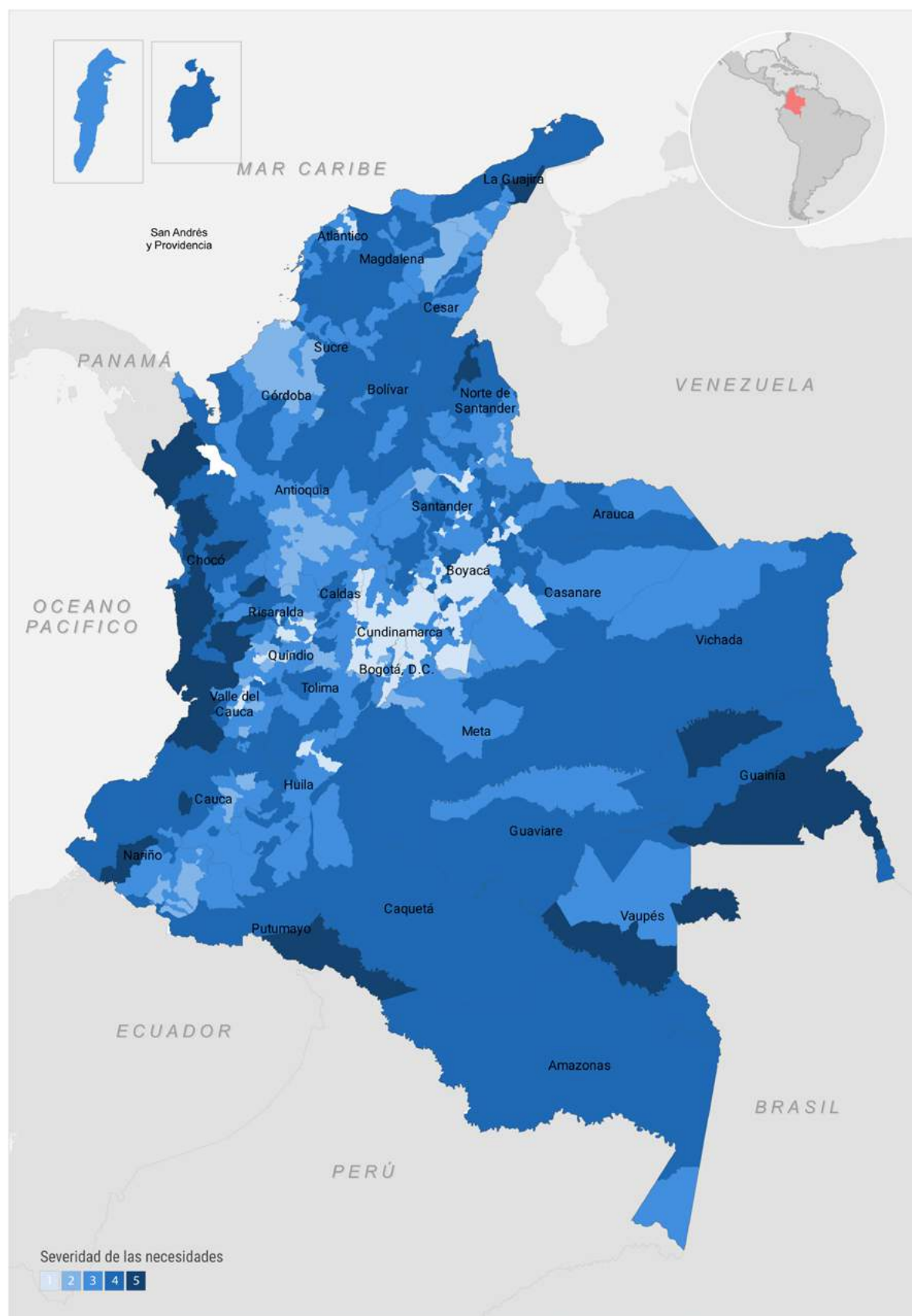
Grupos más vulnerables

Miles de personas (k)

GRUPO POBLACIONAL	PIN	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO	FACTORES ASOCIADOS	SUBREGIÓN
Personas bajo la influencia de GANE	5.8M	396.7k	1M	2.2M	3.2M	433.3k	Violencia	Pacífico, noroccidente y nororiente
Comunidades Afrodescendientes	1.4M	21k	95.8k	561.2k	645.2k	218.2k	Violencia e inundaciones	Pacífico y noroccidente
Desastres	793.6k	41k	28.3k	355.2k	369.8k	68.6k	Inundaciones, deslizamientos, sequía	Caribe, noroccidente, pacífico y sur
Comunidades anfitrionas	919k	39.9k	50k	296.3k	516.2k	106.4k	Desplazamientos, desastres, movimientos migratorios mixtos	Nororiente, noroccidente y pacífico
Pueblos indígenas	704.6k	5.1k	73k	153.4k	452k	9k	Desplazamientos, desastres, movimientos migratorios mixtos	Pacífico, caribe y oriente
Personas desplazadas	578.6k	7.5k	28.5k	92.1k	368.8k	117.5k	Factores de violencia armada	Pacífico, noroccidente, nororiente y sur
Personas en situación de discapacidad	191.2k	18.6k	34.6k	116k	71.7k	3.3k	Violencia, COVID-19	Caribe, centro y noroccidente
Personas confinadas	137.6k	-	-	1.8k	32.9k	102.9k	Factores de violencia armada	Pacífico y noroccidente

GRUPO VULNERABLE	PERSONAS EN NECESIDAD	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
Adultos	4.2M	398.5k	845.9k	2.6M	1.4M	202k
Mujeres	3.9M	348.6k	740.1k	2.3M	1.3M	197.4k
Hombres	3.8M	327.5k	689.2k	2.2M	1.3M	196.6k
Niños y Niñas de 0 a 17 años	2.4M	168.2k	355.4k	1.3M	938.5k	158.5k
Niños	1.2M	85.9k	181.5k	667.8k	479.8k	80.9k
Niñas	1.1M	82.3k	173.9k	641.4k	458.7k	77.6k
Adultos mayores	1M	109.3k	228k	650.8k	325.6k	33.5k

Niveles de Severidad 2023



Para más información consulte: [PiN Intersectorial por municipio, Colombia 2023](#)

1.5

Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades



CAUCA, COLOMBIA

Población en necesidad en el municipio de Rosas.

Foto: Susan Mejía, OCHA Colombia, 2023.

La situación humanitaria del país se entrelaza estrechamente con un contexto de limitaciones y deficiencias de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales en zonas rurales en la periferia del país, lo cual contribuye a generar una crisis de protección prolongada. Dada la geografía del territorio colombiano, existen zonas rurales periféricas que carecen de la presencia integral de las instituciones, mantienen dificultades en infraestructura para su acceso y además sufren la presencia y accionar de los GANE²³. Lo anterior es particularmente visible en territorios del Pacífico, y frontera con Ecuador y Venezuela que

desde el 2019 han visto una escalada de hostilidades por los procesos de fragmentación y expansión de los GANE. En 2022, este impacto se ha extendido hacia las zonas del sur de Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre. Ante esta situación, se resaltan las disposiciones del nuevo gobierno con la política denominada Paz Total en donde las comunidades deben estar en el centro de las posibles negociaciones de paz que se lleven a cabo entre el Gobierno y los diferentes GANE que operan en el país; y acompañada de ella el proyecto de ley de Paz Total que busca mejorar la estructura de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)

²³ De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, desde 2017, se han registrado riesgos por la presencia de los GANE en más de 561 municipios del país (50% del total).

cuya intención es iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por el conflicto.

Sumado a esto, las condiciones humanitarias intersectoriales de la población se han deteriorado.

Miles de personas desplazadas requieren de alojamientos además afrontan una falta de acceso a alimentos que correspondan a los usos y costumbres propios de las comunidades la interrupción de los medios de vida y de la educación, así como riesgos de protección (como la exposición a la violencia de género o a los riesgos frente a artefactos explosivos) continúan ocurriendo. La falta de acompañamiento y de respuesta humanitaria oportuna propicia la prolongación de emergencias que deterioran el bienestar. Además, a largo plazo, la recurrencia

de emergencias humanitarias ha resultado en la profundización de las brechas en la sociedad y a la insatisfacción de las necesidades básicas y pueden llevar a la población a optar por mecanismos negativos de afrontamiento.

Las externalidades generadas por el contexto geopolítico global, la guerra en Ucrania, la política monetaria de Estados Unidos, las diferentes epidemias cada vez más recurrentes e inclusive las nuevas dinámicas de grupos criminales transnacionales son otros factores relacionados con violencia armada y desastres agravados por el cambio climático, pues se configurarán como choques externos que impactarán en un mediano corto o mediano plazo las necesidades humanitarias en Colombia.

AMAZONAS, COLOMBIA

Atención dental a población indígena.

Foto: Yohana Pantevis, OCHA Colombia, 2022.



"Nos dicen que las víctimas somos el centro pero nosotros nos sentimos en la esquina"

Participante de la mesa de víctimas de
Terralta (Córdoba)



Gravedad intersectorial de las necesidades

En la siguiente sección se presenta un análisis de las condiciones de vida que afrontan las personas en necesidad de atención humanitaria, incluyendo los mecanismos de afrontamiento negativo que utilizan cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad considerados por el Equipo Humanitario País.



NARIÑO, COLOMBIA

Misión a Barbacoas, Magüí y Roberto Payán .

Foto: Felinto Córdoba, OCHA Colombia, 2023.

Condiciones de vida

La confluencia de violencia armada, eventos de variabilidad climática, dispersión geográfica, débil presencia institucional y pobreza multidimensional en muchos territorios del país, incrementa exponencialmente las barreras de la población para el acceso a medios de vida, a bienes y servicios de salud y educación, a rutas de atención, entre otros. Las condiciones descritas también generan barreras para acceder a rutas de protección y atención; pues se evidencia con recurrencia altos costos para el transporte -y en casos la ausencia de infraestructura

vial- de las víctimas a los centros urbanos donde pueden declarar los hechos victimizantes; así como las limitaciones presupuestales de los municipios para lograr llegar hasta las comunidades y brindar atención a poblaciones que enfrentan hasta cuatro emergencias durante un año.

Así mismo hay restricciones para acceder a servicios de educación básica, especialmente para niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales apartadas con presencia de GANE aumenta la probabilidad de ser víctima de reclutamiento, uso y utilización en economías ilícitas, trabajos forzados, trata de

personas, violencia sexual y de género, entre otros, también generan impacto en la salud mental.

De acuerdo con el cálculo del PIN para Colombia, en donde se midieron 27 indicadores en la totalidad de departamentos y municipios provistos de las siguientes fuentes: DANE, Medicina Legal, Policía, UARIV, Sívigila, SISPRO, OCHA, y Departamento Nacional de Protección. **El acceso a la atención primaria en salud y la salud mental también resulta obstaculizada para esta población**, especialmente en las regiones de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y la frontera con Venezuela, siendo las fronteras, territorios con alto flujo de población migrante y refugiada que transitan de manera pendular, así mismo es allí donde coexisten diferentes GANE en ambos lados de la frontera que ponen de manifiesto riesgos específicos para la población, ejemplo de ello han sido los desplazamientos masivos en Arauquita y Vichada durante el año 2022.

Por ello, se evidencian deficiencias en el tratamiento de enfermedades crónicas, la prevención de la morbi-mortalidad, la mortalidad infantil, la atención diferenciada a mujeres (incluyendo a mujeres gestantes y lactantes), niños, niñas y adolescentes, personas con VIH, personas de la tercera edad, personas en situación de discapacidad, así como a personas con orientación sexual o identidad de género diversa, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, los impactos psicológicos y emocionales durante las emergencias llevan a condiciones de depresión, ansiedad, temor constante, estrés postraumático, trastornos psicológicos afectivos y emocionales, entre otros. Preocupan los casos de ideación suicida, así como los intentos y casos de suicidio registrados, especialmente en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de comunidades indígenas en la zona Centro-sur y Pacífico del país.

Por las mismas causas, el acceso a fuentes de empleo, medios de vida y el uso de tierras fértiles repercute en la seguridad alimentaria particularmente de las madres con jefatura de hogar, y niños, niñas y adolescentes como consecuencia de los desplazamientos forzados o confinamientos,

la instalación de MAP/MSE en cultivos, la contaminación de las fuentes de agua para uso y para consumo por trabajo de minería y procesamiento de pasta de coca (economías ilegales); y para el caso de los centros urbanos, la llegada de niños, niñas y adolescentes que son desplazados individualmente para evitar ser reclutados por los GANE y en las ciudades se ven expuestos a nuevos riesgos de reclutamiento ya que se dedican a actividades informales.

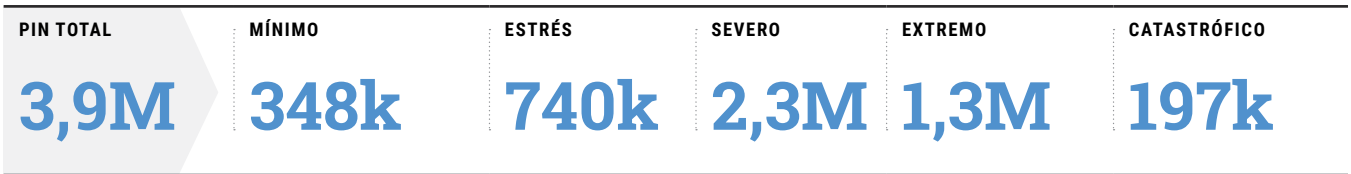
Mecanismos de afrontamiento a la crisis

Si bien durante las emergencias se han observado prácticas de resistencia y resiliencia por parte de las comunidades, continúan identificándose mecanismos negativos de afrontamiento ante las crisis. Cabe resaltar que las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas han fortalecido sus prácticas de liderazgo, autoprotección y atención a sus poblaciones. En ese sentido, las estructuras propias de gobernanza y organismos propios de respuesta han sido fundamentales para hacer frente a las necesidades y, por ello, es necesario articular acciones de respuesta con estas entidades.

No obstante, el desplazamiento hacia zonas urbanas, la venta de bienes y tierras, así como la reducción de raciones o frecuencia de consumo de alimentos son algunos de los mecanismos de afrontamiento negativos frente a las presiones ejercidas por los GANE. En el estudio MSNA 2022 se evidenciaron mecanismos negativos de afrontamiento de la población en Chocó al beber agua de lluvia o del río e implementar sistemas de alcantarillado improvisados hacia el río, ante la generalizada falta de infraestructura de agua potable y sistemas de manejo de aguas residuales. En otros departamentos, las medidas relacionadas con explotación y abuso sexual son reportadas en algunos territorios. Entre ellas están la actividad de sexo por supervivencia, la participación en redes de trata de personas, y el sostenimiento de relaciones sexoafectivas por parte de niñas, adolescentes y mujeres con miembros de GANE como medida de protección a sí mismas y a sus familias.

Grupos en situación de vulnerabilidad

Grupo en situación de vulnerabilidad: mujeres



La asignación de roles de género continúa poniendo en situación de vulnerabilidad a las mujeres, en contextos de conflicto y de desastres. Para el año 2023, se estima un incremento de las violencias basadas en género (violencia sexual, económica, física y psicológica) para un total de 2,8 millones de personas, especialmente mujeres, adolescentes mujeres y niñas, así como comunidades étnicas o con distintas intersecciones que se encontrarán con mayores riesgos debido a las dinámicas del conflicto armado y los impactos de los eventos por variabilidad climática. Con el aumento de enfermedades y de afectaciones por cuenta de la violencia armada, las tareas de cuidado recargadas sobre las mujeres incrementan.

Además, la presencia de los GANE ha propiciado el aumento de factores de riesgo de violencias basadas en género y violencias sexuales, estas últimas por parte de los GANE como estrategia para demostrar el control territorial. Estas dinámicas han conllevado a la señalación y estigmatización de mujeres, su vinculación en labores de servidumbre, uso y explotación sexual. De hecho, se han reportado casos de embarazos de niñas menores de 14 años como consecuencia del abuso sexual por parte de GANE, así como de enfermedades de transmisión sexual, en la región Pacífico. Las redes de explotación sexual y trata de personas, así como de esclavitud y trabajos domésticos no remunerados, continúan fortaleciéndose y afectando principalmente a niñas, mujeres indígenas y afrocolombianas, y migrantes. De igual forma, se identifica el riesgo de niñas y adolescentes, quienes, desde la menarquia, pueden

ser vistas como mujeres en algunas comunidades, redundando en la deserción escolar femenina, uniones forzadas desde temprana edad con adultos, embarazos tempranos, partos y sobrecarga de labores económicas y del hogar.

Cabe resaltar que las mujeres que ejercen labores de liderazgo enfrentan mayores riesgos, y son víctimas de amenazas, ataques y homicidios en su contra. Las agresiones contra las defensoras y lideresas son aún más desproporcionadas, pues se ejercen como formas de castigo y tienen connotaciones sexistas, generalmente referidas a actos sexuales, tortura y violencia sexual. En muchas ocasiones son obligadas a alejarse de sus familias y comunidades.

Por otro lado, las mujeres en edad reproductiva se enfrentan a un escaso acceso a elementos de gestión menstrual y a otros servicios de salud sexual y reproductiva. En algunas regiones, los actores





CHOCÓ, COLOMBIA

Visita de seguimiento a la implementación del CERF.

Foto: Claudia Rodríguez, OCHA Colombia, 2022.

armados obstaculizan el acceso de las mujeres a estos servicios, aumentando los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, morbilidad y mortalidad materna. La falta de acceso a salud sexual y reproductiva, así como al acceso a la interrupción voluntaria al embarazo (IVE), también repercute en la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades, afectando especialmente a mujeres, hijos e hijas migrantes y refugiadas. A su vez, la variabilidad climática tiene un impacto en términos de VBG, pues la exposición a estas violencias puede incrementar por situaciones de hacinamiento y por la degradación del medio ambiente. Además, la pérdida de cultivos y la limitación de recursos puede implicar menor acceso a bienes básicos.

En este sentido, las niñas, adolescentes y mujeres adultas han resultado gravemente afectadas en diferentes dimensiones: daños psicológicos y rupturas de su tejido social; revictimización por la carencia de respuesta institucional – y falta de accesibilidad para mujeres indígenas -, un ambiente de impunidad; amenazas contra su vida generando casos de desplazamiento forzado individual silencioso, y casos de feminicidios y trans-feminicidios en el territorio.



"La capacidad de ser resilientes es poder contar todas las situaciones que vivimos en nuestro territorio y enfrentarlas juntas; con la solidaridad de las mujeres. ¡Juntas somos mas! Juntas salvamos vidas"

Lideresas y representantes de sobrevivientes de la violencia del Pacífico. Chocó, febrero de 2023



Entre 1985 y 2022

38k
personas

Fueron víctimas de
delitos contra la libertad e integridad sexual
en el conflicto armado

Fuente: UARIV, Corte: 31 de diciembre de 2022



Entre 2017 y 2022

4k
personas

Fueron víctimas de
delitos contra la libertad e integridad sexual
en el conflicto armado

Fuente: UARIV, Corte: 31 de diciembre de 2022

Grupo en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes

PIN TOTAL	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
2,4M	168k	355k	1,3M	938k	158k

El difícil acceso a educación, la falta de oportunidades y la limitación en cuanto a proyectos de vida exponen a los niños, niñas y adolescentes a ser vinculados a los GANE o a economías ilegales. En relación con los niños, niñas y adolescentes, la persistencia del reclutamiento, uso y utilización es fuente de preocupación, especialmente en las regiones del Pacífico, zonas de frontera, la región noroccidente y la Amazonía, con al menos 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de necesidad. Los niños, niñas y adolescentes son reclutados como informantes, tareas de cuidados, en la cadena productiva de cultivos de uso ilícito, como en hostilidades y en la instalación de artefactos explosivos. En ese sentido, enfrentan altos riesgos en cuanto a su integridad física, desarrollo y bienestar, evidenciados en la muerte y/o herida de niños, niñas y adolescentes en medio de combates o enfrentamientos. Según el informe del Secretario General sobre la niñez en el conflicto armado, solo en 2021 fueron reclutados al menos 123 niños, niñas y adolescentes, especialmente en el Pacífico, la región nororiental y la región centro-sur, mientras que existen altos niveles de subregistro.

La condición de los entornos protectores es determinante en la exposición de niños, niñas y adolescentes a diversos riesgos. En las regiones destacadas por esta problemática, la falta de transporte

escolar hace que los niños y niñas recorran caminos inseguros y largos, donde hay presencia de GANE que aprovechan su desprotección para atraerlos. Además, se ha reportado la presencia de artefactos explosivos y minas antipersonal en los caminos hacia las instituciones educativas y dentro de las mismas. El ataque contra estos entornos protectores también se ha visto materializado en las amenazas contra docentes y rectores, forzándolos a desplazarse de zonas rurales y dificultando aún más el acceso a la educación. La amenaza y extorsión hacia los padres y/o cuidadores de niños, niñas y adolescentes ocasionan la persistencia del reclutamiento y un subregistro sobre este hecho victimizante. Se han reportado casos de violencia sexual en espacios educativos, como en internados en la región Amazónica. De hecho, se han reportado casos de embarazos de niñas menores de 14 años como consecuencia del abuso sexual por parte de GANE, así como de enfermedades de transmisión sexual, en la región Pacífico.

En este sentido, vale la pena destacar que desde el 18 de noviembre, Colombia se adhirió a la [Declaración sobre Escuelas Seguras](#) donde se espera tener acciones encaminadas a la protección de maestros, estudiantes y escuelas en el contexto actual de conflicto armado.



Entre 1985 y 2022

9,8k

niños, niñas y adolescentes

Fueron víctimas de
vinculación con grupos armados

Fuente: UARIV, Corte: 31 de diciembre de 2022



Entre 2017 y 2022

869

niños, niñas y adolescentes

Fueron víctimas de
vinculación con grupos armados

Fuente: UARIV, Corte: 31 de diciembre de 2022



VAUPÉS, COLOMBIA

Estudiante en la escuela de la comunidad de Bocas del Yi.
Foto: Andres Torres, OCHA Colombia, 2022.



"Por favor no se lleven a los niños, somos pobres, pero los queremos ver crecer y salir adelante con su vida en nuestro territorio ancestral"

Población afectada por el conflicto en Nariño.

La violencia tiene un impacto sobre la composición familiar y el tejido social de las comunidades de los niños y niñas. Frente a los anteriores riesgos mencionados, hay familias que han optado por desplazarse de manera preventiva como mecanismo de protección de la niñez, incluso, saliendo del país en zonas fronterizas. Durante las emergencias humanitarias, además de la interrupción en los periodos escolares, se evidencia una ruptura de lazos familiares y comunitarios, la pérdida de prácticas culturales y costumbres en el caso de comunidades étnicas, y repercusiones negativas en la salud mental. Ahora bien, la violencia armada dirigida contra hombres y mujeres adultos ha resultado en la condición de **orfandad** de niños y niñas, teniendo que crecer solos, siendo estigmatizados en ocasiones y dejándoles en vulnerabilidad económica y emocional, restringiendo aún más su acceso a otros derechos como la educación. De manera similar, la niñez no acompañada en zonas fronterizas del país (como niños y niñas migrantes en ruta hacia Panamá y Norte América) enfrenta altos riesgos de ser vinculados a actividades como el trabajo forzado, explotación sexual infantil, y pueden encontrarse en situación de calle.

Por otro lado, se ha identificado un impacto diferencial en niños, niñas y adolescentes como consecuencia de situaciones de variabilidad climática. Durante las temporadas de lluvias, se presentan graves afectaciones

de entornos escolares, interrumpiendo los ciclos de aprendizaje. Las inundaciones y el estancamiento de agua incrementan los riesgos de enfermedades transmitidas por vectores, afectaciones en la piel, enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas, principalmente en niños y niñas. Adicionalmente, el limitado acceso a agua potable y segura y a alimentación durante estas emergencias conlleva a casos de desnutrición y malnutrición en niños y niñas, especialmente en menores de cinco años. Cabe resaltar que se ha observado una mayor vulnerabilidad de niños y niñas afrocolombianos e indígenas a sufrir de desnutrición por cuenta de las condiciones socioeconómicas en las que se presenta la reproducción de inequidades, situación que se ve agudizada con las restricciones a alimentación por desastres.

Para 2023, se estima que:



2.4M

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes presenten necesidades humanitarias

158,5k
(6.5%)

Tienen necesidades críticas clasificadas en severidad catastrófica

Ubicadas en 25

Municipios del país con grandes impactos y exposición a riesgos.

Grupo en situación de vulnerabilidad: Personas que viven bajo la influencia y control de grupos armados



7.2M

Personas que habitan en zonas rurales de 462 municipios se encuentran bajo el accionar de grupos armados.

Para 2023, se estima que:

5.8M

Personas que están bajo la influencia de grupos armados y que presenten necesidades humanitarias

433,3k
(7.4%)

Tienen necesidades críticas clasificadas en severidad catastrófica

Ubicadas en 25

Municipios del país con grandes impactos y exposición a riesgos.

PIN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
5,8M	396,7k	1M	2,2M	3,2M	433,3k

Más de un 60 por ciento de la población que habita en áreas rurales en Colombia vive bajo influencia de los GANE, según el estudio conducido por OCHA respecto al impacto en las personas que viven bajo influencia de grupos armados, al menos 7.2 millones de personas que habitan mayoritariamente en zonas rurales de 462 municipios se encuentran bajo el accionar de estos grupos. De manera similar, la [alerta temprana 004-22](#) de la Defensoría del Pueblo menciona que más de 520 municipios se encuentran bajo injerencia de al menos un GANE, de los cuales, más del 80 por ciento presenta un riesgo medio-alto y extremo por el impacto de los mismos. Lo anterior complejiza las afectaciones de la población ya que, al habitar en zonas periféricas y de difícil acceso en donde no existe suficiente presencia y oferta institucional, el acceso a las rutas de atención del Estado es limitado.

Las estrategias de control social más utilizadas son: la imposición de códigos de conducta, restricciones a

la movilidad (o toques de queda), y ataques directos contra quienes no cumplen las normas impuestas.

En ese sentido, los GANE recurren a los homicidios selectivos y las masacres como método de violencia ejemplarizante para infundir temor en la población civil. Preocupa la degradación de este tipo de violencia, como en el caso de las masacres y ataques colectivos que se dan frente a niños y niñas.

Del mismo modo, los ataques contra defensores de derechos humanos y contra líderes y lideresas sociales tienen la intención de fortalecer el poder social y territorial. La situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y de los líderes y lideresas sociales (especialmente de comunidades étnicas) ha tenido un grave impacto en la sensación de seguridad de las comunidades, que los perciben como sus referentes de apoyo y defensa de sus derechos. Además, estos ataques generan daño colectivo en las comunidades como el desarraigo, la fragmentación

comunitaria y el cese de actividades culturales y sagradas. Esto, a su vez, ha incidido en la disminución de las capacidades y resiliencia de las comunidades para enfrentar los riesgos y amenazas existentes. La pérdida de los vínculos sociales afecta de manera desproporcionada los proyectos de vida individuales y colectivos, así como las relaciones culturales y étnicas con los territorios.

Igualmente, los ataques en contra de personas en proceso de reincorporación (PPR), han deteriorado la sensación de seguridad, han generado emergencias humanitarias como desplazamientos y confinamientos y ha comprometido la reintegración social de las PPR.

En las regiones Nororiental, Pacífico y Amazónica – Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó – también generan preocupación las violencias contra personas en proceso de reincorporación (PPR). Según la [Misión de Verificación de Naciones Unidas](#), 342 excombatientes de las extintas FARC-EP han sido asesinados (11 mujeres, 48 personas afrocolombianas y 28 indígenas) desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Así mismo, al menos 105 PPR han sido víctimas de tentativa de homicidios, y 27 PPR se consideran desaparecidos.

Las consecuencias humanitarias que dejan la presencia y accionar de los GANE repercute en el limitado o nulo acceso los medios indispensables para la supervivencia humana como los cultivos familiares, caza, pesca, acceso seguro a fuentes de agua; igualmente, el reemplazo de cultivos de pancoger por los de uso ilícito, cambios en el uso y vocación del suelo, entre otros factores que agravan la situación de pobreza de la población, el desarrollo de economías ilícitas, daños medioambientales por la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación de la tierra, el agua y el aire.

Este escenario de extrema vulnerabilidad se complejiza más por la ausencia o limitado acceso a la justicia y reparación. Los mecanismos de atención a las víctimas enfrentan grandes desafíos por la limitada presencia institucional y los vacíos presupuestales. Igualmente, factores como las largas distancias que deben recorrer las víctimas para acceder a estos mecanismos, los altos costos de transporte, la falta de acceso a la información, y los riesgos de revictimización elevan el nivel de severidad de la situación en varios territorios.

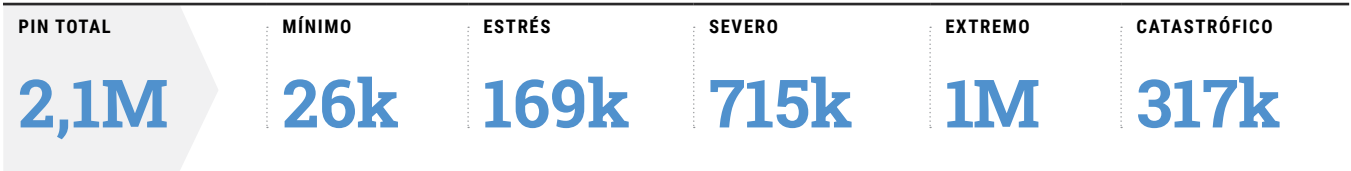
VAUPÉS, COLOMBIA

Pobladores en el mercado local del municipio de Mitú.

Foto: Andrés Torres, OCHA Colombia, 2022.



Grupo en situación de vulnerabilidad: Comunidades étnicas



Durante el 2022, las afectaciones a comunidades afrodescendientes e indígenas incrementaron, 19 por ciento de las personas en necesidad en Colombia, pertenecen a estos grupos. Más de 2,1 millones de personas particularmente en la zona Pacífico del país, en los municipios de Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia concentran necesidades humanitarias. También se reportan afectaciones en el Noroccidente, Orinoquía, Amazonía y Caribe siendo los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables por estar expuestos a situaciones de reclutamiento forzado y violencias basadas en género.

En Colombia hay una afectación agravada de emergencias humanitarias sobre la población indígena y afrodescendiente. Las afectaciones a esta población no solo generan un desequilibrio individual frente a la calidad de vida, la salud de las personas y la pérdida de capacidades individuales, sino que debilitan la estructura organizativa y espiritual de los

Pueblos al limitar el acceso a sitios sagrados, con el propósito de desarrollar pagos espirituales y mantener el orden desde las leyes de origen y mitos fundantes. El 49 por ciento del total de personas desplazadas de manera forzosa y masiva corresponde a comunidades afrodescendientes y el 16 por ciento a pueblos indígenas, mientras que el 50 por ciento de la población afectada por confinamientos pertenece a pueblos indígenas y el 20 por ciento a comunidades afrodescendientes ([ver enlace](#)).

De acuerdo con el informe del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, entre enero y septiembre se reportaron al menos 594 hechos victimizantes en los territorios de Norte, Sath Tama Kiwe (Caldono), centro, Tierradentro, oriente, occidente, sur y costa pacífica en el departamento del Cauca. Se reitera en este informe el impacto en niñas, niños y adolescentes indígenas, como los principales afectados con 256 casos de reclutamiento forzado. El Observatorio de DD.HH. de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) [registró](#), durante el tercer trimestre de 2022, un total de 140 hechos de vulneración de los DD.HH. y del DIH de los Pueblos y Naciones Indígenas, afectando a 11.872 indígenas, pertenecientes a 24 pueblos. De esta forma, en lo que va corrido del año, se han reportado 446.571 víctimas.



Los principales impactos para este grupo en situación de vulnerabilidad van desde afectaciones en los derechos culturales y ancestrales, que implican el debilitamiento a la estructura organizativa, política, cultural, económica desarraigando a los pueblos de sus leyes de origen, usos y costumbres. En septiembre se registró el mayor número de víctimas pertenecientes a pueblos étnicos (confinamiento, desplazamientos masivos e individuales, amenazas, homicidios, entre otras), con un total de 6.142 víctimas, pertenecientes principalmente a la Nación Emberá (Dobidá, Chamí, Katío y Eyábida) y a los Pueblos Indígenas Awá (Nariño) y Sikuani. Los departamentos con mayor afectación fueron Chocó, Nariño, Antioquia y Arauca.

Tras las emergencias humanitarias por desastres o por factores de violencia armada, las comunidades étnicas presentan necesidades de alojamiento agudas. Los pueblos indígenas ubicados en zonas rurales poco habitadas, cerca de pasos fronterizos, o controladas por redes de narcotráfico y del crimen organizado, tienen mayores dificultades de acceder a los centros de atención o a los sistemas de protección social. Los problemas de discriminación étnica, violencia de género, violencia no convencional, minería ilegal, y deforestación acelerada son otras marcas importantes que afectan de sobremanera a los pueblos indígenas.

También existe un efecto de detrimento sobre sus sistemas de cuidado, como los mecanismos propios de salud donde médicos y autoridades espirituales no pueden sostener sus huertas de plantas medicinales, afectando las semillas y los cultivos propios y, generando insuficiencias en la seguridad alimentaria y nutricional. A esto se suma la limitación de los medios de vida, especialmente de las oportunidades

económicas y sociales de adolescentes y jóvenes mujeres quienes tienen acceso limitado a centros educativos, lo que genera escenarios propicios para el reclutamiento forzado o la participación en las economías ilegales de estos territorios.

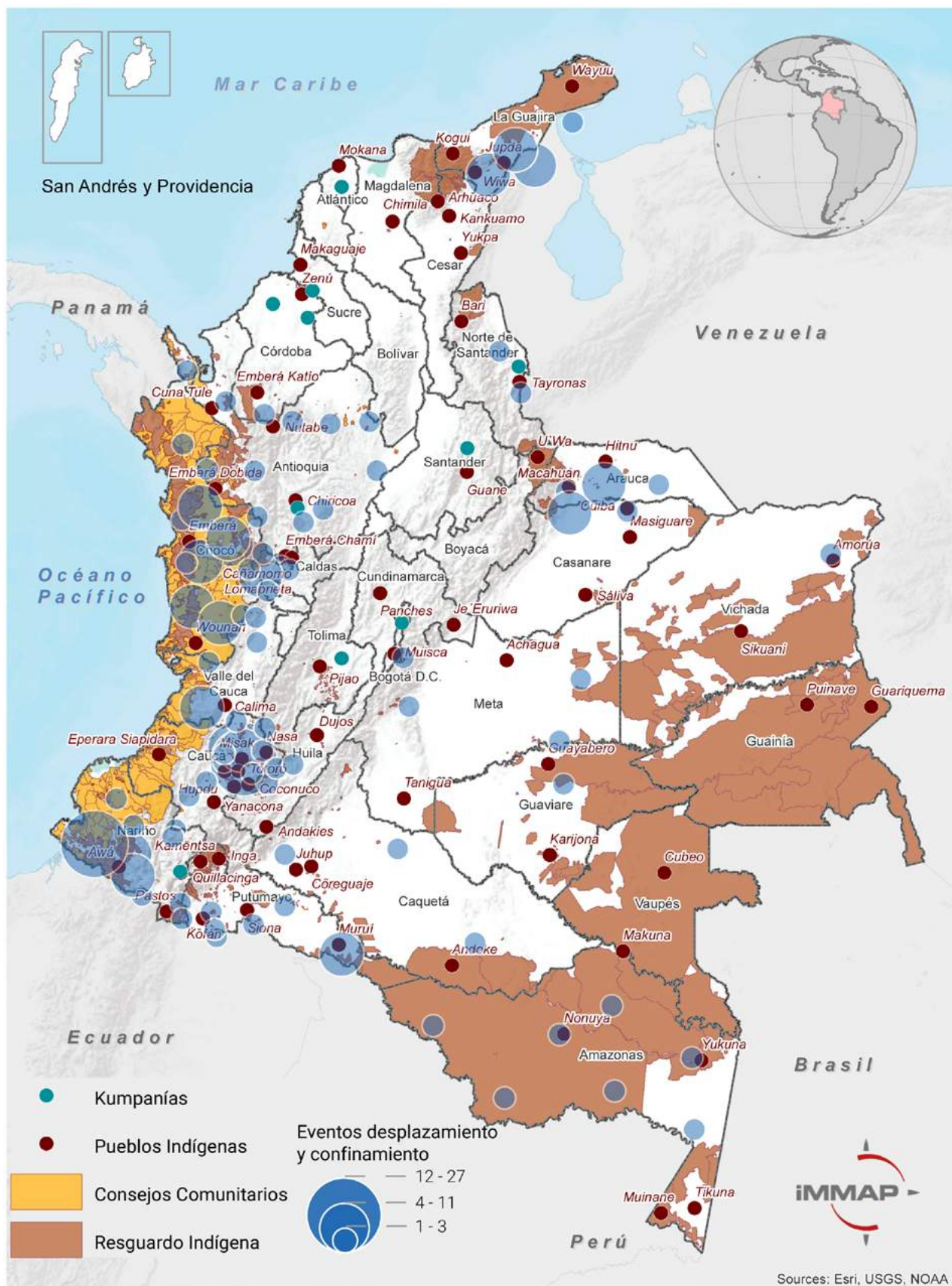
Dentro de los desafíos, se evidencian oportunidades de fortalecimiento de los sistemas propios y autónomos de cada pueblo. En el caso de salud, en algunas emergencias se resignificó para algunos pueblos indígenas el volver al origen como misión de los senderos de protección desde las organizaciones nacionales y regionales de los pueblos indígenas y en algunos territorios interétnicos como en los departamentos de Chocó y Cauca. Lo anterior, permitió establecer mecanismos propios de cuidado desde el sistema indígena de salud propia e intercultural. Además, en el tiempo de confinamiento, la guardia indígena fortaleció su rol como garante de la preservación de la armonía y la protección de los pueblos indígenas con la articulación permanente entre médicos tradicionales, sabedores ancestrales y autoridades espirituales que sostuvieron los territorios en este periodo de pandemia. Aun así, son preocupantes los indicadores en materia de salud sexual y reproductiva y nutrición, donde los servicios estuvieron limitados y los indicadores con relación a la mortalidad materna, [desnutrición](#) y otras enfermedades crónicas aumentaron para el presente año.



"En ese momento nuestros niños se botaron al río por miedo, salimos en los Johnson a sacarlos. Se estaban ahogando"

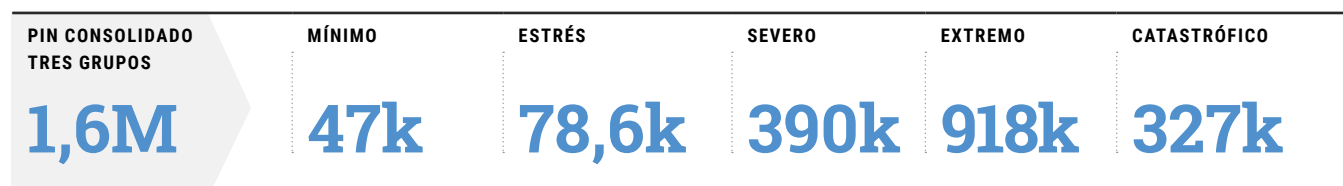
Comunidad Koredó, Resguardo Indígena Emberá Katío del Alto Sinú, Tierralta (Córdoba)

Territorios étnicos y emergencias por desplazamiento y confinamiento



Para más información consulte: [Afectaciones por conflicto armado, Monitor OCHA](#)

Grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad: Personas desplazadas, confinadas y población de acogida



El desplazamiento –tanto individual como masivo– afecta desproporcionadamente a las víctimas, que se ven obligadas a abandonar sus tierras, hogares, lugares sagrados y a sus ancestros. Los albergues temporales, proporcionados por las administraciones locales, tratan de resolver la situación de alojamiento inmediato de las familias, pero en muchos casos se convierte en una medida permanente, que no cumple con los estándares de vivienda digna ni tiene acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Estos albergues también tienen una débil gestión por parte de las autoridades encargadas pues puede incrementar algunos riesgos de protección, como los riesgos de violencias basadas en género (VBG), y algunas regiones no cuentan con ellos. Por lo anterior, en ocasiones las personas desplazadas se ven en la necesidad de alojarse con familiares, amigos y otras redes de apoyo –situaciones que pueden terminar en hacinamiento y riesgos de protección para niños, niñas y mujeres.

Dentro de los principales impactos enfrentados por la población desplazada se encuentra la pérdida de sus tierras como fuente de subsistencia, lo que limita el acceso al trabajo y recursos financieros para cubrir necesidades como medicinas, alimentos, educación, entre otros. También preocupa el desplazamiento de mujeres gestantes, lactantes y jefas de hogar a lugares de alojamiento temporal inseguros (asentamientos), carentes de artículos

de higiene y aseo. Cabe resaltar que los adultos mayores enfrentan situaciones particulares, especialmente en la región Pacífico, donde, en medio de desplazamientos masivos, se quedan en sus hogares con el fin de proteger los bienes de la familia. Esto repercute en una mayor exposición a riesgos de violencia por los GANE y hostilidades entre ellos, además de quedar en una situación de vulnerabilidad en términos económicos y de medios de vida. Según el MSNA 2022, tanto población de acogida como desplazada mantiene un alto nivel de necesidades no cubiertas en materia de agua, saneamiento e higiene, medios de vida y protección.

En el caso de los confinamientos, se profundiza la inseguridad alimentaria y las formas de malnutrición, se restringe el acceso a bienes y servicios básicos por largos periodos de tiempo (el agua, el saneamiento y la higiene, además de la electricidad) y genera graves riesgos de protección, siendo un factor agravante que puede repercutir no solo en la salud sino además en las condiciones de protección de grupos poblacionales como las mujeres, niñas, niños y adolescentes. También los servicios educativos se ven truncados como resultado de los confinamientos, por lo que la niñez pierde la continuidad en el proceso escolar y con ello, los proyectos de vida.

La recurrencia de emergencias por confinamiento ha afectado desproporcionadamente la salud mental

de niños, niñas y adolescentes, particularmente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca donde la desesperanza ante la violencia ha resultado en casos generalizados de depresión, ideación suicida y casos de suicidio. Durante las emergencias por confinamiento se dificulta la provisión de ayudas humanitarias debido a las condiciones de seguridad que limitan el acceso de actores humanitarios.



"En todos los comités, en la ley, incluso... en el nombre de las instituciones ponen la No Repetición y la No Repetición, pero aquí sólo vemos la repetición y la repetición de los hechos victimizantes"

Líder social de la comunidad de El Manso,
Tierralta (Córdoba)



CÓRDOBA, COLOMBIA

Habitantes del sur del departamento, en el marco del Programa Anda.
Foto: Fundación SAHED, 2022.

Impacto regional

Región Nororiental (frontera con Venezuela)



4,4M
Población total

12k
Personas desplazadas

23
Eventos

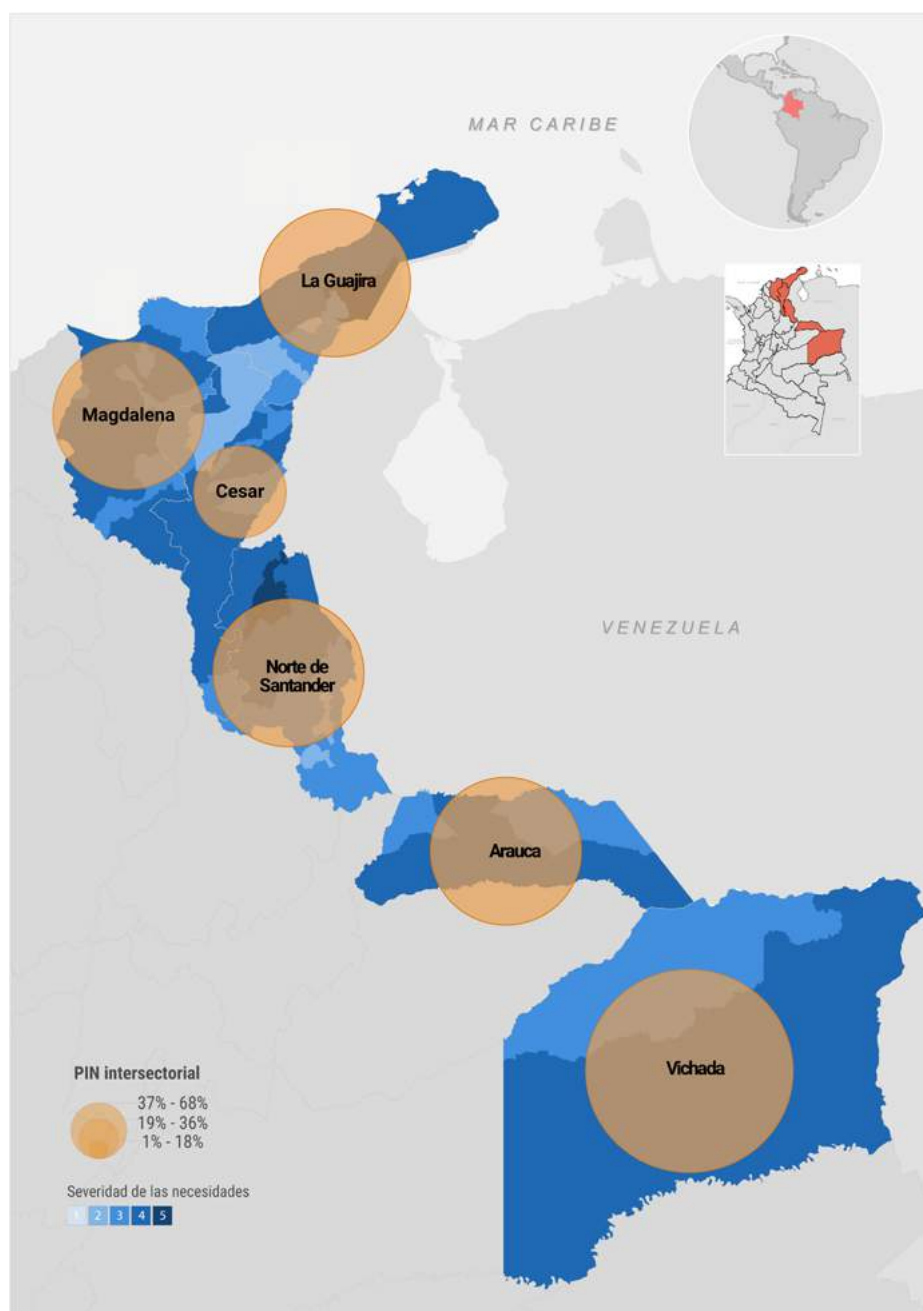
Fuente Monitor OCHA

132k
Personas afectadas por eventos de origen natural*

489
Eventos

* Fuente UNGRD

Fecha de corte: enero 2023



La región nororiental está conformada por los departamentos de **La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada** territorios que han estado históricamente bajo la influencia de los GANE debido a su riqueza minera, de hidrocarburos y su naturaleza extensa que permite actividades ilegales como la plantación de cultivos ilícitos y la práctica de minería

ilegal. Adicional a ello, esta región comparte 2.119 kilómetros de frontera con Venezuela. En esta zona en ocasiones configuran una doble o múltiple afectación y logran evidenciar necesidades de protección específicas para este grupo poblacional. Usualmente, la población refugiada y migrante que ingresa a estas zonas (algunas personas incluso han llegado debido a



Fuente: Monitor-OCHA. Fecha de corte: enero 2023

desplazamientos transfronterizos buscando protección internacional), llega a territorios con capacidades de acogida e integración limitadas, y suelen alojarse en asentamientos informales con condiciones deficientes de alojamiento, acceso a agua y saneamiento, salud y protección. Adicionalmente, debido tanto a su estatus como al contexto económico de estas zonas, presentan restricciones para acceder a medios de vida.

Durante el 2022, se generaron restricciones a la movilidad de poblaciones, desplazamientos masivos, confinamientos, entre otros hechos victimizantes que impactaron en el acceso a derechos, bienes y servicios básicos principalmente de comunidades indígenas en zonas rurales donde se observa la reconfiguración de los GANE. Estos eventos se relacionan con el aumento de las áreas sembradas con cultivos de uso ilícito. Esta situación derivó en amenazas contra las comunidades que se negaron a sembrar o participar en la cadena de producción de drogas ilícitas. La actividad minera artesanal con participación de los GANE también hace parte de las economías ilegales, detonando impactos ambientales al contaminar los ríos con metales pesados y otros elementos químicos que afectan la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas que dependen de la pesca para su alimentación. En esta zona se ha reportado un aumento en los casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, especialmente en las comunidades indígenas.

Arauca:

A inicios del 2022 como consecuencia de los enfrentamientos entre GANE y combates entre la Fuerza Pública y éstos en zona fronteriza, el contexto de seguridad se agravó generando diferentes hechos

victimizantes entre los que se destacan los homicidios selectivos, amenazas constantes contra la población -en especial contra los líderes o lideresas sociales y presidentes de las Juntas de Acción Comunal-, y emergencias humanitarias como desplazamientos individuales y masivos, confinamientos y restricciones en la movilidad. En el departamento se evidencian impactos diferenciales para la población refugiada y migrante que además de estos hechos, sufre desplazamientos transfronterizos y el reclutamiento, uso y utilización en niños, niñas y adolescentes.

Los principales municipios donde se evidenció desplazamiento de la población civil en 2022 fueron Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, sin embargo, desde mediados del mes de mayo los enfrentamientos entre GANE se situaron en zona rural de Puerto Rondón colindando con Tame y Arauquita generando un alto riesgo de desplazamiento de las comunidades, incluyendo pueblos indígenas. Por otro lado, Cravo Norte registra bajos niveles de emergencias masivas, pero es un municipio en alto riesgo de desplazamiento forzado debido a la presencia de actores armados en la zona rural. Frente a los confinamientos y las restricciones de la movilidad en el departamento, se tiene registro de al menos 50 comunidades confinadas, en especial en zona rural de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, donde además se registra el aumento en la instalación de MAP/MSE por parte de los GANE sin embargo, el riesgo de confinamiento se extiende a los siete municipios del departamento que ya han sufrido restricciones severas a la movilidad y al acceso de bienes y servicios básicos. Estas restricciones causadas por el control territorial y accionar armado crea temor y zozobra generalizada de la población por las posibles retaliaciones por parte de los GANE.



NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Población de la Comunidad Barí.

Foto: Mariana Duque, OCHA Colombia, 2022.

Norte de Santander:

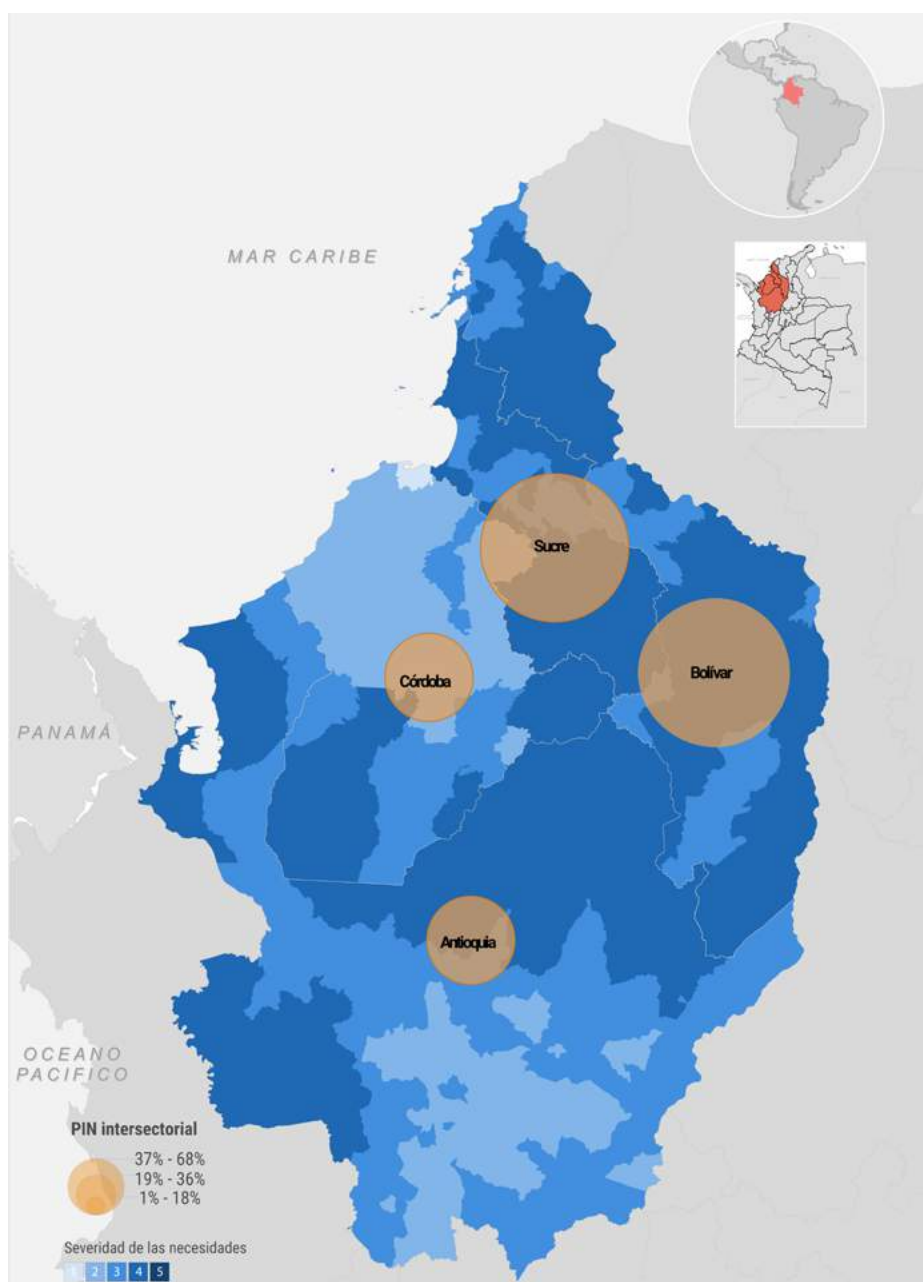
La presencia de los GANE en el departamento durante el 2022 generó graves afectaciones y hechos victimizantes a la población civil; se tiene registro de más de 13 desplazamientos masivos, especialmente en los municipios de Convención, El Tarra, Teorama, Tibú y Toledo. Además, debido a los combates, enfrentamientos y hostigamientos en los 11 municipios del Catatumbo, las comunidades presentan restricciones a la movilidad, suponiendo un alto riesgo por reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, ante ello la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre el aumento de riesgo del reclutamiento en los municipios de la zona del Catatumbo, Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario y zona rural de Cúcuta.

En consecuencia, grupos de familias han optado por desplazarse de sus territorios a fin de evitar el reclutamiento, razón por la cual aumenta la deserción escolar y la carencia de proyectos de vida. Además, se presentan otros hechos asociados al reclutamiento, uso y utilización en el territorio como la seducción con promesas y ofrecimientos de oportunidades de generación de ingresos a los menores de edad, y crecimiento dentro de los GANE, siendo especialmente identificados para esta modalidad los niños, niñas y adolescentes y la población refugiada y migrante; la extorsión hacia los padres y/o cuidadores y, la amenaza directa hacia los núcleos familiares o redes cercanas ante eventual denuncia con las autoridades, ocasionan la existencia de un subregistro sobre este hecho victimizante.

Se registran al menos 66 eventos por MAP/MSE y por artefactos explosivos improvisados (AEI) en el departamento. Los AEI se han ubicado en zonas cercanas a los cultivos de uso ilícito como estrategia de protección. Lo anterior, ha generado afectaciones psicosociales en las comunidades y ha aumentado el riesgo de ocurrencia de hechos victimizantes, repercutiendo en la pérdida de autogobierno de las comunidades indígenas y la ruptura del tejido social. Estas prácticas también han propiciado el aumento de factores de riesgo de VBG y violencias sexuales, donde las mujeres han sido señaladas de ser compañeras sentimentales o colaboradoras de miembros de la fuerza pública o de los GANE, poniendo en riesgo su integridad, vida, su movilidad y el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en tanto son sometidas a tortura, trato degradante e incluso el feminicidio. Todo ello se suma a las dinámicas comunes de la región generando afectaciones de salud a las poblaciones, especialmente al pueblo indígena Barí debido a la contaminación de fuentes hídricas, así como la deforestación en el territorio.

Pese a la existencia de una *Mesa Humanitaria del Catatumbo* y a la firma de unos mínimos humanitarios para la humanización del conflicto, durante el 2022 los GANE no han respetado estos acuerdos, afectando consigo a las comunidades que quedan en medio del accionar armado de los diferentes grupos armados.

Región Noroccidental



La zona Noroccidental conformada por Córdoba y Antioquia, el Sur de Bolívar y Sur de Sucre, es una vía estratégica para las economías ilegales por ser un corredor de salida hacia Centroamérica y el Caribe; las zonas de tránsito entre Córdoba y Antioquia para el cultivo y tráfico de drogas; el Bajo Cauca antioqueño y la Serranía de San Lucas para la minería ilegal son territorios que diferentes GANE han buscado cooptar, a través de la imposición de códigos de conducta,

administración de la justicia, enfrentamientos, amenazas, homicidios, desplazamientos, confinamientos y otros ataques contra la población civil. En 2022, el plan pistola decretado por un GANE en la región del Urabá (Chocó, Córdoba y Antioquia) y el Caribe (Bolívar y Sucre), restringió la movilidad y el acceso a servicios básicos de al menos a 2,6 millones de personas entre los meses de mayo y junio. En esta región las comunidades indígenas, afrocolombianas,



Fuente: Monitor-OCHA. Fecha de corte: enero 2023 * Fuente: UNGRD. Fecha de corte: enero 2023

campesinas, y los refugiados y migrantes (tanto venezolanos como transcontinentales) son las más afectadas.

Adicionalmente, la emergencia a gran escala en la subregión de La Mojana tuvo especial repercusión en esta región. La prolongación del fenómeno de La Niña y las fuertes lluvias generaron el rompimiento de los jarillones instalados en cuatro puntos de Bolívar, Sucre y Antioquia, inundando nuevamente a los 11 municipios de la subregión afectado al menos a 166.000 personas, la mayoría ubicadas en la zona rural y de difícil acceso por la inundación con necesidades humanitarias críticas en seguridad alimentaria y nutrición (SAN), agua, saneamiento e higiene (WASH), alojamientos temporales y salud (ver Evaluaciones MIRA 2021 - 2022), además del aumento de los escenarios de riesgo en protección por violencias basadas en género (ver Alerta).

En esta región, se reporta el subregistro de casos de desplazamiento individual, lo que ha ocasionado falta de activación de rutas de protección y atención tanto a las personas que abandonan sus hogares y territorios, como de sus familias que quedan en el territorio pasando a ser objeto de amenaza. Es así que el departamento de **Magdalena** ha registrado la reactivación de afectaciones humanitarias por la violencia armada en municipios como Ciénaga y la Sierra Nevada de Santa Marta, que a inicios del 2022 generó un desplazamiento masivo y a partir de este se han evidenciado múltiples desplazamientos individuales e intraurbanos.

Los impactos ambientales también se tornan relevantes enlazados con los fenómenos de variabilidad climática, por cuenta de la deforestación de zonas rurales con fines económicos (minería ilegal) por parte de los GANE, también se evidencia la contaminación de cuencas hidrográficas con químicos por las actividades de procesamiento de coca, impactos por ganadería extensiva y contaminación por aspersiones con glifosato que han generado dificultades en el acceso a agua potable, problemas de salud asociados a afecciones en la piel y altos niveles de mercurio, mortalidad materna²⁴, entre otros.

Antioquia

Las poblaciones del departamento, también son afectadas por las dinámicas de los GANE. Las regiones de Norte, Bajo Cauca, Urabá y Nordeste antioqueño (municipios de Dabeiba, Urrao, Murindó, Vigía, Mutatá y Frontino) viven bajo la constante influencia, injerencia y control de los GANE. Esta situación de control ocurre en zonas urbanas, asentamientos informales y zonas con limitado acceso a bienes y servicios en Medellín (la capital del departamento), donde se ha observado una expansión de la violencia armada. Se destaca la instalación de MAP/MSE que ha generado restricciones a la movilidad, al acceso, y confinamiento dentro de las mismas comunidades. Los hechos victimizantes han supuesto una mayor incidencia en la violencia basada en género, la violencia sexual y el enamoramiento bajo coacción, intimidación y acoso de niñas para el reclutamiento a pesar de las bajas denuncias por desconfianza ante las entidades responsables de la

²⁴ En el departamento de Córdoba, se ha duplicado la mortalidad materna durante el último semestre del año y se ha incrementado en Bolívar

atención. También se ha observado un incremento del desplazamiento intraurbano e individual en municipios como Ituango y Mutatá. En zonas donde convergen al menos tres GANE se evidencia una mayor recurrencia de los homicidios selectivos. Lo anterior, afecta a grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, adultos mayores, comunidades campesinas y étnicas (particularmente indígenas Emberá y Zenú) y personas refugiadas y migrantes.

Hay afectación de pueblos indígenas que no hablan castellano y por lo tanto afrontan barreras a las rutas de atención. Un gran número de comunidades indígenas vive en zonas rurales-selváticas alejadas de los cascos urbanos y en su mayoría, no son hablantes del idioma castellano. Estas condiciones restringen el acceso a servicios esenciales usualmente ubicados en las cabeceras, por los altos costos de transporte y en algunos casos, cuando logran llegar a las cabeceras se encuentran con barreras de lenguaje y estigmatización, dificultando el acceso efectivo a servicios y mecanismos de protección. La violencia desproporcional contra esta población se observa en múltiples asesinatos a líderes indígenas y los casos de suicidio en jóvenes ante las amenazas de reclutamiento por parte de los GANE. Adicionalmente, se detectan impactos socioambientales derivados de macroproyectos hidroeléctricos en el departamento, con especial afectación a las comunidades del municipio de Ituango y poblaciones indígenas del Alto Sinú, cuyos ingresos económicos y bienes producidos no son suficientes para su sustento.

Córdoba

Existe un subregistro de afectaciones por miedo de la población a represalias como parte del control que ejercen los GANE. Los municipios con mayor afectación por factores de violencia armada se concentran en Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Montelíbano, los cuales hacen parte de la subregión del sur de Córdoba. Es de resaltar que en el sur de Córdoba existen obstáculos de atención a los confinamientos dado el desconocimiento que existe por parte de entidades locales para reconocer este hecho victimizante y activar las rutas de atención correspondientes.

Se evidencian riesgos de protección para niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales y dispersas al no tener acceso a educación ya sea por falta de oferta institucional o restricciones geográficas de acceso, facilitando a los GANE acciones de reclutamiento, uso y utilización, y embarazos no deseados. Este año, se ha identificado que los GANE buscan incluso no interferir en el ciclo escolar, ni en espacios familiares o cotidianos de la niñez, lo que invisibiliza las acciones de reclutamiento a través de incentivos económicos. Durante el 2022 también se ha observado la recurrencia de acciones de violencia armada utilizadas como estrategia de control territorial, afectando a la población civil, e incluso estas prácticas han sido identificadas al interior de resguardos indígenas y en trayectos fluviales. Se identifican como poblaciones especialmente vulnerables a las comunidades indígenas Emberá Katío y Zenú, mujeres, personas LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes, y afrodescendientes, e incluso población refugiada y migrante.

Adicionalmente, un impulsor clave que continúa afectando a las comunidades en el sur del departamento es la minería que genera riesgos de protección, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y que también afecta el nexo humanitario con la paz y desarrollo (tenencia de tierras, y las garantías de seguridad).

Bolívar y Sucre

Durante los últimos años, se ha registrado el recrudecimiento de los factores de violencia armada en estos dos departamentos, ubicados en la subregión de los Montes de María, específicamente en el sur de Bolívar y en el norte del departamento de Sucre. Esta zona es un corredor estratégico para los grupos provenientes desde los departamentos de Antioquia y Córdoba. Se identifica como poblaciones vulnerables, líderes y lideresas sociales, presidentes de juntas de acción comunal (JAC), mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades étnicas, comunidades campesinas y personas LGBTIQ+.

El incremento en las disputas territoriales por el control de las zonas mineras del sur de Bolívar durante 2022, ha llevado a más de 3.000 personas a situaciones de desplazamiento y confinamiento siendo el municipio de Santa Rosa del Sur, el principal receptor de población desplazada, dadas las restricciones de infraestructura vial que tienen municipios como Montecristo, Morales, Simití y Norosí para albergar a estas comunidades. Por su parte, para el departamento de Sucre la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 009-21, por el escenario de riesgo que configura el reposicionamiento de un GANE en la zona rural del municipio de Ovejas a través de hechos ya mencionados, entre ellos las intimidaciones y controles sociales, imponiendo horarios para la movilidad en las vías de la zona rural configurando confinamientos de la población civil.

Existe un deterioro humanitario en esta región del país, sin embargo, es importante resaltar que no hay suficientes elementos que permitan analizar la situación de hechos victimizantes causados por factores de violencia armada, debido al subregistro y la baja presencia de los actores humanitarios en estos departamentos.



“Antes de que se viniera Caregato nosotros estábamos recuperados de las inundaciones anteriores, ahora tenemos otra vez problemas con la comida y los cultivos y no alcanzamos a comer ni dos raciones al día”

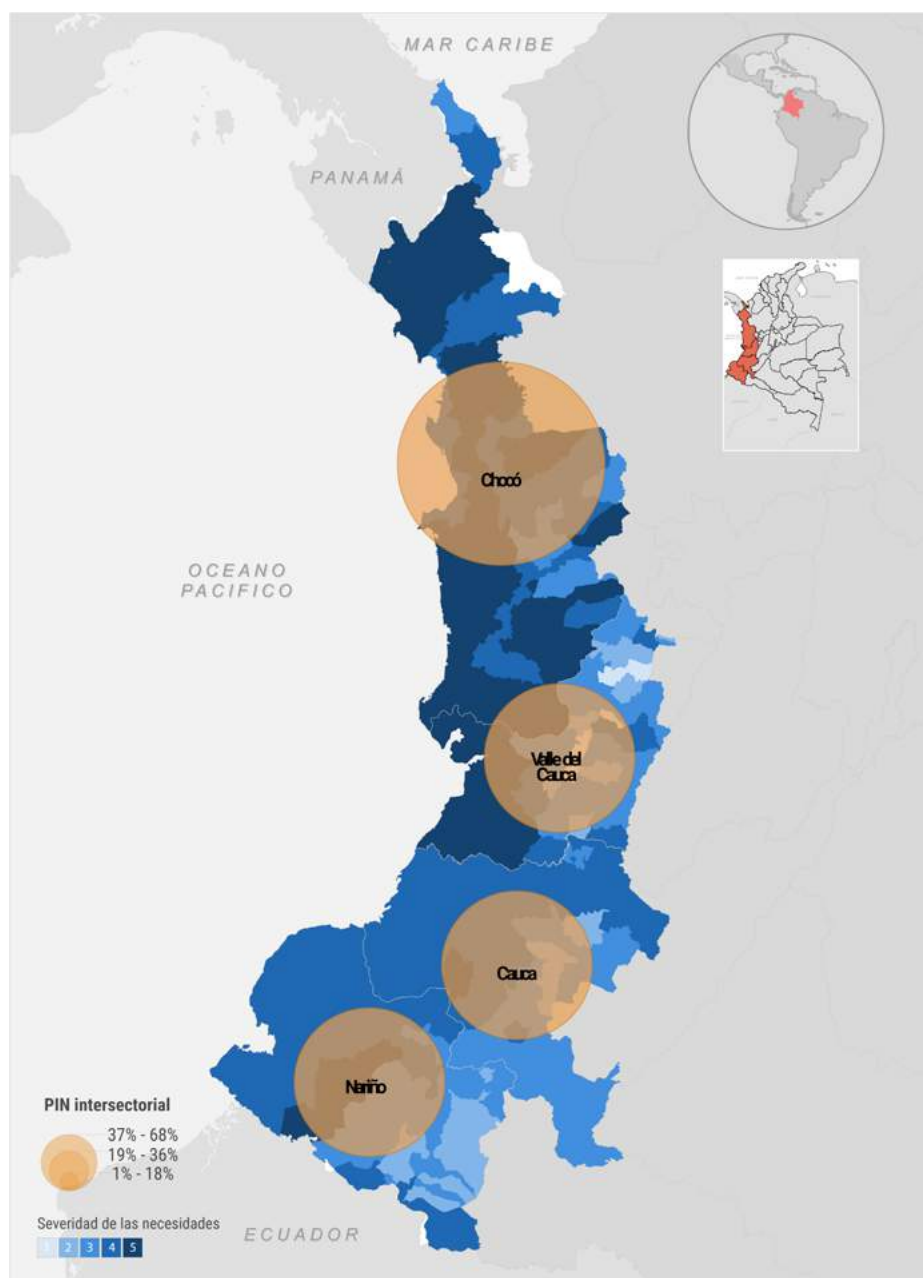
Comunidad Parcelas de Santa Fé, San Benito Abad, (Sucre) -La Mojana-

CÓRDOBA, COLOMBIA

Mujeres indígenas del resguardo Embera Katío Beguidó, en la comunidad de Tierralta, participan en mesa de género. Foto: Carolina García, Heartland Alliance International, 2022.



Región Pacífico



La confluencia de economías ilegales por factores geográficos, de dispersión y la salida al mar son estratégicos para los GANE, razón por la cual Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño se caracterizan por tener la presencia del mayor número de GANE en disputa. A esto se agregan las limitadas capacidades presupuestales de las entidades territoriales para brindar servicios básicos a la población, considerando que muchos de los municipios que componen la región son de sexta categoría, es decir, que no cuentan con los recursos necesarios para atender a la totalidad de la población afectada, pues algunas comunidades reportan estar nuevamente en una emergencia

entre dos y tres veces durante el mismo año. La situación se complejiza en departamentos del Chocó y Nariño donde se reportan la mayor concentración de población desplazada y confinada, y donde la recurrencia y dimensión de las emergencias deriva en impactos multisectoriales en el largo plazo.

Preocupan los escenarios de doble y triple afectación en la subregión debido a la ocurrencia de emergencias por eventos de variabilidad climática de manera cíclica (principalmente inundaciones, crecientes súbitas, vendavales, incendios forestales y sequías), dado el carácter selvático de gran parte del Pacífico.



"Estamos a cuatro horas (4h) de un puesto de salud"

Grupo Focal de Mujeres, MSNA en Chocó, Quibdó

"...sale más barato ir de la comunidad a Medellín que al corregimiento donde hay un hospital de primer nivel"

Grupo focal de Hombres, MSNA en Quibdó, Chocó.

Chocó:

El deterioro de la situación humanitaria en el departamento del Chocó desde mediados del 2021 y primer semestre de 2022, obedece a los factores y consecuencias asociadas a la presencia de los GANE. Mas allá de los desplazamientos individuales y masivos preocupa la configuración de grandes confinamientos prolongados por el control territorial y social de los GANE. Se han afectado directamente poblaciones afrodescendiente e indígenas, mujeres, niñas y niños, población en condición de discapacidad, personas con liderazgo como autoridades étnicas e iglesia que promueven diálogos regionales, con mayor impacto en municipios como Bojayá, Alto y Bajo Baudó, Sipí, Novita, Medio San Juan y Litoral de San Juan; ante esta situación se ha generado una dinámica de múltiple afectación de las comunidades rurales que se concentran en los medios de vida, seguridad alimentaria y salud asociada a necesidades de agua y saneamiento. Los casos reportados de violencia basada género y violencia sexual, han evidenciado situaciones de sexo por supervivencia como un medio para obtener sustento económico.

Chocó concentra la mayor proporción de población confinada en el país. Además, el acceso humanitario no ha sido garantizado en todos los casos, por lo cual, tanto instituciones como miembros del ELC de Chocó han tenido retrasos de hasta un mes para ingresar a las comunidades confinadas para dar una respuesta humanitaria inmediata.

Cabe resaltar que existe un alto impacto de las dinámicas de conflicto armado en la niñez de las comunidades indígenas quienes han tomado medidas de afrontamiento negativo como el suicidio para

prevenir el reclutamiento; así mismo, se identifica la normalización de la presencia de los GANE y la percepción de autoridad ejercida por éstos hacia los menores de 18 años. El aumento de las economías ilícitas como la trata de personas, actividad minera, cultivos de uso ilícito, también propician el aumento de la conflictividad y derivan en mayores riesgos de emergencias humanitarias, los municipios en mayor riesgo son Bojayá, Carmen del Darién, Alto, Medio y Bajo Baudó, San Juan, Costa Pacífica, Riosucio y Ungía.

Aunado a las complejas dinámicas de conflicto armado, el departamento presenta escenarios de doble y triple afectación, por inundaciones cíclicas (72.301 personas damnificadas en 10 emergencias)²⁵ que afecta los medios de vida e ingresos de la población y consecuentemente su seguridad alimentaria y nutricional, y los flujos mixtos extracontinentales que tienen sus rutas de tránsito tanto a través de los municipios del pacífico chocoano (Nuquí, Bahía Solano y Juradó) como en el trayecto de Necoclí (Antioquia) – Acandí o Capurganá hacia el tapón del Darién. Este flujo migratorio sobre la Selva del Darién donde transita la población refugiada y migrante es controlada en gran parte por actores armados, traducándose esto en altos riesgos de afectación humanitaria en medio de ese tránsito.

Las inundaciones son el tipo de emergencia por desastre más recurrente en el departamento generando un impacto en la salud de las comunidades en las zonas rurales, en donde se ha identificado brotes de enfermedades infecciosas, brote de malaria, enfermedades diarreicas, ante la inseguridad por las acciones de los GANE; así mismo la continua muerte de especies menores y afectación de cultivos de pan coger generadas por este flagelo los cuales repercuten en el estado psicosocial de las comunidades. Es importante tener en cuenta que la necesidad de salud en comunidades indígenas en muchos casos se ve limitada por un tema cultural y de lenguaje, imposibilitando una respuesta acorde a las necesidades étnicas de la población víctima de conflicto e inundaciones.

²⁵ Registro primer semestre del 2022, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).



Valle de Cauca:

La presencia de GANE y bandas delincuenciales en diversas zonas del departamento ha generado afectaciones directas a los defensores y defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas, personas en proceso de reincorporación y, líderes, lideresas sociales y comunitarios ante las constantes amenazas, desapariciones forzadas, secuestros y homicidios. Esta situación ha generado el debilitamiento de los procesos de gobernanza territorial, especialmente en los municipios de Buenaventura, El Dovio, Cali, Sevilla, Guacarí, El Toro, Florida, Ansermanuevo y Restrepo en donde se ha evidenciado la intensificación de estos hechos victimizantes.

Las comunidades que habitan en áreas rurales y urbanas de Buenaventura han sido expuestas a constantes restricciones a la movilidad y acceso a servicios en 2022, ante la permanente presencia y accionar de GANE en territorios urbanos y rurales, afectando de manera desproporcionada a los jóvenes que son cooptados por dichos grupos. Se ha afectado gravemente la a población civil (mujeres, niños, niñas, adultos mayores, población LGBTIQ+, líderes sociales, población refugiada y migrante) agudizando hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, los homicidios, las amenazas e intimidación a líderes sociales y reclutamiento de jóvenes. En el departamento, y en municipios del sur y norte del pacífico se identifica al subregistro sobre casos de reclutamiento, uso y vinculación del del departamento en donde hay presencia de varias bandas delincuenciales y GANE, lo que en muchos casos genera desplazamientos individuales.

En entornos urbanos como en la ciudad Cali, la disputa entre los GANE y bandas criminales es cada vez más notoria, debido a las amenazas por parte de GANE que ha ocasionado diversos desplazamientos entre barrios, así mismo se han generado en las comunas casos de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el control territorial en la ciudad se ha traducido en un incremento de casos de cobro de extorsiones financieras -vacunas- a diversos establecimientos de comercio, y a su vez, las fronteras invisibles están generando un grave problema de seguridad para las mujeres, debido a que se han incrementado los casos de violencia sexual perpetrados por los GANE.

Cauca:

En el Cauca los confinamientos suelen ser invisibilizados debido al limitado acceso geográfico y a las restricciones impuestas por los GANE que evitan que las comunidades denuncien el hecho victimizante. En la mayoría de los confinamientos, se da a conocer la situación cuando las comunidades han logrado movilizarse nuevamente, previendo un importante subregistro de este y otros hechos victimizantes debido a que los datos oficiales no concuerdan con las denuncias de las comunidades y de la sociedad civil, incluso en zonas donde históricamente nunca habían estado los GANE y donde ahora hacen presencia, como lo es el municipio de Almaguer.

Los homicidios, amenazas e intimidaciones contra personas que ejercen labores de liderazgo social (presidentes de JAC, líderes y lideresas, y la Guardia indígena) están en aumento. Cabe resaltar que



CHOCÓ, COLOMBIA

Población indígena del Alto Andágueda.

Foto: Claudia Rodríguez, OCHA Colombia, 2022.



“En los alrededores de las escuelas se presentan agresiones con armas, los niños deben ocultarse dentro de los establecimientos educativos”

Grupo focal mixto, MSNA en Quibdó, Chocó.

Cauca es uno de los tres departamentos con el mayor número de homicidios de personas en proceso de reincorporación (PPR). Aunque a pesar del aumento de índices de violencia y las amenazas constantes en contra de civiles, no se realizan denuncias y por ello no se activan las rutas de respuesta.

Así mismo, se evidencia un incremento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En 2022, se han registrado 11 homicidios de esta población, 19 casos de reclutamiento (atendidos por Defensoría del Pueblo), 72 casos de vinculación de niños niñas y adolescentes a actividades relacionadas con GANE reportados por la UARIV, particularmente en los municipios de Argelia, Popayán, Caldono, Guapi, La Sierra, Páez, Timbiquí y Toribio. De acuerdo con el

registro de víctimas, se han registrado más de 9.738 casos de amenaza contra la vida de niños, niñas y adolescentes.

Dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad también se encuentra la población refugiada y migrante. Entre 2018 y julio de 2022, la Defensoría del Pueblo ha emitido 56 alertas tempranas en donde señalan los riesgos a los que se enfrenta la población venezolana, destacando Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Arauca, Antioquia y Bogotá como los departamentos más afectados²⁶. La entidad también destaca la existencia de un considerable subregistro frente a las cifras reales de doble afectación por conflicto armado, dado que existen serias barreras para la garantía de acceso a derechos de asistencia,

²⁶ Entre las principales conductas vulneratorias de derechos se encuentran; homicidio, regulación a la movilidad, homicidio selectivo, trata de personas y violencia basada en género. Defensoría del Pueblo. Tablero Dinámico sobre Alertas Tempranas. Consultado el 28 de julio 2022. Para ver más información sobre la situación, necesidades y estrategia de respuesta integral para la población refugiada y migrante en Colombia, favor consultar el capítulo Colombia del Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes – R4V RMNA 2022 (<https://rmrp.r4v.info/rmna/>), y el capítulo Colombia del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes – R4V RMRP 2023-24 (<https://rmrp.r4v.info/>).

atención, protección, justicia y garantías de no repetición, así como amenazas generalizadas y directas por parte de los GANE que restringen a las personas migrantes y refugiadas para que sean registradas en los censos de las JAC.

Estas acciones armadas han dejado consecuencias como la pérdida de la identidad cultural, ruptura del tejido familiar, limitaciones al acceso a la educación, necesidades de seguridad alimentaria, limitaciones al acceso de la salud (acceso a derechos esenciales y medicamentos), además de la falta de articulación institucional al momento de la respuesta a situaciones humanitarias (dificultades de atención inmediata en los municipios, planes de contingencia que no están actualizados, bajos presupuestos, falta de articulación, entre otros factores).



"Con la salud en Quibdó estamos en el subsuelo (...), la infraestructura del hospital es muy mala, los servicios también son deplorables y no tienen insumos, escuchamos noticias que en pandemia las personas tenían que comprar los utensilios médicos para que los atendieran"

Grupo focal hombres, MSNA en Quibdó, Chocó

Nariño:

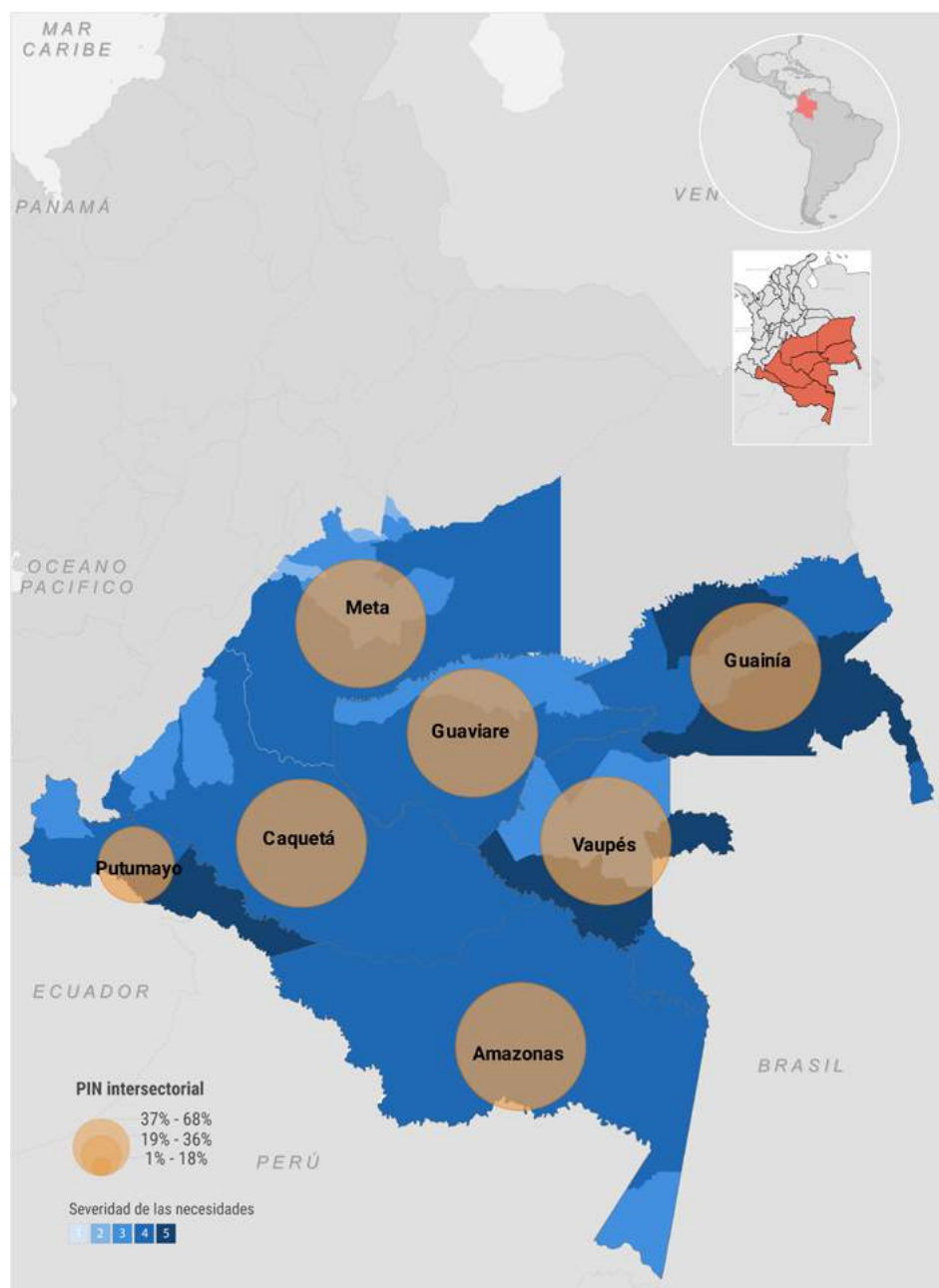
Nariño es el departamento con mayor afectación a nivel nacional por desplazamiento forzado. Las administraciones municipales reportan un desborde de capacidades ante la recurrencia de las emergencias, la atención subsidiaria de inmediatez puede llegar a tardar ante la carencia de recursos técnicos y financieros para brindar una respuesta a las familias. La injerencia de los diversos GANE en las subregiones, así como sus planes de expansión y enfrentamientos, han generado impactos principalmente en la subregión de Sanquianga.

Las dinámicas de conflicto armado en el departamento afectan especialmente a la población afrodescendiente e indígena de las zonas rurales en donde se han registrado desplazamientos masivos y confinamientos recurrentes y prolongados como estrategia de los GANE para aumentar control territorial, lo que ha generado un desarraigo y abandono de tierras, a su vez ha evidenciado la limitada capacidad de respuesta de las administraciones municipales ante la recurrencia de estos eventos.

Ante las emergencias de situación humanitaria por desplazamientos, ha tenido lugar el regreso de las víctimas a sus hogares sin darse los principios mínimos para el retorno (voluntad, dignidad y seguridad). La falta de acompañamiento ha generado riesgos en la vida e integridad de las comunidades. Las restricciones a la movilidad y confinamiento han propiciado a este deterioro, especialmente los confinamientos prolongados en donde la capacidad de respuesta institucional y de cooperación es limitada por las mismas condiciones de seguridad y vacíos en la ruta de la respuesta para este hecho, el acceso por el estado de las vías rurales y la presencia de los GANE en las vías fluviales.

Nariño ha registrado afectaciones a misiones médicas, en donde se ven afectados no solo a los establecimientos, sino que se han presentado homicidios en contra de personal de la salud, así mismo existe un alto impacto en la salud mental de las comunidades que viven bajo la influencia y disputa de GANE, en particular en los niños, niñas y adolescentes, mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Región Centro-Sur



Esta región concentra departamentos del centro-Sur como son: **Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas** (estos dos últimos tienen frontera con Ecuador), **Guainía y Vaupés** (frontera con Brasil), y se caracteriza por una alta dispersión geográfica y diversidad de pueblos indígenas, con una baja presencia institucional en la mayoría de los municipios de la región y en las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. Estos territorios presentan necesidades humanitarias

similares con brechas estructurales (agua segura, educación, salud, transporte y comunicación), pero agudizadas por la expansión y reconfiguración de GANE que buscan el control territorial y poblacional, dejando impactos recurrentes en las comunidades.

En la región se reportan ataques contra civiles como amenazas, homicidios a líderes y líderes, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado (especialmente



Fuente: Monitor-OCHA. Fecha de corte: enero 2023

desplazamientos individuales con algunas emergencias masivas), e imposición de códigos de conducta que resultan en restricciones a la movilidad y confinamientos naturalizados en las subregiones del medio y bajo Putumayo, centro y sur del Caquetá. También llama la atención las zonas fronterizas con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela en donde se está dando un relacionamiento de los GANE con grupos criminales de carácter transnacional, aumentando la violencia y causando situaciones de riesgo de protección y violencia basada en género.

Los GANE en la región promueven el desarrollo de economías ilícitas como cultivos de uso ilícito, minería ilegal, deforestación, ganadería extensiva y apropiación de tierras en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Amazonas, generando una relación entre el deterioro de las condiciones de seguridad y el deterioro ambiental al **contaminar** los ríos con metales pesados y otros elementos químicos, afectando la salud y seguridad alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas que dependen de la agricultura y pesca para su alimentación. Es preocupante la afectación diferencial a las comunidades indígenas que, frente la ocurrencia de emergencias y las situaciones de violencia pierden su identidad y capacidad de resiliencia; por lo anterior, las acciones de protección deben de estar orientadas a mantener las tradiciones y preservar la cultura de estas comunidades. En promedio, al menos el 35 % de la población de estos departamentos (374.790 personas), reportan necesidades básicas insatisfechas, especialmente en Guainía y Vaupés.

Preocupa la vulnerabilidad de la región ante emergencias recurrentes causadas por la variabilidad climática, en muchos casos de manera cíclica (principalmente inundaciones, crecientes súbitas, vendavales, incendios forestales y sequías), que ponen en riesgo a la población, especialmente por la falta de recursos para la atención en la mayoría de los municipios, junto a la falta de elaboración de planes de gestión del riesgo y dificultades de acceso ahondadas por estos eventos. El cambio climático está generando cambios en los regímenes de lluvia, ciclos de los ríos y en el calendario ecológico (tiempo de siembra, cosecha, casería y pesca), sin que las comunidades puedan prever el impacto, poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas. Ante las brechas existentes, las poblaciones no reciben una atención oportuna en materia de provisión de ayuda humanitaria de emergencia con componentes de alojamiento, alimentación, salud y acceso seguro a agua, que repercute en una posible revictimización en el corto y mediano plazo.

Meta y Guaviare

El incremento de los riesgos de protección en estos departamentos obedece principalmente al accionar de los GANE, agudizados por los efectos prolongados de la COVID-19, los retos de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, la débil presencia de las instituciones del Estado en áreas rurales y la política de militarización ambiental que, de manera directa o indirecta, contribuyen a las tensiones sociales y disputas por el territorio prolongando las consecuencias humanitarias del conflicto armado, siendo los campesinos y pueblos indígenas la población más afectada.

La expansión y reconfiguración de GANE ha generado un resurgimiento de los hechos de violencia y aumento de las emergencias humanitarias por desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y al acceso humanitario afectando al menos a 56.706 personas durante el primer semestre del 2022 ([Ver Factsheet](#)) (80% en Guaviare y 20% en Meta) con mayor ocurrencia en los municipios del sur del Meta como La Macarena, Vistahermosa, Puerto Concordia, Mapiripán y los cuatro municipios de Guaviare. Los ataques contra civiles, restricciones y otros accidentes ya mencionados en esta región también impactan a poblaciones principalmente las amenazas a líderes y lideresas —incluyendo aquellos con roles de defensa del medio ambiente—.

Durante el 2022 se han dado emergencias por inundaciones y deslizamientos en zonas rurales y urbanas en más de 19 municipios, generando afectaciones en seguridad alimentaria y nutrición, medios de vida y salud, junto a limitaciones de acceso por daños o impedimentos de paso en las vías por su mal estado.

Caquetá

Durante el 2022 se ha presentado un incremento en los desplazamientos individuales evitando la visibilidad y como estrategia para evitar alertar a los GANE, quienes imponen la “ley del silencio” para que no denuncien los hechos victimizantes: Florencia es el principal municipio receptor de la población víctima que llega proveniente de otros municipios del Caquetá, incluso Putumayo. El aumento de estos eventos aumenta el riesgo de casos de revictimización de las personas desplazadas, especialmente por casos de Violencia Basada en Género.

La reconfiguración y expansión de GANE y las disputas por el control territorial aumentaron el riesgo de combates entre GANE y/o la fuerza pública, y han generado diferentes hechos de violencia, similares a otros departamentos de la región en los municipios de Cartagena del Chairá, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, San Vicente del Caguán, San José del Fragua y Solano. En este escenario existe desconfianza en las comunidades del centro del departamento

(especialmente indígenas) sobre las personas que ingresan a sus territorios, ya que no siempre logran identificar o distinguir a los integrantes de los diferentes GANE, aumentando el temor y la zozobra ante represarías de uno u otro grupo por cumplir o no cumplir sus exigencias; la disputa territorial.

Putumayo (frontera con Ecuador y Perú)

Se ha dado una expansión de los GANE con mayor afectación en las zonas del Medio y Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, y Puerto Leguizamo) generando emergencias humanitarias en años recientes y posterior a la firma del Acuerdo de Paz, entre ellas: confinamientos y desplazamientos masivos e individuales. Sumándose a las dinámicas de Caquetá y otros departamentos de la Amazonía, se resalta la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes al reclutamiento, uso y vinculación a los GANE, ya sea en la integración directa de sus filas, su uso como informantes o en actividades relacionadas con cultivos ilícitos, junto a las amenazas contra la población LGBTQ+.

[La falta de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones imposibilita la denuncia de los diferentes hechos de violencia y el reporte de las emergencias por desastres de manera oportuna, dificultando así la respuesta humanitaria.](#)

Durante el 2022 el fenómeno de La Niña ha generado afectaciones en 13 municipios del departamento, registrando daños en las vías y pérdida pecuaria y de cultivos, en donde la respuesta del Estado no ha sido suficiente. A los pueblos indígenas les preocupa el impacto de la minería -legal e ilegal- por la contaminación de fuentes hídricas y la pérdida de fauna silvestre, de los cuales dependen su supervivencia física y cultural.

Amazonas

Durante el 2022 se ha generado una expansión territorial de los GANE, que promueven las economías ilícitas (cultivos de uso ilícito, minería ilegal y deforestación), operando principalmente en las áreas

no municipalizadas - [Alerta Temprana 002-21](#) - y se disputan el control de los principales ríos (Amazonas, Apaporis, Caquetá, Cothue y Putumayo) que utilizan como rutas de tránsito y movilidad de bienes ilegales. Los GANE también, han fortalecido sus redes criminales a través de alianzas extra regionales con grupos criminales de carácter transnacional que operan en las fronteras con Brasil y Perú y relacionados con el narcotráfico. Ante esta situación la población se enfrenta a riesgos de protección que, a pesar de no generar emergencias masivas sí genera riesgos de protección por dinámicas de violencia sexual, control social e instrumentalización de la población en economías ilegales, entre otros ataques contra civiles reflejados en restricciones de la movilidad y acceso.

En general se percibe una carencia de atención y prestación de servicios y derechos básicos con enfoques diferenciales étnicos que permitan el goce efectivo de los derechos de las comunidades indígenas. La falta de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones y la baja o nula presencia institucional imposibilita la denuncia de los diferentes hechos de violencia y no se formalizan las denuncias por desconfianza en las instituciones y posibles represalias de los GANE, dificultando la verificación de los hechos victimizantes.. La población presenta problemas de salud asociados con la falta de acceso a agua segura, servicios de salud -inclusive la medicina tradicional- que, a su vez, y junto al accionar de los GANE, han generado problemas de salud mental que se evidencia en el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes que denuncian las comunidades.

Los impactos ambientales enlazados con los fenómenos de variabilidad climática, están cambiando el ciclo de los ríos y el calendario ecológico (tiempo de siembra, cosecha, cacería y pesca), sin que las comunidades puedan prever el impacto, poniendo en riesgo la pervivencia de las comunidades indígenas.

Guainía

Existe un gran subregistro de los impactos humanitarios y visibilidad de las emergencias, derivados de la baja presencia institucional y la

desconfianza hacia las mismas por parte de la población afectada; las rutas de atención y protección e incluso de reparación son débiles y no se están acordes al contexto en donde la población es principalmente indígena, o existe desconocimiento de estas por parte de la población. A Inírida, arriban personas desplazadas de otros departamentos (Vichada, Meta y Guaviare) y, en menor proporción, población refugiada y migrantes e indígena en zonas rurales de Guainía, en donde se resalta como focos de expulsión las comunidades ubicadas en el medio río Guainía y sobre el río Guaviare (límites con Vichada). Las familias desplazadas tienen una doble afectación debido a que llegan a Inírida con vulnerabilidades económicas y se asientan en zonas de alto riesgo de ocurrencia de desastres, en barrios o asentamientos informales en la periferia del casco urbano y en resguardos o comunidades aledañas a estos.

La presencia de GANE está relacionada con actividades ilegales alrededor de las minas de oro y coltán en la zona de frontera y se relacionan con casos de reclutamiento forzado, uso e instrumentalización de la población en economías ilegales, aumentando el riesgo de violencia sexual y trata de personas (principalmente mujeres y niñas).

Vaupés

La falta de rutas terrestres de acceso y conexiones fluviales o aéreas internas, sumando a la nula conectividad y baja presencia institucional dificulta la verificación de los hechos de violencia y las emergencias que se presenten en el departamento. Durante el 2022 se ha dado una reconfiguración de las dinámicas del conflicto armado y expansión territorial de los GANE que hacen presencia en los tres municipios del departamento y también en las áreas no municipalizadas, ubicándose principalmente en los ríos, en donde realizan actividades ilícitas como la minería ilegal (de oro y coltán) y los usan como rutas de tránsito y movilidad de bienes ilegales. La población se enfrenta a riesgos de protección por amenazas, desplazamientos, violencia sexual contra niñas y mujeres y al [reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes](#).

Este contexto ocasiona cambios en las formas de relacionamiento al interior de las comunidades indígenas, derivado de la pérdida de la autonomía en la administración del territorio y en la ruptura del tejido social y de las prácticas culturales y alimentarias (incluyendo la pérdida de capacidades para el autoabastecimiento). También se presenta la desarticulación de las instituciones entre sí y con

las autoridades indígenas, lo que dificulta la atención a emergencias por violencia y desastres, prestando una atención precaria, sin programas de prevención ni obras de mitigación que se implementen para disminuir el impacto cíclico de los desastres agravados por el cambio climático (las inundaciones, vendavales e incendios forestales) generados en parte por la deforestación que realizan los actores ilegales.

VAUPÉS, COLOMBIA

Evaluación MIRA en Comunidad indígena de Bocas del Yí.
Foto: Andres Torres, OCHA Colombia, 2022.



Parte 2:

Análisis de riesgo y monitoreo de situación y necesidades

NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Mujer en unidad de atención de salud

Foto: Zandra Estupañán, WFP Colombia, 2022.



2.1

Análisis de Riesgos

Se prevé que las dinámicas de violencia producto del conflicto armado en Colombia y las emergencias humanitarias con afectaciones en el corto y mediano plazo para la población continuarán durante el 2023. Con los resultados de las elecciones presidenciales de agosto del 2022 se han observado cambios en las esferas política, social y económica por diferentes contextos que, acompañadas por las dinámicas económicas globales tendrán un impacto en los territorios con mayores niveles de conflictividad. El incremento en el precio de diversos bienes básicos para la población, los diálogos de paz con distintos actores del conflicto, las consecuencias de emergencias recurrentes generadas por el cambio climático, el periodo de elecciones regionales (que regularmente viene acompañado de acciones de violencia política y electoral), y el deterioro de las condiciones de vida de población que continúa en situación de desplazamiento y confinamiento serán factores determinantes para el incremento o continuidad de los niveles de violencia armada y ataques contra la población civil durante el 2023.

INFORM Index

NATURAL 6,7	INFRAESTRUCTURA 2,9
HUMANO 7,0	CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 3,6
AMENAZA Y EXPOSICIÓN 6,9	RIESGO INFORM 5,4
VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 3,8	CLASE DE RIESGO ALTO
GRUPOS VULNERABLES 7,8	
VULNERABILIDAD 6,2	

Información adicional
www.inform-index.org



Datos sobre Colombia en:
<https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Country-Risk-Profile>



A continuación, se relacionan los factores de riesgos identificados en los diferentes ejercicios de consulta, y con probabilidad de ocurrencia, agravando las necesidades actuales:



Conflicto armado y otros factores de violencia

- ⚠ Se prevé la **continuación de acciones armadas por parte de los GANE y de estos con la Fuerza Pública** (enfrentamientos, incursiones armadas, combates, entre otros), en departamentos con presencia de dos o más grupos, donde se han evidenciado disputas por el control territorial y de rutas para diversas economías ilegales como: el Pacífico (Nariño, Cauca y Chocó), el bajo cauca Antioqueño, el sur de Bolívar, la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, Arauca, Caquetá y Putumayo. En estas mismas zonas, **persistiría imposición de normas de conducta y fortalecimiento de los controles territoriales** debido a la necesidad de los GANE de posicionarse frente a otros actores y frente al gobierno nacional, de cara a los diálogos de paz que se vienen desarrollando en los territorios.
- ⚠ **Incremento en las acciones de violencia masiva o selectiva** (amenazas, homicidios selectivos, masacres o secuestros) en territorios donde no se evidenciaban acciones de violencia armada representativas como: Risaralda, Sucre, Amazonas y Meta, Huila, Tolima, Atlántico, y departamentos del Magdalena Medio. Cabe resaltar que las actividades encaminadas a la defensa del territorio, la protección medio ambiental, reclamación de tierras, fortalecimiento organizativo o actividades sindicales continuarán siendo objetivos de violencia por parte de los GANE.
- ⚠ Las organizaciones también han **alertado sobre la urbanización del conflicto armado y el incremento de los desplazamientos individuales**, relacionado con la intensificación de reclutamiento, vinculación y explotación/trata de personas en los cascos urbanos y grandes ciudades donde los GANE han venido fortaleciendo sus intereses, que puede llevar al despojo de tierras, la pérdida del tejido social, debilitamiento de las estructuras comunitarias, entre otros. Especial atención debe ser prestada a los departamentos de Córdoba, Guainía y Valle del Cauca donde se ha venido alertando cada vez más sobre esta problemática.
- ⚠ **Mayor intensidad en las conflictividades socioambientales entre las comunidades y las entidades del Estado.** En los municipios con mayor nivel de actividades ilegales relacionadas con cultivos de uso ilícito, deforestación y minería ilegal (departamentos de la zona Centro-Sur y de frontera donde confluyen estructuras criminales binacionales) se prevé un aumento del impacto humanitario sobre las poblaciones vinculadas a dichas economías, bien por elección propia como medio de vida, o por ser coaccionados por los GANE. Lo anterior incluye **riesgos relacionados con la expansión de la frontera agrícola y la contaminación de las principales fuentes de agua** de las comunidades que genera el deterioro de la salud física y mental de la población.
- ⚠ **Aumento de inseguridad alimentaria.** Dado el impacto masivo de las lluvias durante los 12 meses del año los cuales han afectado significativamente la capacidad productiva de las regiones afectadas sumado a estimaciones de menor producción a causa de la falta de fertilizantes, se teme un posible escenario de aumento de la inseguridad alimentaria en zonas vulnerables del país la cual ya afecta a unas 21.5 millones de personas²⁷.
- ⚠ Estos factores continuarán generando **necesidades y riesgos en materia de protección** como consecuencia de desplazamientos forzados, accidentes con MAP/ MSE, confinamientos, ataques, agresiones y control social contra civiles y las consecuentes limitaciones de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, como alimentación, educación, agua segura, condiciones dignas de alojamiento y prestación de servicios de salud.

²⁷ FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2022) The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI por sus siglas en inglés) 2022. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000141083/download/?_ga=2.173352608.2006309539.1666208600-270915537.1663885958 and WFP (2022) Computer-Assisted Telephone Interviewing. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security- World Food Programme Official. Información del trimestre Enero-Marzo 2022. Boletín interno de WFP.

Factores o escenarios de riesgo en 2023

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO
 Factores de violencia	Reconfiguración de los GANE en comunidades rurales y aumento de la presencia en centros poblados (expansión y consolidación)	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad especialmente comunidades afrodescendientes e indígenas	Antioquia, Amazonas, Cauca, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Bolívar y Norte de Santander	Alta	Extremo
	Incremento en las incursiones, operativos de la FFPP, enfrentamientos entre GANE, entre otras acciones de violencia armada	Poblaciones bajo control e influencia de los GANE (población rural, comunidades afrodescendientes e indígenas y niños, niñas y adolescentes	Caquetá, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia, Bolívar y Chocó	Alta	Extremo
	Reclutamiento, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes, y otros impactos en la niñez debido a la necesidad de expansión de los GANE	Niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas y rurales, especialmente de comunidades étnicas	Antioquia, Amazonas, Arauca, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Vaupés	Alta	Extremo
	Incremento en la contaminación por AEI/ MAP/MSE/TE	Hombres, niños, niñas y adolescentes	Chocó, Nariño, Norte de Santander	Medio	Extremo
	Incremento de los ataques contra la población civil (homicidios selectivos, amenazas individuales y colectivas, secuestros, entre otros)	Población LGTBIQ+, niñas, niños y adolescentes, mujeres, defensores y defensoras de DDHH, autoridades étnicas, representantes de la iglesia, docentes, reclamantes de tierras, activistas ambientales, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), campesinos y personas en proceso de reincorporación	Antioquia, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, la Guajira, Meta, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca y Vichada	Alta	Extremo
	Incremento de las violencias basadas en género (VBG), violencia sexual y explotación sexual en el marco del conflicto	Mujeres, niños, niñas y adolescentes y comunidad LGTBIQ+	Antioquia, Amazonas, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Guainía	Alta	Extremo
	Incremento de desplazamientos masivos, individuales, confinamientos, restricciones a la movilidad y restricciones de acceso humanitario	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	Antioquia, Amazonas, Arauca, Guainia, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca, Vaupés, Córdoba, Putumayo, Chocó	Alta	Extremo
	Incremento de los conflictos por el mantenimiento de las economías ilegales de los GANE, deforestación, expansión de la frontera agrícola, cultivos de uso ilícito y ocupación de tierras	Población bajo control e influencia de GANE	Antioquia, Cauca, Chocó, Amazonas, Córdoba, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo	Alta	Extremo

Factores o escenarios de riesgo en 2023

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO
	Incremento en el precio de bienes y servicios por la volatilidad del dólar y la inflación (incluye la eliminación de subsidios al combustible por parte del gobierno nacional en zona de frontera)	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	32 departamentos	Alta	Extremo
	Elecciones regionales y tránsito de poderes que generen situaciones de violencia electoral u otros impactos en la población	Población bajo control e influencia de GANE	Antioquia, Amazonas, Caquetá, Chocó, La Guajira, Putumayo, Valle del Cauca	Alta	Medio
 Factores Socio-económicos	Eventos de salud pública con dificultades en la atención por la precarización de servicios de salud (salud mental, desnutrición en niñas, niños y adolescentes, mortalidad infantil, entre otros)	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	Chocó, Córdoba, La Guajira, Meta, Guaviare, Norte de Santander, Vaupés, Amazonas y Arauca	Alta	Extremo
	Deterioro de las condiciones estructurales de acceso a servicios de educación, salud y WASH	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	Oriente, Pacífico y Amazonía	Media	Extremo
	Aumento de la inseguridad alimentaria	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	32 departamentos	Alta	Extremo



Desastres causados por variabilidad climática

Pronósticos del IDEAM sobre la **extensión de la segunda temporada de lluvias en Colombia hasta marzo de 2023, con el agravante de intercalarse inmediatamente del fenómeno de La Niña al Niño**. Se estiman entonces volúmenes de lluvia entre el 20 y 40 por ciento por encima de los promedios históricos en todo el país, alertando a poblaciones en la región Caribe por tener la mayor afectación. En el segundo semestre de 2023 se prevé la ocurrencia de huracanes y/o tormentas tropicales propia de esta temporada de vientos fuertes.

El cambio climático continuaría agravando y **aumentando la recurrencia de las emergencias por eventos de variabilidad climática**. La fuerte temporada de lluvias que se presentó durante el 2022 mostró que la variabilidad climática pone en riesgo más municipios que en años anteriores (caso La Mojana), desbordando la capacidad de respuesta de la institucionalidad y de la cooperación.

La **continuidad de estas emergencias climáticas (las inundaciones prolongadas) podría conllevar a un aumento de la inseguridad alimentaria** dadas las continuas afectaciones a los sedimentos en

las tierras cultivables que impiden la siembra por periodos de hasta 6 meses antes de su recuperación, sumado al incremento en los costos de transporte de los alimentos por el deterioro de las vías de ingreso.

También se prevé un aumento de la **deserción escolar** tras múltiples interrupciones en el periodo escolar por daños en la infraestructura de las instituciones educativas y causando afectaciones a la salud (enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y enfermedad diarreica aguda); aumentaría el riesgo para mujeres, niños, niñas, población con discapacidad y adultos mayores.

Se percibe en los **campesinos, pueblos indígenas y afrocolombianos pérdida de capacidad de resiliencia** frente al nuevo comportamiento e imprevisibilidad de las emergencias por desastres debido a la variabilidad y cambio climático. A esto se suma el **riesgo de múltiple afectación en zonas bajo la influencia de los GANE que restringe el acceso a servicios básicos, expone a riesgos de protección a la población**, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes; deteriorando las condiciones y medios de vida de la población principalmente indígena por la afectación que genera la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito en sus territorios.





CHOCÓ, COLOMBIA.

Acceso a población en misión al Alto Andágueda.

Foto: Claudia Rodríguez, OCHA Colombia, 2022.

Factores o escenarios de riesgo en 2023

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO
 Desastres agravados por el cambio climático y la variabilidad climática	Doble afectación por fenómenos climáticos y afectación por factores de violencia armada.	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y Sucre.	Alta	Extremo
	Inseguridad Alimentaria y enfermedades relacionadas con el deterioro del estado nutricional.	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad	Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle de Cauca, Sucre, Vaupés y Vichada.	Alta	Medio
 Antrópicos	WASH, Salud, Educación	Todos los grupos en situación de vulnerabilidad con énfasis en niños, niñas y adolescentes	Pacífico, Noroccidente, Nororiente y Orinoquía-Amazonía	Alta	Medio

Proyección de las necesidades

Frente al escenarios de riesgo previsto y expuestos en esta sección, se prevé que los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad priorizados sigan teniendo impacto por la situación interna del país. Ante esta situación y a pesar de haber políticas de paz total y acciones anticipatorias para mitigar el impacto y aliviar el sufrimiento humano, se espera un aumento de las personas en necesidades para 2023. En el caso de Colombia considerando la agudización del conflicto y la amplia temporada de lluvias que se extenderá a causa del Fenómeno de la Niña, además de otros factores asociados al cambio climático, e incluso factores globales que repercuten en la economía y condiciones de vida de miles de personas.

Estimación de víctimas y afectados para 2023

 **80,9k**

Víctimas de desplazamientos masivos

 **118,2k**

Víctimas de confinamiento

 **455,9k**

Afectados por eventos de origen natural

[Encuentre más información en este enlace](#)



CHOCÓ, COLOMBIA

Misión conjunta visibilización doble afectación en comunidades indígenas y afrodescendientes.
Foto: Alejandra Jiménez, OCHA Colombia, 2022.

2.2

Monitoreo de la Situación y de las Necesidades

Con base en el marco del análisis, el seguimiento de la situación humanitaria de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad priorizados en Colombia se realizará según los indicadores seleccionados tanto de manera sectorial como intersectorial (ver sección 4 – Anexos-). Estos indicadores cualitativos y cuantitativos se alimentan de datos oficiales y propios de manera periódica, considerando la desagregación por género, edad, pertenencia étnica para los cambios en las condiciones de vida de las personas en necesidades y la gravedad las mismas debido al desarrollo del contexto. Este monitoreo permitirá alertar a la comunidad humanitaria sobre nuevas dinámicas, riesgos e impactos de protección que continúen deteriorando el bienestar y medios de vida de muchas comunidades, permitiendo realizar un análisis conjunto y actualizar las necesidades, para que, en caso de ser necesario, tomar decisiones que puedan dar un nuevo enfoque a la respuesta humanitaria planeada.

El tiempo del monitoreo está establecido en seis meses, en los cuales se podrá determinar la evolución de la situación en relación con los diferentes factores de riesgo identificados o de nuevas coyunturas que, de manera excepcional se desencadenen sin estar previstas, y que alteren su entorno en diferentes dimensiones, teniendo en cuenta sus características de diversidad.

Los instrumentos que apoyarán este monitoreo serán los sistemas y datos existentes que se utilizan y complementan como parte del trabajo coordinado entre los socios humanitarios e instituciones del Estado, que den cuenta de necesidades y barreras de acceso a los diferentes servicios y derechos fundamentales en su entorno e incluso en contextos de emergencias. Considerando lo anterior, las limitaciones de acceso a la salud y vacíos en sistemas de agua y saneamiento básico que impactan en la evolución de la inseguridad alimentaria y que podría resultar en niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, casos de mortalidad por y asociada a desnutrición, bajo peso al nacer en niños y niñas nacidos.

14 INDICADORES PRIORIZADOS DESDE LOS CLÚSTERES E INTERSECTORIALES

CLÚSTER	INDICADORES CRÍTICOS SELECCIONADOS
Agua, saneamiento e higiene	Porcentaje de hogares que tienen acceso de calidad a servicios de agua mejorada por tipo de fuente
	Porcentaje de hogares que utilizan una instalación de saneamiento, por tipo de instalación de saneamiento utilizada
Seguridad alimentaria y nutrición	Número de personas con inseguridad alimentaria
	Número de niños y niñas nacidos vivos a término con bajo peso al nacer
Salud	Población con barreras de acceso a salud
	Mortalidad en menores de 5 años (Incluye mortalidad por EDA, IRA y Desnutrición)
Recuperación temprana	Víctimas del conflicto que superan situación de vulnerabilidad, y víctimas que les falta derecho a generación de ingresos para superar vulnerabilidad.
Protección	Personas desplazadas que no han superado la condición de vulnerabilidad generada por el conflicto armado.
Educación en Emergencias	Deserción escolar
	Cobertura escolar
Alojamientos	Número de personas afectadas por desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos
	Número de personas afectadas por el conflicto armado con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales
Intersectorial	Afectación por conflicto armado
	Índice de Pobreza multidimensional

Parte 3:

Análisis Sectorial

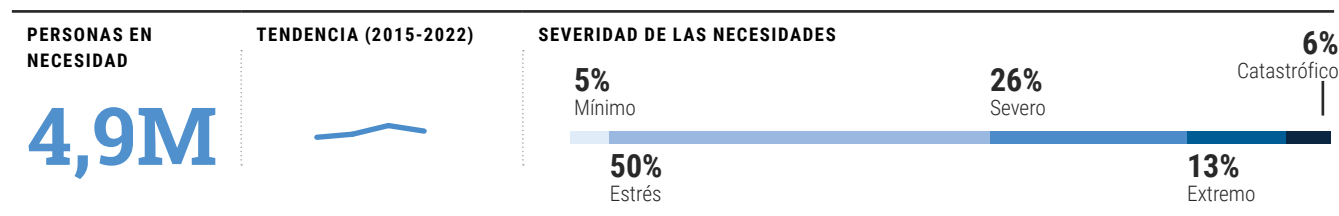
SUCRE, COLOMBIA

Visita intersectorial (CERF) a la
región de La Mojana.

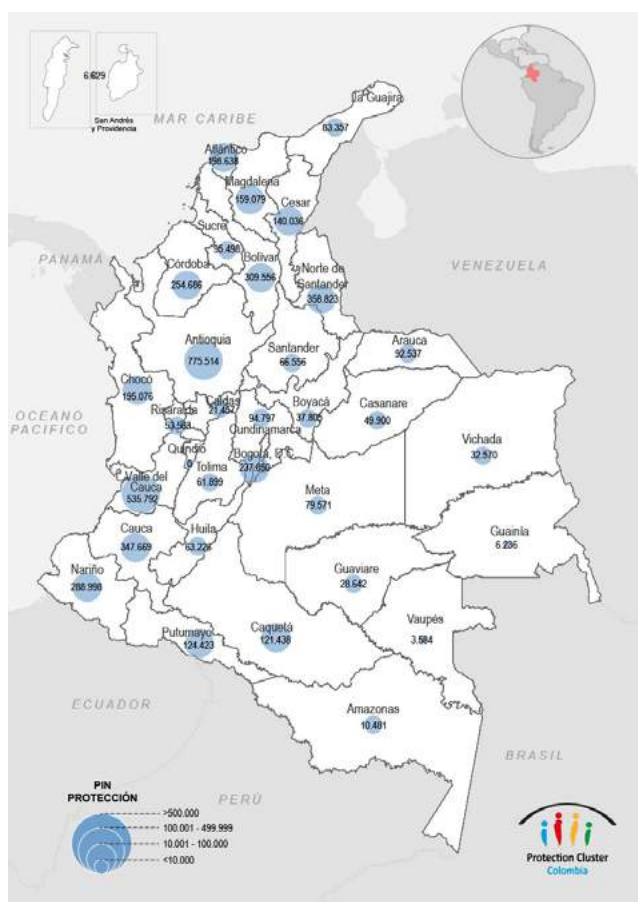
Foto: SAED, 2022



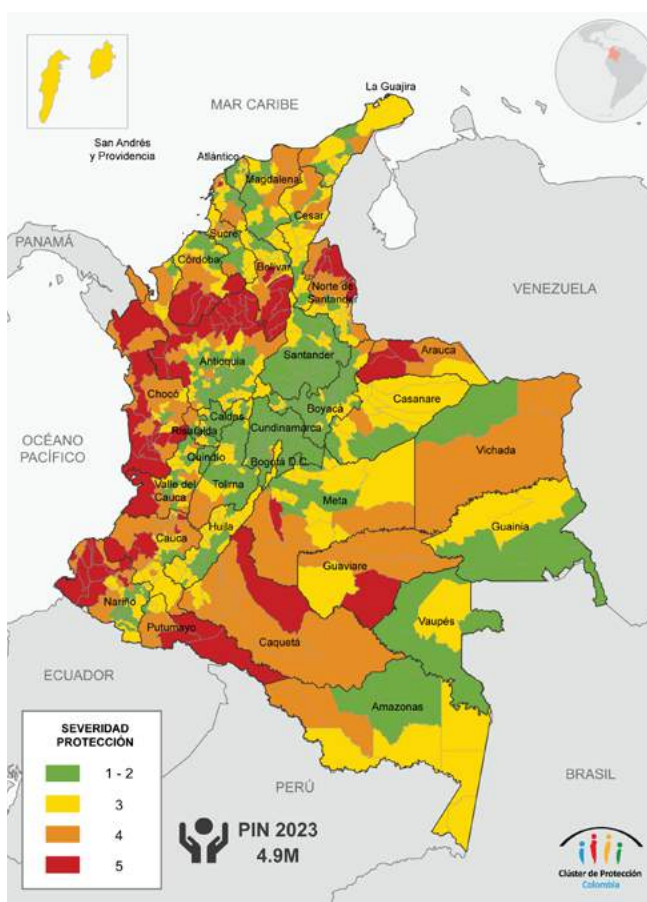
3.1 Protección



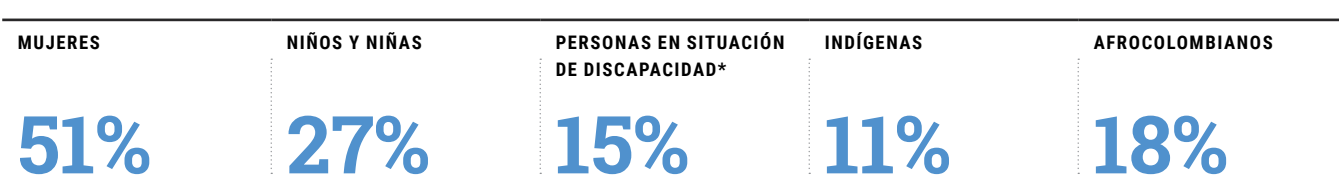
PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN



* Porcentaje establecido en la Guía de Inclusión de personas con discapacidad en acción humanitaria. IASC, 2019.



CHOCÓ, COLOMBIA.

Reunión con autoridades indígenas de Murindó para la coordinación del ingreso de ayudas humanitarias.

Foto: Andrea Acuña, OCHA Colombia, 2022.

En Colombia persisten vulneraciones de DD.HH. y DIH generadas por la persistencia del conflicto armado, desastres agravados por la variabilidad climática que se concentran de manera desproporcionada en territorios de ruralidad dispersa, territorios étnicos y periferias urbanas.

Análisis de las Necesidades Humanitarias.

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC-EP, Colombia ha experimentado una profundización de la crisis de protección debido a la confluencia de múltiples crisis y situaciones: la reconfiguración y recrudecimiento del conflicto armado interno, el impacto de nuevas dinámicas de violencia contra la población civil; y el aumento en la frecuencia y severidad de desastres causados por fenómenos de origen natural como resultado del cambio climático.

La persistencia de riesgos y vulneraciones a los DDHH y al DIH afectan de manera desproporcionada a comunidades en territorios disputados por el accionar de

actores armados ilegales en donde la limitada presencia de la institucionalidad estatal aumenta la vulnerabilidad de las comunidades. Poblaciones afro y campesinas, pueblos indígenas, personas refugiadas y migrantes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTQ+, población con discapacidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran como las poblaciones mayormente afectadas.

Tales vulneraciones no se generan en todo el territorio nacional, por el contrario, hay áreas geográficas de mayor afectación como el eje Pacífico, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar y el Catatumbo, así como en departamentos de frontera como Putumayo, Arauca, Vichada y Guainía.

Proyección de las necesidades.

Para el 2023, el Clúster de Protección estima que 4,9 millones de personas en el país se encuentran en riesgo de sufrir vulneraciones a sus derechos humanos por el impacto del conflicto armado interno y la recurrencia de desastres agravados por el cambio climático. De ellas, un total de 3,7 millones de personas se encuentran expuestas a un nivel severo o extremo de riesgo de violaciones a sus derechos.

El escenario de riesgo para el próximo año se configura debido a la persistencia de la confrontación armada en territorios en disputa, la limitada acción preventiva en la gestión de riesgos, así como por los desafíos para avanzar en soluciones duraderas. Lo anterior, coincidente con un escenario electoral de mandatarios locales y de persistentes retos para el acceso humanitario.

Entre los principales riesgos y afectaciones se destacan: desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamiento; amenazas y homicidios a personas defensoras de DDHH; Violencia Basada en Género (VBG) incluyendo violencia sexual en el conflicto armado; reclutamiento, uso, y utilización de niños, niñas y adolescentes; presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explosionar (MSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI); y Trata y Tráfico de Personas.



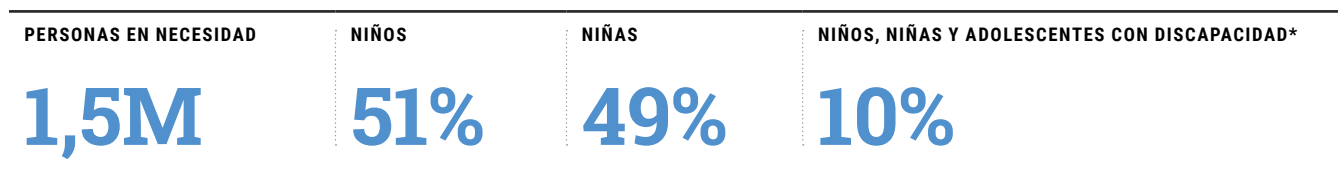
Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo de Protección y sus áreas de responsabilidad, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%BAster>

SUBGRUPO DE PROTECCIÓN

3.1.1 Protección de la infancia



* Porcentaje establecido en la Guía de Inclusión de personas con discapacidad en acción humanitaria. IASC, 2019.

Para el período del 2023 los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia siguen expuestos a graves vulneraciones de derechos y consecuencias humanitarias ligadas a la violencia armada, reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual por parte de grupos armados, así como tortura, homicidio y mutilación, desplazamientos, confinamientos, secuestros y accidentes por MAP/MSE/AEI.

Análisis de necesidades humanitarias



En el 2022, el informe de la Comisión de la Verdad 'No es un mal menor' reportó que:



16.238

Niños, niñas y adolescentes

Fueron reclutados entre 1990 y 2017

Por grupos armados ilegales en medio del conflicto armado.

A pesar de los esfuerzos institucionales para la prevención del reclutamiento, uso y utilización y las investigaciones adelantadas por el sistema de justicia transicional, los niños, niñas y adolescentes siguen enfrentando altos riesgos de ser afectados y afectadas por dinámicas del conflicto armado.

A pesar del subregistro en cifras, temores a denunciar casos de reclutamiento, uso y utilización y dificultades de acceso a la justicia, los **informes del Secretario**

General en el marco del Mecanismo de Monitoreo y Reporte de la Resolución 1612 evidencian un aumento de casos verificados de graves violaciones a la niñez y adolescencia en medio del conflicto armado en los últimos años.



176 graves

violaciones verificadas para el 2019

210

para el 2020 y 231 para el 2021.

El número de violaciones ha aumentado sobre los casos de reclutamiento y utilización, asesinato y mutilación, secuestro, violencia sexual y ataques a escuelas y hospitales. Los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afrocolombianos son desproporcionalmente afectados y hay altos riesgos de vulneración a población refugiada y migrante. Este aumento también fue reportado por el Boletín ONCA No. 27 de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano (Coalico) en el que se indica que por lo menos:



242.241

Niños, niñas y adolescentes fueron afectados en

127

Eventos del conflicto armado durante el primer semestre del 2022,

Mientras que para el mismo período del 2021 se verificó un evento más y la afectación de

14.321

Niños, niñas y adolescentes

En los últimos años se han registrado afectaciones y amenazas directas a las instituciones y comunidades educativas, por lo que se imposibilita que las escuelas o colegios sean espacios de protección y espacios protegidos. El informe del 2022 de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques identificó que durante el 2020 y el 2021 se produjeron al menos 35 ataques contra escuelas, especialmente en áreas

rurales, por confrontaciones entre grupos armados y fuerzas gubernamentales.

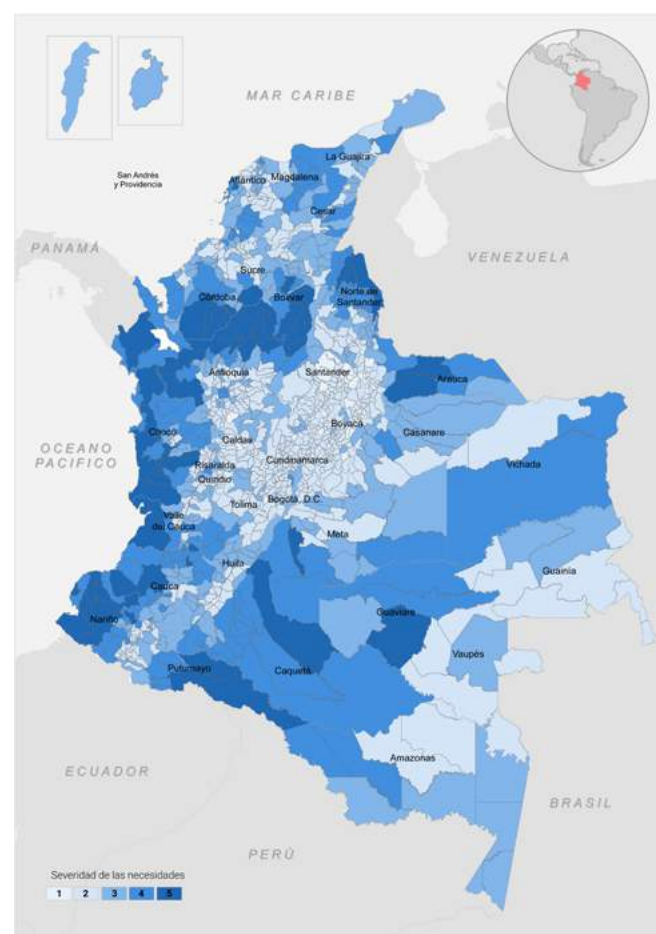
Además, la persistencia de los desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad, imposibilitan el acceso a servicios que garanticen o restablezcan los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Proyección de necesidades

La proyección de necesidades para el 2023 supone una agudización de las consecuencias y el impacto humanitario en el país, acompañado de la tendencia de recrudecimiento de las acciones armadas sobre la región pacífico (Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño); zonas de frontera (Putumayo; Arauca; Norte de Santander); región noroccidente (Antioquia, Córdoba, Bolívar, Magdalena); Meta, Guaviare y Caquetá.

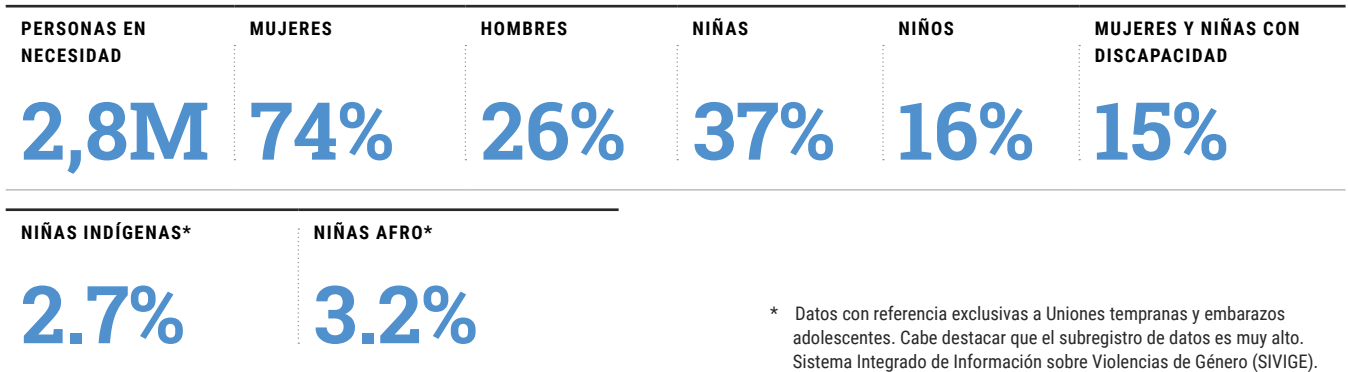
Severidad de las necesidades

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA



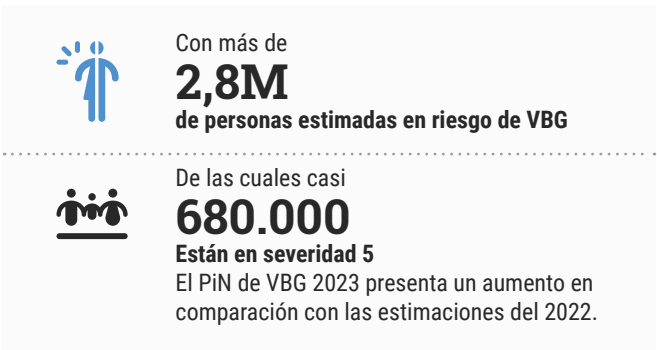
SUBGRUPO DE PROTECCIÓN

3.1.2 Violencias Basadas en Género (VBG)

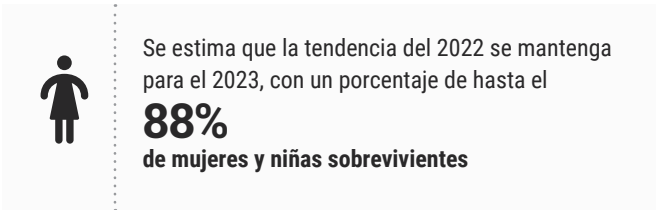


Los escenarios de riesgo que inciden en las afectaciones humanitarias en Colombia - conflicto armado y desastres agravados por la variabilidad climática - determinarán una persistencia e incluso un incremento de riesgos de violencia basada en género (VBG) para el 2023, sobre todo hacia mujeres, adolescentes y niñas. A su vez, los riesgos y amenazas de VBG continuarán y se acrecientan tras los impactos humanitarios, siendo una de las causas de desplazamientos, pérdida de medios de vida, embarazos forzados y/o tempranos, entre otras situaciones, que afectan el acceso a atención adecuada, recuperación temprana y respuestas durables.

Análisis de necesidades humanitarias



Si bien, a diferencia del año anterior, se han contemplado los riesgos de violencia sexual en hombres, adolescentes varones, niños y población LGBTQ+, las niñas, adolescentes y mujeres, continúan representando la gran mayoría de las sobrevivientes.



Tanto en contextos de conflicto armado, de desastres, eventos como la pandemia por COVID-19, entre otras afectaciones, la relación entre VBG y otras violaciones de derechos humanos persistirá profundamente, la cual se ve representada en desplazamientos forzados en los que frecuentemente hay alojamientos temporales y hacinamiento, así como confinamientos, los cuales aumentan el riesgo de VBG tanto por parte de GANE, como de la pareja íntima y familiares; el reclutamiento, uso y utilización de niñas y adolescentes mujeres, desembocan en VBG, la violencia sexual en el conflicto, embarazos o abortos forzados, explotación sexual, situaciones de trata y riesgo de tráfico -incluyendo trata y tráfico de migrantes-, pueden exponer a las madres que van en búsqueda de sus hijas sobrevivientes de situaciones de explotación y abuso sexual; el cierre de las instituciones educativas, por conflicto o desastres, incrementa la exposición a riesgos de VBG; la degradación del medio ambiente debido a actividades ilícitas, limita el acceso a recursos para la población y expone a mujeres y niñas a estrategias de afrontamiento negativas; la violencia sexual en el conflicto, los feminicidios, así como los casos de VBG hacia defensoras de derechos

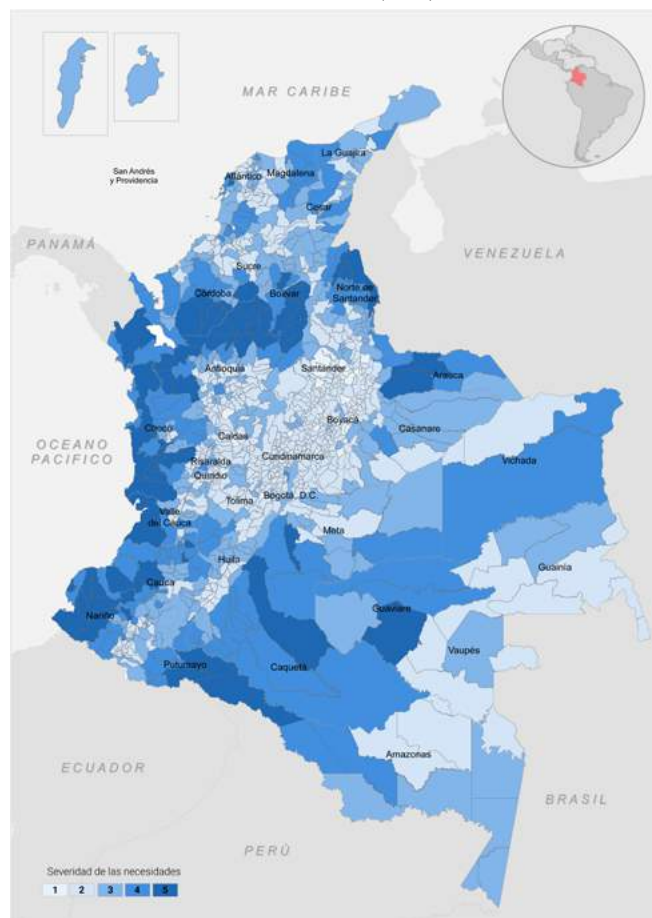
humanos, medioambientales, lideresas comunitarias y sus familiares, población LGBTIQ+, perpetúan el ciclo del miedo y de la violencia.

Los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, La Guajira, Arauca, Norte de Santander, así como la subregión de La Mojana, continúan en situación de alto riesgo de VBG. Las adolescentes, sobre todo pertenecientes a comunidades étnicas, representan uno de los grupos poblacionales mayoritariamente expuestos a múltiples formas de VBG. Tanto en 2021 como en 2022, este grupo poblacional y el de las niñas representaron hasta el 70 por ciento de las sobrevivientes de casos reportados de Violencia Sexual.

Proyección de las necesidades

La baja capacidad institucional para una adecuada prevención y respuesta a la VBG en contextos de emergencia, en especial en municipios de categoría 5 y 6, acentúa la revictimización de las personas sobrevivientes, genera desconfianza en el acceso a la atención institucional, crea un ambiente de impunidad y contribuye al subregistro de los casos.

Severidad de las necesidades VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO (VBG)



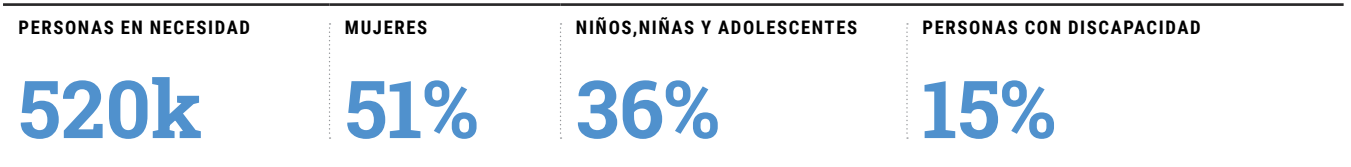
NARIÑO, COLOMBIA

Diálogos regionales vinculantes en Tumaco.

Foto: Felinto Córdoba, OCHA Colombia, 2022

SUBGRUPO DE PROTECCIÓN

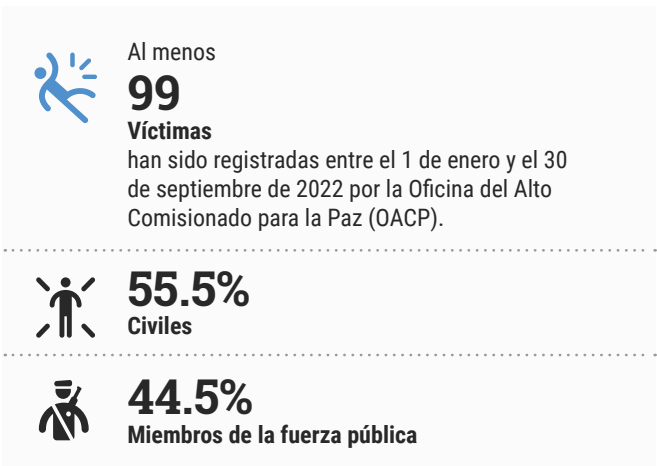
3.1.3 Acción Contra Minas (AcM)



Durante 2022, el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado continúan exacerbando la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las poblaciones rurales, comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia como consecuencia de la presencia de minas antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MSE) en sus territorios. El Área de Responsabilidad de AcM estima que, en 2023, 520,041 personas en 122 municipios están en riesgo de sufrir un accidente por MAP/AEI/MSE o de ser confinadas o desplazadas por la presencia de estos artefactos explosivos. Los departamentos en los que se estima habrá mayor afectación por la presencia de estos artefactos explosivos y riesgos de protección para las comunidades son: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

Análisis de Necesidades Humanitarias

Las MAP/AEI/MSE han matado, herido y mutilado sin discriminar entre población civil y fuerza pública en lo corrido de 2022.



Preocupa, en particular, la situación humanitaria de comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), quienes se han visto gravemente afectadas por la presencia de MAP/AEI/MSE en 2022, con un total de 25 nuevas víctimas registradas, seis de ellas menores de edad.

Cada vez es más preocupante la afectación que la contaminación por MAP/AEI/MSE tiene frente a las

comunidades, en cuanto que se ha observado un incremento en el número de municipios con presencia de este tipo de artefactos. En 2022 se ha observado que la contaminación por artefactos explosivos ha afectado la vida cotidiana de las comunidades rurales en Colombia, en especial en zonas de frontera. Esta contaminación ha ocasionado la reducción en la movilidad de miles de personas, impidiéndoles el acceso a cultivos, centros de salud, agua, lugares de trabajo, escuelas y espacios culturales. OCHA reporta que de las emergencias humanitarias registradas entre enero y agosto de 2022 por confinamiento, el seis por ciento están asociadas a la contaminación por MAP/AEI/MSE. Si bien la presencia de artefactos explosivos no es la principal causa de los confinamientos en el país, si se ha observado que es un factor que prolonga la duración de estos y la afectación de la población. Adicionalmente, la mayoría de los departamentos donde se presentan confinamientos coinciden con aquellos donde hay presencia de MAP/AEI/MSE.

Entre enero y septiembre de 2022, se reportaron 312 eventos, mostrando un incremento de 32 por ciento frente a los 235 eventos reportados en el mismo periodo de 2021. Aunque Nariño, Norte de Santander y Chocó siguen siendo los departamentos con mayor afectación en 2022; se observa con preocupación el reporte

de ocho víctimas en el departamento de Santander, en el cual no se reportaban víctimas de MAP/AEI/MSE desde 2013.

El AdR AcM estima que, por cada víctima directa, 4,5 personas de su núcleo familiar o cercano se convierten en víctimas indirectas, y algunos de los riesgos o afectaciones relacionadas para este grupo poblacional incluyen: violencia basada en género, deserción escolar, afectación psicosocial y acceso limitado a bienes y servicios.

Proyección de las necesidades

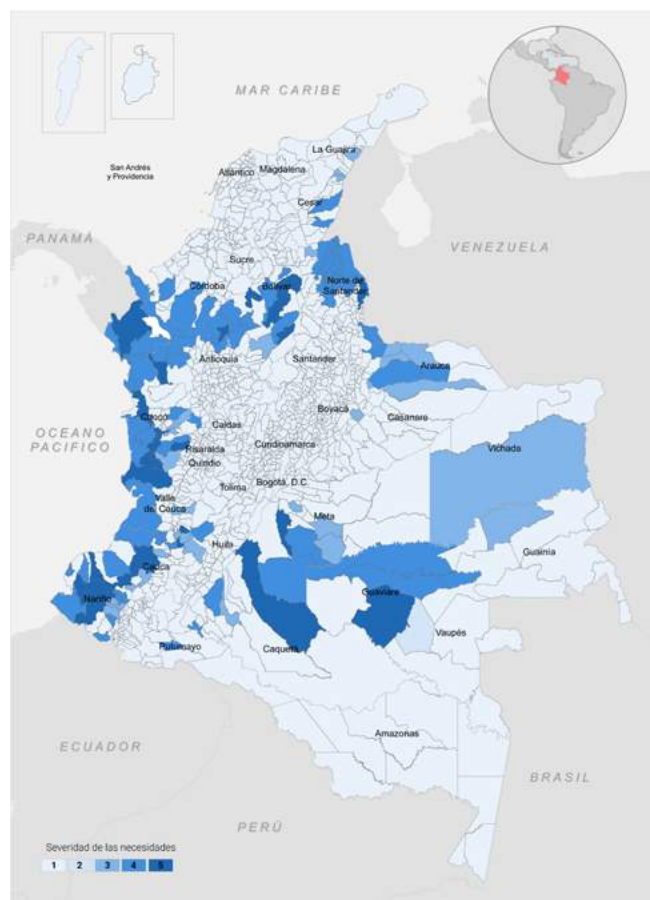
En 2023, el AdR estima un aumento del porcentaje de las personas en necesidad con relación al año 2022 y del 93 % con respecto a 2021, debido al aumento en la instalación y uso de artefactos explosivos por parte de grupos armados no estatales y su permanente afectación a comunidades.

NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Misión interagencial en la comunidad Bari.

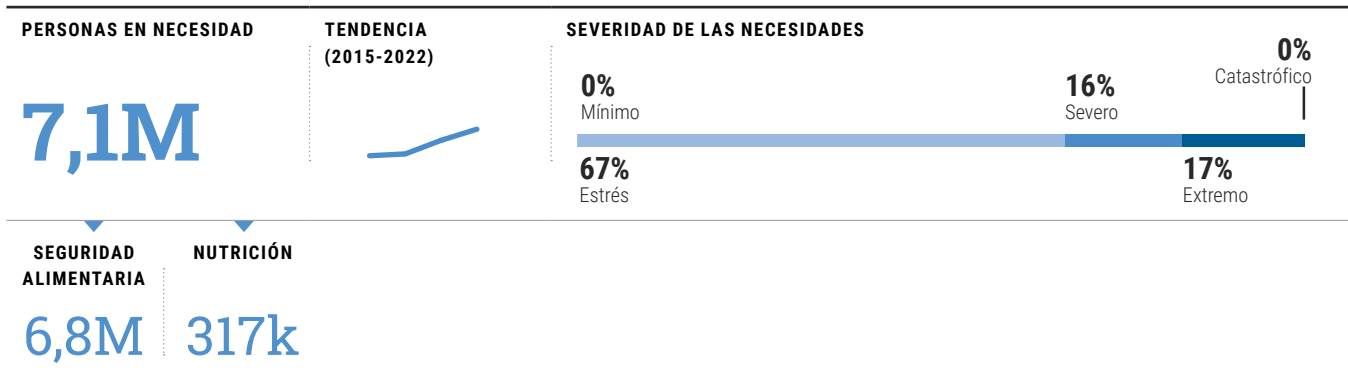
Foto: Claudia Toro, ACNUR Colombia, 2022.

Severidad de las necesidades ACCIÓN CONTRA MINAS (ACM)

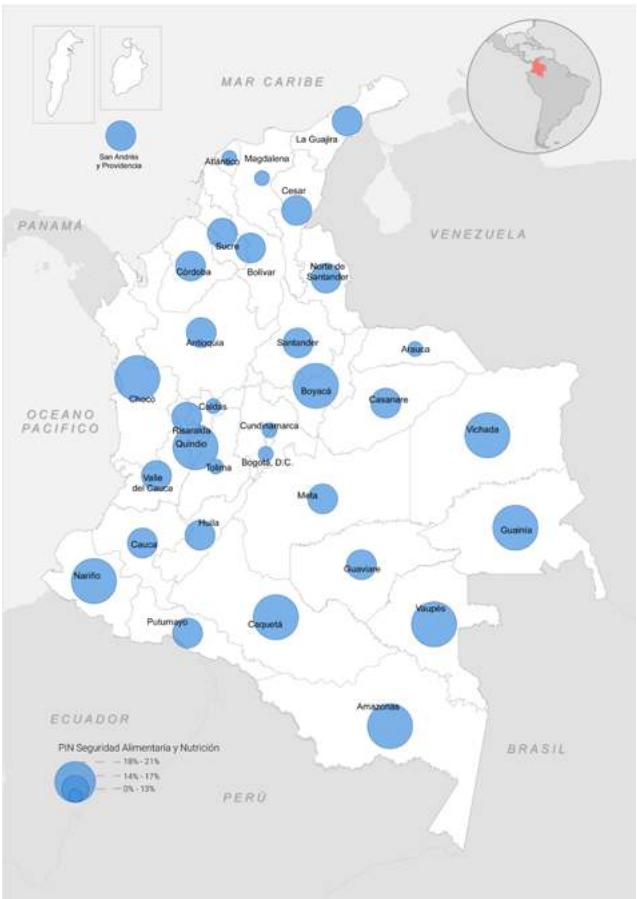


3.2

Seguridad Alimentaria y Nutrición



PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN



Entre 2019 y 2022 se ha duplicado el número de personas en inseguridad alimentaria a nivel global²⁸. Esto por fenómenos climáticos, inflación persistente de los precios de los alimentos, energía, fertilizantes e insumos agropecuarios, interrupciones en la cadena de suministro y afectaciones en la capacidad adquisitiva de los hogares. Según el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo de FAO y WFP en 2022, el número de personas subalimentadas y con diferentes formas de malnutrición es creciente.



Más de
2.300
Millones de personas

están en inseguridad alimentaria a nivel global²⁹ y 15,5 millones de personas están en inseguridad alimentaria en Colombia (30%)³⁰ y el 24,8% de los hogares de 23 ciudades colombianas consumen dos comidas o menos³¹.

De acuerdo con el *Sistema de seguimiento medios de vida agrícolas* – DIEM, de FAO (2022) durante julio y agosto, el 47,6 por ciento de los hogares de zonas rurales de departamentos priorizados³² vieron disminuidos sus ingresos en el trimestre previo a la evaluación. Esto debido al aumento de precios de

los alimentos (33,1%), pérdida de empleo (17,4%) y afectación por desastres de origen natural (16,1%). El 45,7 por ciento de los productores agrícolas reportaron dificultades en la comercialización de productos debido a menores precios de venta (63%), mayores costos de transporte o mercadeo (60%), y pocos compradores y/o retraso en los pagos (32%)³³.

Al igual que la tendencia global, en Colombia se ha registrado el aumento de la inflación a expensas de los precios de los alimentos (26%) y energía (17%)³⁴; incremento de los costos de producción debido a los precios de agro insumos (87%)³⁵ y combustibles (8,1%)³⁶ y ajustes en la oferta-demanda global de insumos postpandemia.

El estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años se ha afectado negativamente. Entre 2021 y 2022, la mortalidad por y asociada a desnutrición aumentó en 75 por ciento^{37, 38}, la prevalencia de desnutrición aguda en 49 por ciento³⁹ y el bajo peso al nacer a término, en 18 por ciento^{40, 41}.

Análisis de las Necesidades Humanitarias

Para el 2023, se estima que 7,1 millones de personas tendrán necesidades en seguridad alimentaria y nutrición a nivel nacional⁴².

28 World Bank (2022) Climate Explorer series. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/10/17/what-you-need-to-know-about-food-security-and-climate-change?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT

29 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2022) The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI por sus siglas en inglés) 2022. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000141083/download/?_ga=2.173352608.2006309539.1666208600-270915537.1663885958

30 <https://reliefweb.int/report/colombia/evaluacion-de-seguridad-alimentaria-para-poblacion-colombiana-resumen-ejecutivo-febrero-2023>

31 DANE (agosto 2022) Anexo estadístico Información vigésima sexta ronda <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social>

32 La evaluación del DIEM, se realizó en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño y Putumayo.

33 FAO (2022) Data In Emergencies (DIEM) – Monitoring of shocks and agricultural livelihoods in priority. <https://data-in-emergencies.fao.org/pages/monitoring>

34 DANE (octubre 2022) Anexo estadístico Índice de Precios al Consumidor – IPC. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico>

35 UPRA (agosto 2022) Boletín índice de precios de insumos agrícolas. Corte mayo 2022. <https://www.upra.gov.co/web/guest/boletines-y-reportes>

36 DANE (octubre 2022) Anexo estadístico Índice de Precios al Consumidor – IPC <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico>

37 Instituto Nacional de Salud. Informes del evento- Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años. Semana epidemiológica 36. 2021 y 2022

38 Departamentos en donde se concentran más del 56% de casos de mortalidad asociada a desnutrición: La Guajira, Chocó, Cesar, Bolívar y Vichada.

39 Instituto Nacional de Salud. Informes del evento- Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Semana epidemiológica 36. 2021 y 2022

40 Instituto Nacional de Salud. Informes del evento- Bajo peso al nacer a término. Semana epidemiológica 24. 2021 y 2022

41 Nota aclaratoria: Los años 2020 y 2021 fueron años atípicos en la notificación del evento, porque se presenta menor asistencia por parte de los usuarios a los servicios de salud a causa del COVID 19, por ende, se captaron menor número de casos.

42 Basados en los cálculos de CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security) WFP 2021 e indicadores de situación nutricional (INS, ENSIN 2015).



GUAJIRA, COLOMBIA

Misión en Alta Guajira.

Foto: Santiago Franco, UNICEF Colombia, 2022.



De acuerdo con la MSNA 2022, el

72%

de la población desplazada interna de cuatro departamentos tuvieron inseguridad alimentaria (52,3% moderada y 19,4% severa).



Las estrategias de afrontamiento más usadas en los hogares afectados fueron:

Pedir dinero prestado

58%



Comprar alimentos a crédito

56%



Gastar ahorros

53%⁴³



A nivel nacional, el

80%

de los hogares tuvo un consumo de alimentos aceptable, y acuden a estrategias como:



Consumir alimentos más baratos

90,3%



Reducir el tamaño de las porciones

76,1%



Reducir el número de comidas al día

75,8%
(WFP)⁴⁴

43 REACH (2022) Evaluación de Necesidades Multisectoriales de Colombia en población desplazada interna y comunidades receptoras (MSNA) en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Putumayo y Cauca.

44 WFP (2022) Computer-Assisted Telephone Interviewing. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security- World Food Programme Official.



A septiembre de 2022:

Vichada, Vaupés, La Guajira, Guaviare y Chocó registraron las mayores prevalencias de desnutrición aguda⁴⁵- departamentos con alta proporción de niñez indígena y rural-.



Según la MSNA, el

40%

de los bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva



Solo

23,2%

de los niños y niñas de 6 a 23 meses amamantados tuvieron una dieta mínima aceptable.



38%

de los niños y niñas menores de 5 años encuestados no recibieron intervenciones nutricionales⁴⁶.

En los últimos dos meses del 2022 y enero de 2023 se esperan lluvias superiores al 20 por ciento respecto a los promedios históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre, norte de Córdoba, norte de Chocó y parte de las regiones Andina y Orinoquía⁴⁷. Por lo cual, se prevé el aumento de personas con necesidades en medios de vida agropecuarios, asistencia alimentaria y atención nutricional.

Proyección de las Necesidades

Para 2023, se espera que las afectaciones derivadas de la inflación, variabilidad climática, el confinamiento, el control de los grupos armados y la contaminación por MAP/MUSE, aumenten la afectación de los medios de vida agropecuarios y el acceso a alimentos nutritivos.

La baja asequibilidad a los fertilizantes, por cuenta del contexto de la guerra en Ucrania pueden empeorar la disrupción de los sistemas agroalimentarios y transformar la actual crisis de acceso en una futura crisis de disponibilidad afectando la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en la zonas rurales, pueblos indígenas y afrocolombianos, mujeres, niños, niñas y adolescentes⁴⁸.



Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-del-cl%C3%B4ster>

45 Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Semana epidemiológica 40. septiembre 2022. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2022_Bolet%C3%ADn_epidemiologico_semana_40.pdf

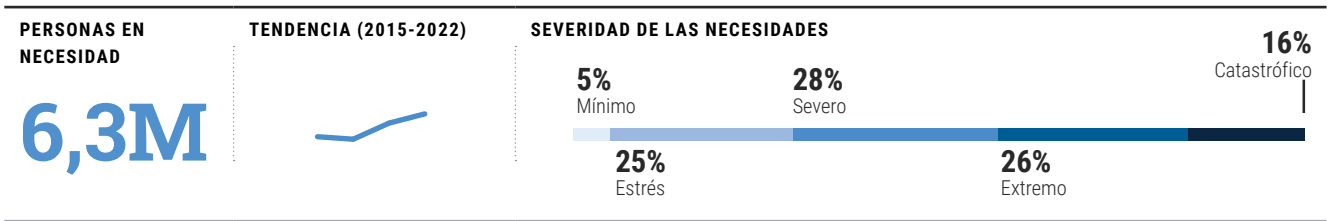
46 OCHA/REACH (2022) Evaluación de Necesidades Multisectoriales de Colombia (MSNA)

47 IDEAM (2022) Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo. http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf

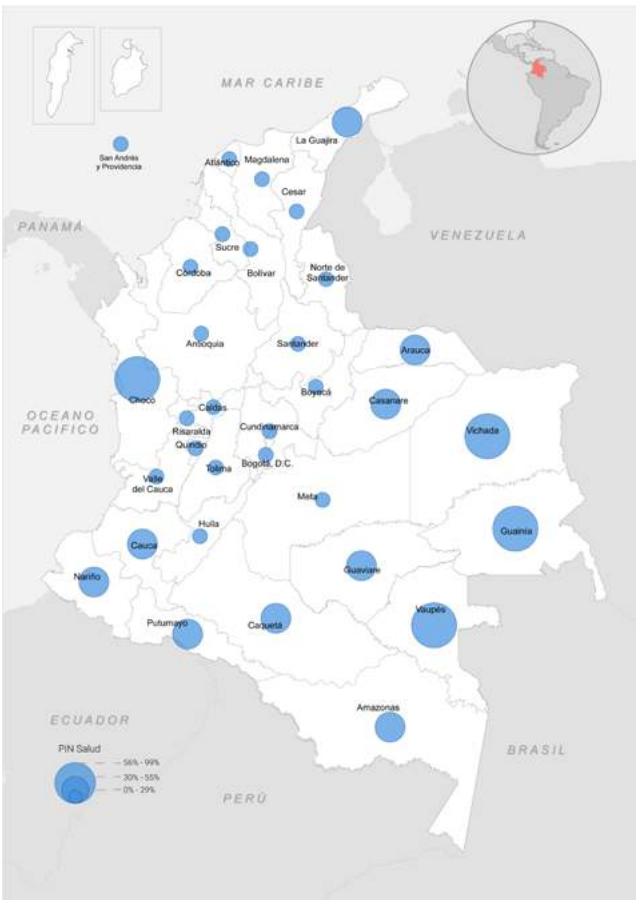
48 UN (2022) Global impact of the war in Ukraine: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-06/GCRG_2nd-Brief_Jun8_2022_FINAL.pdf

3.3

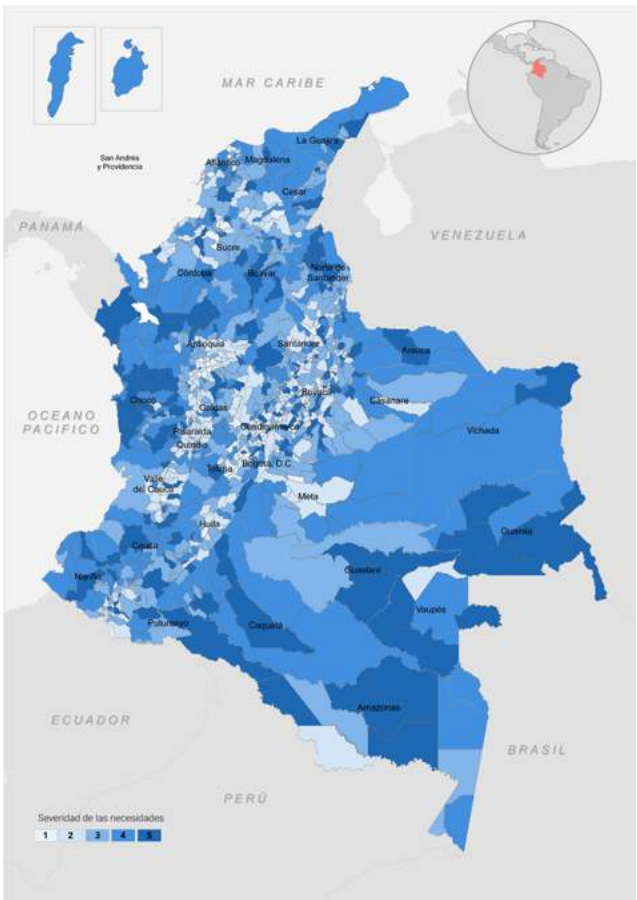
Salud



PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN



En 2022 el cálculo de personas en necesidad (PiN) aumentó en 300.000 personas hasta alcanzar 6,3 millones, como consecuencia del deterioro en los indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, el incremento en embarazo en niñas y adolescentes, suicidios, VIH, Infecciones de transmisión sexual, violencia sexual y violencia basada en género, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades crónicas así como por el aumento de la población y la persistencia de barreras de acceso a los servicios de salud.

Adicionalmente, al menos 8 millones de personas se encuentran a más de una hora de los centros de salud y 2,2 millones experimentan barreras para el acceso servicios de salud por las dinámicas propias del sistema. Esto a su vez incide en el deterioro crítico de la salud que amenaza la vida de las personas en estos contextos. 483 municipios tienen una mortalidad infantil que sobrepasa la media nacional y departamentos como Chocó tienen una mortalidad materna 5 veces mayor que la razón nacional es allí en donde las capacidades comunitarias e institucionales son insuficientes con relación a las dinámicas propias de las emergencias en Colombia.

Análisis de las Necesidades

Con relación con las principales necesidades en salud y las atenciones en el país:



Aproximadamente

5,3M

de personas se encuentran en municipios donde la capacidad del sistema es insuficiente



3,2M



Se encuentran en zonas rurales afectadas por el conflicto y desastres naturales.

En Colombia hay cerca de 1,3 millones de personas con discapacidad, las cuales experimentan barreras para acceder a servicios de salud y equipos de apoyo biomotor, cognitivo y sensorial, habría que analizar la discapacidad por causas evitables y afectaciones por MAP y MUSE.

Preocupa que los indicadores muestran un deterioro en la situación humanitaria y las necesidades en salud, a pesar del riesgo de invisibilización de necesidades. Así mismo la infraestructura es insuficiente, sumado a la afectación que han tenido estructuralmente los puestos de salud a causa de las emergencias, hay deficiencias y falta de insumos, equipamiento, medicamentos, ambulancias y talento humano para la prestación de servicios de salud, lo cual afecta especialmente a las zonas rurales y dispersas.

Por otra parte, existen restricciones de acceso humanitario, ataques contra la misión médica y barreras de acceso geográficas, económicas y organizacionales que limitan el acceso a servicios de salud a pesar de que exista afiliación al Sistema General de Seguridad Social en las comunidades, es así como el 88 por ciento de muertes maternas tempranas en Colombia, contaban con afiliación al sistema.

Proyección de las necesidades

Teniendo en cuenta el panorama anterior, es importante analizar los indicadores en salud pública, los determinantes sociales de la salud y el impacto asociado con las emergencias, resaltando principalmente

Las personas con mayores necesidades en salud continúan siendo: las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, las víctimas de confinamiento, restricciones a la movilidad y desplazamiento forzado, las personas refugiadas y migrantes, las poblaciones bajo control e influencia de GAO y el personal de salud en territorios afectados por la violencia. Así mismo, los grupos más afectados son los niños, niñas, adolescentes, gestantes,

lactantes, mujeres, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas o transmisibles.

A causa de las emergencias se han restringido los procesos de organización y Desarrollo comunitario, siendo fundamentales tanto en la preparación como en la recuperación ante las emergencias, así mismo las emergencias son tan frecuentes que no dan espacio para la preparación y la recuperación en algunos territorios, lo cual es importante monitorearlo.



Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo Salud por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%BAster-de-salud>

CHOCÓ, COLOMBIA

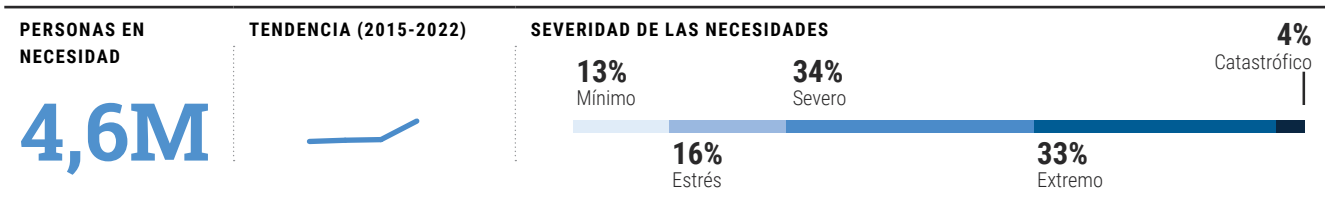
Misión de despliegue de equipos móviles SSR y VBG.

Foto: UNFPA Colombia, 2022

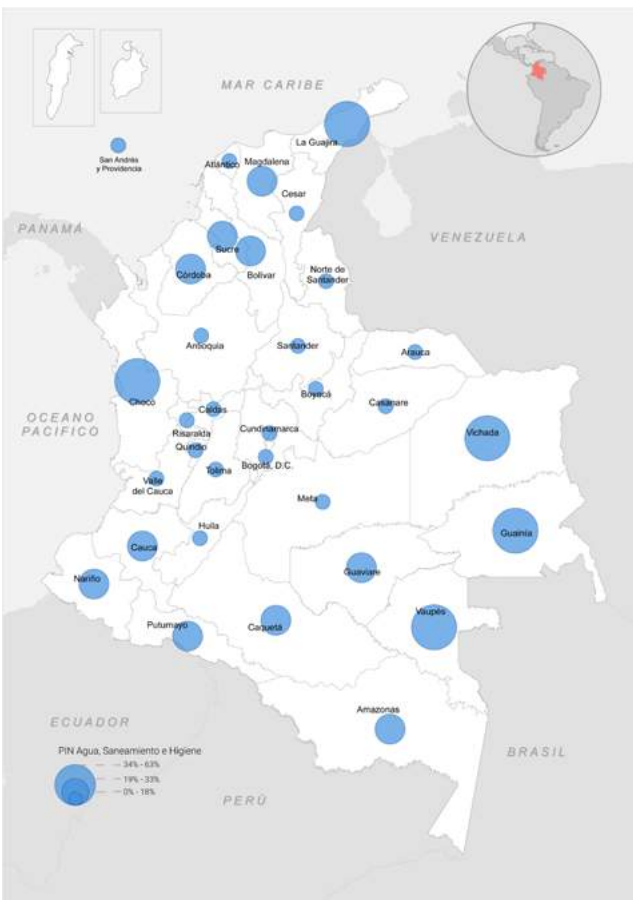


3.4

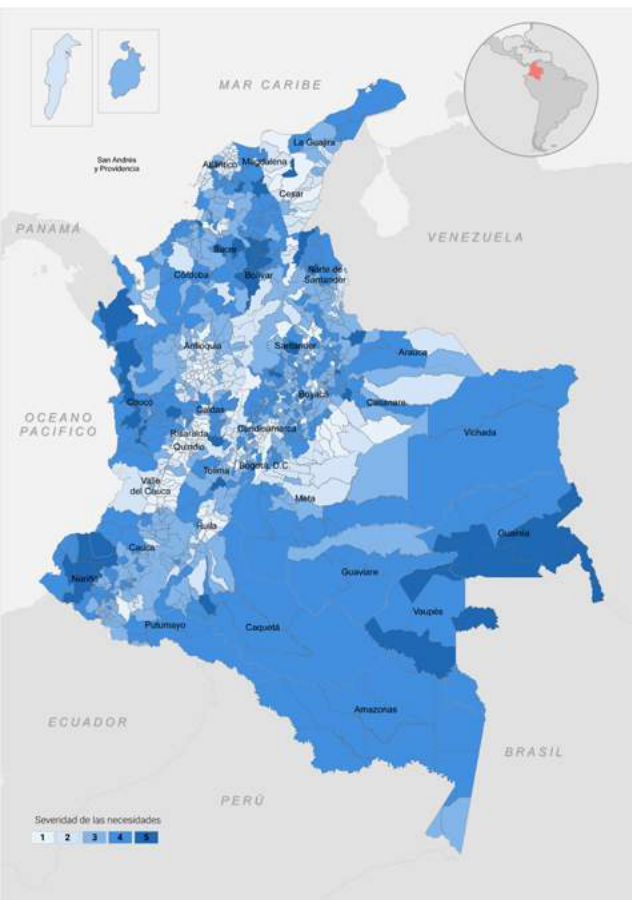
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)



PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN

MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	AFROCOLOMBIANOS	INDÍGENAS	PERSONAS QUE HABITAN LA RURALIDAD
2,2M	1,6M	719k	717k	2,8M

Las afectaciones por conflicto armado y desastres socio-naturales hacen visibles las dificultades que enfrentan las personas para acceder a Agua Potable y Saneamiento Básico. Los impactos de estas emergencias afectan de manera desproporcionada a población rural, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y población migrante, que de manera histórica evidencia mayores brechas de cobertura y calidad de servicios. Durante el año 2022 se han generado diversas afectaciones a sistemas de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales, a causa de eventos climáticos como inundaciones, vendavales, ciclones y tormentas tropicales; esto ha agudizado las necesidades de WASH que enfrenta la población a nivel comunitario, así como en establecimiento educativos, de salud y protección. Las zonas afectadas por desastres son coincidentes con las brechas estructurales en departamentos como Bolívar y La Guajira, así como con departamentos de mayor afectación por conflicto armado como Chocó, Nariño, Vichada y Córdoba.

Análisis de necesidades

Las zonas de mayor afectación por conflicto armado y desastres son coincidentes con aquellas de menor cobertura y calidad de servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico.



Los resultados de la MSNA indican que

34,9%

No acceden a una fuente de agua adecuada⁴⁹



Al menos

21,1%

Declararon no contar con agua suficiente⁵⁰



49.8%

Perciben que la calidad del agua que consumen no es Buena⁵¹.



En saneamiento básico, la MSNA evidencia que:

10%

Realiza prácticas de defecación a campo abierto o disponen de un sitio inadecuado⁵²



27%

No tienen acceso a duchas



15,7%

Indican uso compartido de duchas y sanitarios⁵³



La disposición de residuos en cuerpos de agua es del

14%



16%

Afirma no hacer uso del jabón para el lavado de manos



28,8%

Cuenta con una instalación adecuada



En cuanto a gestión menstrual

4%

Indican no tener acceso a productos absorbentes



18%

Han hecho uso de papel higiénico como sustituto

49 Fuentes sin tratamiento o con un servicio discontinuo. Incluye: acceso directo desde cuerpos de agua, aguas lluvia, aguatero y agua embotellada, pozos sin bomba, aljibe, jagüey o barreno.

50 Ya sea porque el agua es insuficiente, no está disponible o tiene condiciones de calidad inviables.

51 Es decir, tiene condiciones de olor, color (turbidez) o sabor que no la hacen apta para consumo.

52 10% de los hogares encuestados reportan realizar defecación a campo abierto, 10.9% disponen de un inodoro conectado a un pozo con necesidad de adecuaciones y 8% un inodoro con descarga directa a un cuerpo de agua. Los resultados pueden indicar un subregistro, dado que se han efectuado principalmente en zona urbana.

53 Se hace monitoreo a este indicador dado que puede representar un riesgo de protección, especialmente para VBG.



Las necesidades en WASH, afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.



Solo el
41.4%

De la población indígena en Colombia tiene acceso a acueducto⁵⁴ y el



23%

A alcantarillado o sistemas de gestión de aguas residuales convencionales.



En muchos de estos pueblos aún persisten prácticas de **defecación a campo abierto y consumo directo del agua de la fuente.**

En el departamento de Amazonas y Putumayo, el consorcio Alianza Amazonía reporta bajos niveles de cobertura⁵⁵. Para Amazonas, las áreas no municipalizadas urbanas cuentan con sistemas de acueducto con necesidades de reparación, que no logran garantizar la calidad y cobertura del agua para consumo, especialmente en zonas rurales⁵⁶. Igualmente, en Putumayo, las zonas rurales no cuentan con sistemas de saneamiento ni recolección de residuos, que son enterradas, quemadas o arrojadas a los ríos. El 35 por ciento de la población toma agua de pozo, el 30 por ciento usa el agua lluvia y el 65 por ciento toma el agua directamente de los ríos, que presentan riesgo por la minería, agroquímicos y la tala de bosque por expansión agrícola y ganadera.

Por su parte, en el departamento de Guaviare, el informe de misión emitido por Federación Luterana Mundial⁵⁷, en asocio con ECHO manifiesta una situación de privación a servicios WASH para los pueblos indígenas Embera Chamí, Jiw y Tucano. Adicionalmente, se alerta sobre dificultades en prevención de riesgos, así como los impactos de las economías de uso ilícito sobre los ecosistemas y las fuentes de agua.

En la región Pacífico, Nariño y Chocó han concentrado el mayor número de alertas humanitarias por conflicto y desastres a nivel nacional. En Chocó más de 219.000 personas realizan defecación a campo abierto y 418.000 se abastecen sin tratamiento de ríos, pozos, agua lluvia o de acueductos con inviabilidad sanitaria⁵⁸. La agudización de los eventos de confinamiento supone un alto riesgo para las poblaciones, que no pueden movilizarse con libertad para acceder al agua o servicios sanitarios.

El análisis realizado para el cálculo del PIN para el sector revela que departamentos como Bolívar, Guainía y Chocó tienen la mayor proporción de municipios en condiciones catastróficas. Sin embargo, durante el año 2022 no se han registrado acciones de respuesta en Bolívar y Guainía por parte de la cooperación.

Proyección de necesidades

Los hechos victimizantes por conflicto armado, la ocurrencia de desastres y el tránsito de población migrante, indican un panorama crítico de múltiple afectación. Eventos de desplazamiento transfronterizo han derivado en sobrepresión de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Arauca (Arauca) y Puerto Carreño (Vichada), debido al aumento

⁵⁴ Lo que implica que un poco menos de la mitad del promedio nacional no tiene acceso a acueducto, mientras que el promedio nacional es del 86%. Esta situación es aún más desafiante el acceso a acueducto en zona rural dispersa donde solo el 27% de la población indígena tiene acceso.

⁵⁵ Análisis áreas no municipalizadas Amazonas Alianza Amazonía. (Alianza Amazonía)

⁵⁶ El departamento enfrenta además dificultades en las asignaciones presupuestales y en la ejecución de acciones de desarrollo planteadas por el Plan Departamental de Aguas.

⁵⁷ Segundo Informe Zonas Urbanas de Guaviare (Federación Luterana Mundial)

⁵⁸ Proyecciones del PIN, de acuerdo con datos del censo poblacional (DANE, 2018).

de población, así como su asentamiento en zonas marginalizadas sin cobertura. Esta situación podría evidenciarse también en Vaupés, Guainía y Guaviare.

El panorama de múltiple afectación por desastres ha tenido impactos sectoriales en la región Pacífico, Orinoquía y Atlántico. Según reportes del IDEAM el fenómeno de la Niña se extendería al menos hasta febrero de 2023. Si bien, se espera normalidad en el resto del año, los impactos de inundaciones y tormentas tropicales derivarán en un periodo de recuperación, que podría desbordar las capacidades institucionales. Tal es el caso de Nariño, que ha reportado la afectación de 8 acueductos rurales y uno urbano en Ancuya por cuenta de las inundaciones.



Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo sobre Agua, Saneamiento e Higiene, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%BAster-agua>

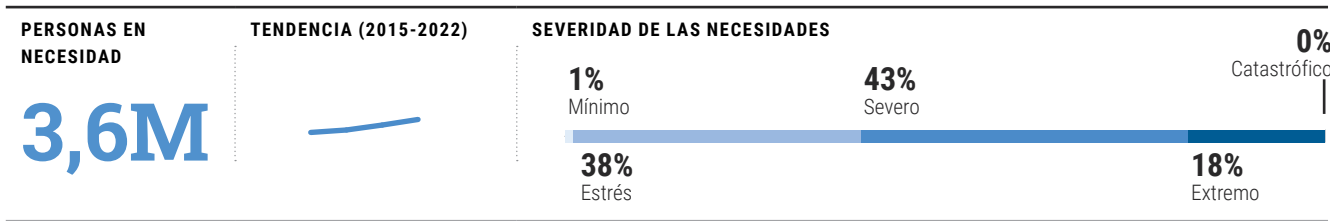


GUAJIRA, COLOMBIA

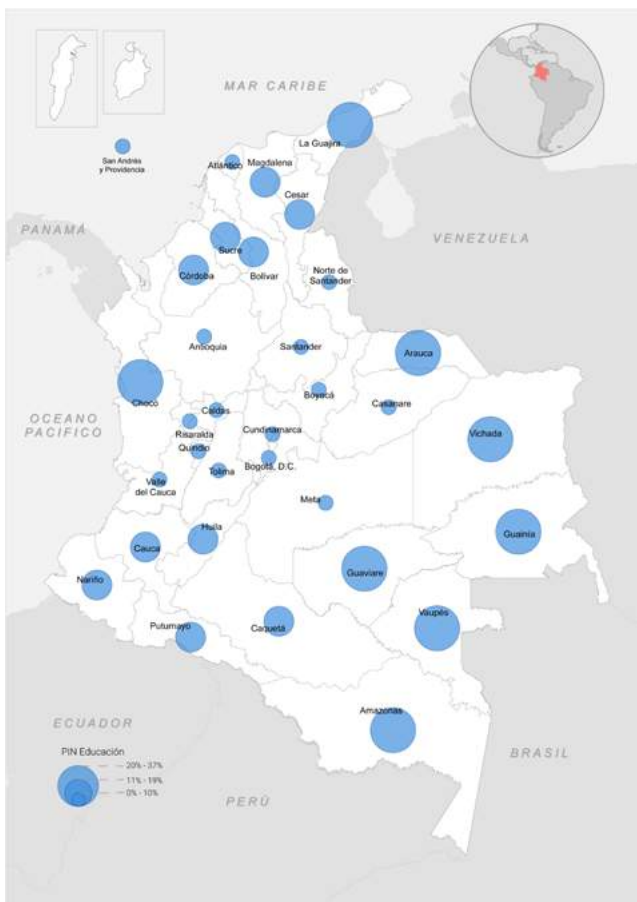
Misión en Alta Guajira.

Foto: Santiago Franco, UNICEF Colombia, 2022.

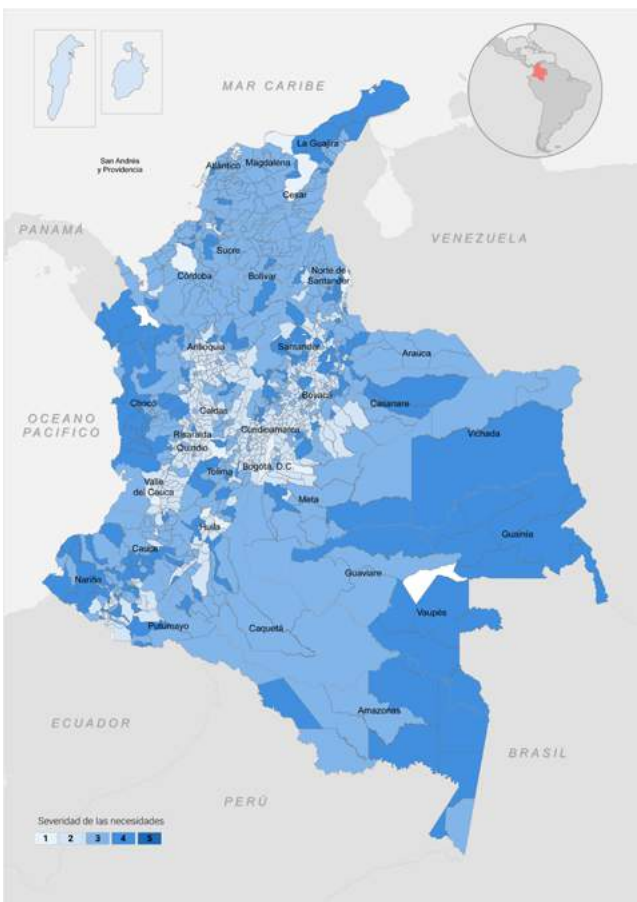
3.5 Educación en Emergencias (EeE)



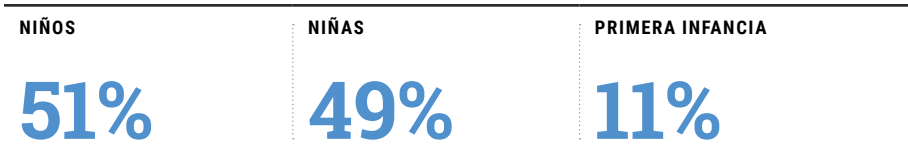
PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN



Como se ha demostrado a lo largo del documento, Colombia continúa siendo un país con necesidades humanitarias apremiantes en donde confluyen múltiples afectaciones. La pandemia ha dejado una huella en los aprendizajes, el deterioro emocional y el aumento de la deserción escolar. Estos impactos se agravan y se perpetúan para las poblaciones que experimentan desplazamiento forzoso, confinamiento o cuyos territorios han tenido afectaciones que han deteriorado las escuelas, dejando a más de 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes con necesidades y en riesgo de acceder al derecho de la educación.

Análisis de las necesidades humanitarias

El análisis de la situación evidencia un deterioro en la continuidad de los procesos educativos y la garantía del derecho a la educación en situaciones de emergencia, con las brechas más amplias en la educación inicial (más de 400.000 niños y niñas en necesidad) y media.

Muestra de esto es un incremento considerable de la deserción:

 **278.292 NNA**
Abandonaron sus estudios

87.658
Más que en el año anterior.

Los departamentos donde se presentan mayores necesidades son Córdoba, Cauca, Chocó, La Guajira, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare. En estos territorios confluyen fenómenos de múltiple afectación que interrumpen la trayectoria educativa, especialmente situaciones de desplazamiento y confinamiento que obligan al abandono de las escuelas o la suspensión de clases, e inundaciones por variabilidad climática que han impactado la infraestructura escolar o las vías de acceso.



Las necesidades se agudizan **en población víctima del conflicto armado**: la MSNA (2022) arroja que:



17%
de los NNA de las poblaciones de acogida no se encuentran inscritos en el colegio



Mientras que **para las poblaciones desplazadas** asciende al:
24%



Las principales razones expuestas para no acceder a la educación son:



Falta de ingresos para pagar los gastos escolares
29%



Dificultades para llegar a las escuelas ya sea por falta de transporte o lejanía
22%



El fenómeno de la deserción es particularmente diferencial en los dos grupos poblacionales:



Mientras el
7%
De los NNA de la población de acogida habían desertado



Lo hicieron el:
17%
De aquellos desplazados internos



GUAJIRA, COLOMBIA

Misión en Alta Guajira.

Foto: Santiago Franco, UNICEF Colombia, 2022.

Proyección de las necesidades

Se destacan las siguientes proyecciones de las necesidades en educación:

Eventos de variabilidad climática cada vez más extremos y frecuentes que agravarán las afectaciones a la infraestructura escolar y ocasionarán el cierre de escuelas y la suspensión de clases. Los impactos de la pandemia en los aprendizajes se alargarán en el tiempo y profundizarán las brechas en las comunidades en situación de vulnerabilidad y en territorios bajo la influencia de grupos armados ilegales, lo que se reflejará en deserción y repitencia agudizadas.

De continuar las tendencias de desplazamiento forzado y confinamiento, se prevé mayores interrupciones a las trayectorias educativas de NNA, sobredemanda de cupos en escuelas de comunidades de acogida y uso de escuelas como albergues.

La escuela como un espacio protector y la garantía al derecho a la educación como la puerta de entrada a la consecución de otros derechos continuará viéndose afectada frecuentemente en territorios de múltiple afectación, incrementando riesgos asociados de protección, VBG, inseguridad alimentaria y salud mental.

Los docentes y agentes educativos en territorios impactados por el conflicto y la variabilidad climática continuarán presentando necesidades incrementadas de apoyo psicosocial, salud mental y asistencia técnica para la flexibilización curricular en situaciones de emergencias.

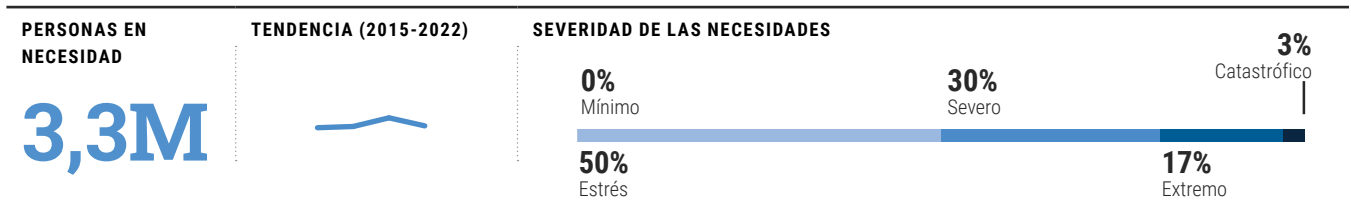


Para más detalles

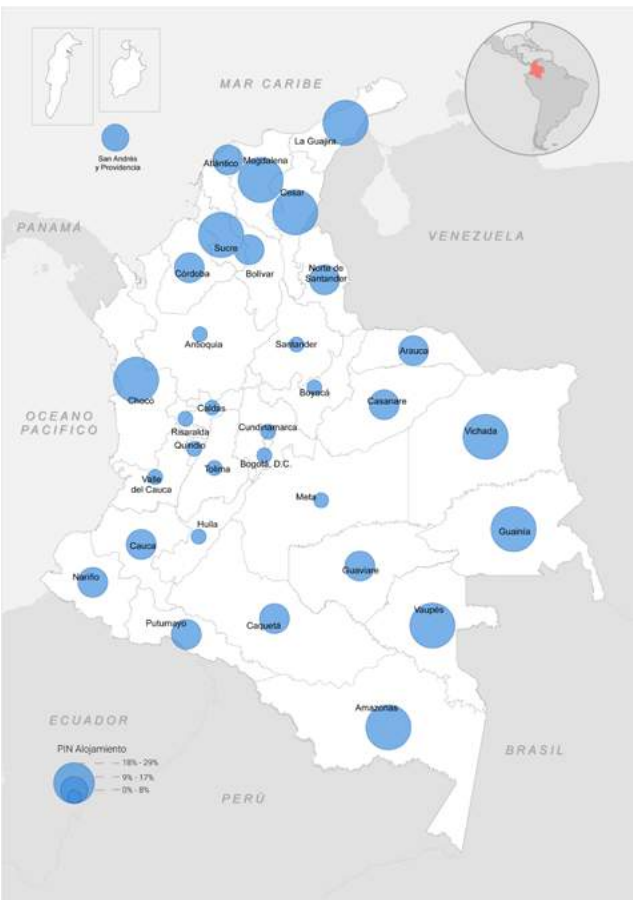
sobre las necesidades y monitoreo en Educación en Emergencias, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%B4ster-de-0>

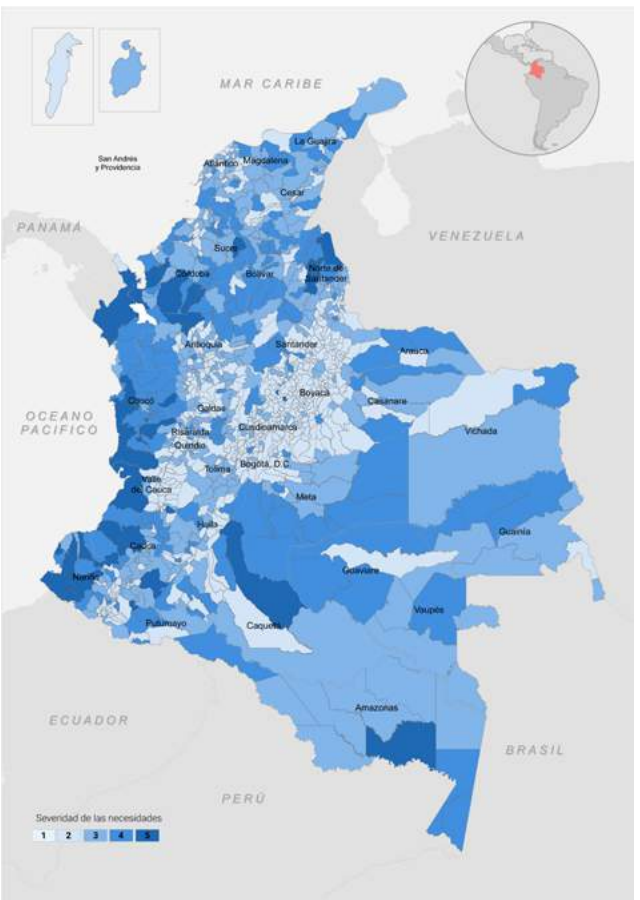
3.6 Alojamiento y Asentamiento (AyA)



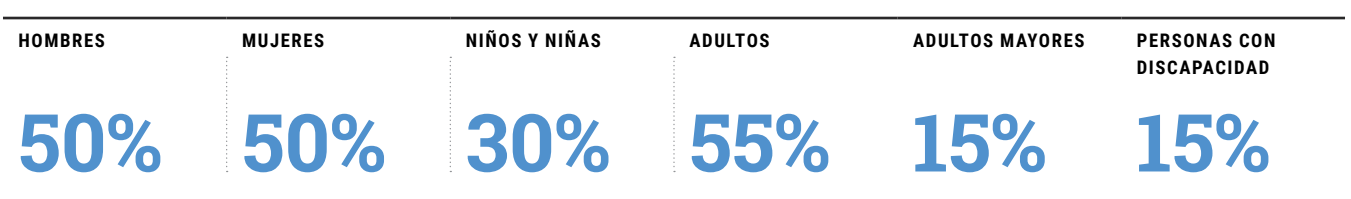
PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN



En Colombia, actualmente confluyen múltiples eventos que generan daños en los hogares y comunidades debido a la variabilidad climática y el conflicto armado, aumentando el número de personas y comunidades afectadas con necesidades humanitarias en el sector de Alojamiento y Asentamiento. Los grupos vulnerables en riesgo son afectados de manera recurrente en su derecho a la asistencia humanitaria, a vivir con dignidad, a la protección y a la seguridad en los espacios habitables y adecuados.

Análisis de las necesidades humanitarias

Para 2023 se ha hecho un análisis basado en los talleres regionales HNO, datos de la UARIV y UNGRD a través del comportamiento de las emergencias en el 2022, así como los resultados cualitativos de las encuestas lideradas por REACH 2021 – 2022.

La distribución por género y edad estará similar a la de 2022, sin embargo, se tiene un incremento en las necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores y NNA para el acceso a asistencia humanitaria basada en alojamiento. Los departamentos con mayor impacto para el clúster tanto para variabilidad climática como para conflicto armado fueron: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Vaupés, Valle del Cauca y Vichada.

Proyección de las necesidades

Siguen persistiendo zonas de concentración de necesidades humanitarias como se muestra en el mapa por la variabilidad climática y el conflicto armado.

Se ha podido identificar brechas y necesidades por:

a) falta de capacidad generalizada para alojar a la población, traducida en infraestructura existente o lugares de adecuación de respuesta humanitaria del sector, b) incremento de las necesidades de la población con enfoque diferencial -sobre todo personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, comunidades étnicas-, c) eventos por confinamiento tienen respuesta en la inmediatez, pero no en la sostenibilidad de la misma, d) utilización de coliseos o polideportivos como albergues que no cuentan con infraestructura, NFI de alojamiento, cocina entre otras condiciones mínimas y adecuadas para alojamiento de población con necesidades (aumento de riesgo de seguridad, hacinamiento y VBG); igualmente, para el alojamiento se utilizan casas amigos y familiares de población con necesidades en cascos urbanos o grandes ciudades con carencias, e) población con multi afectación por impacto simultaneo por eventos de variabilidad climática, conflicto armado incluyendo a los flujos migratorios mixtos.



Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo en Alojamiento y Asentamiento, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%BAster-de>

NARIÑO, COLOMBIA

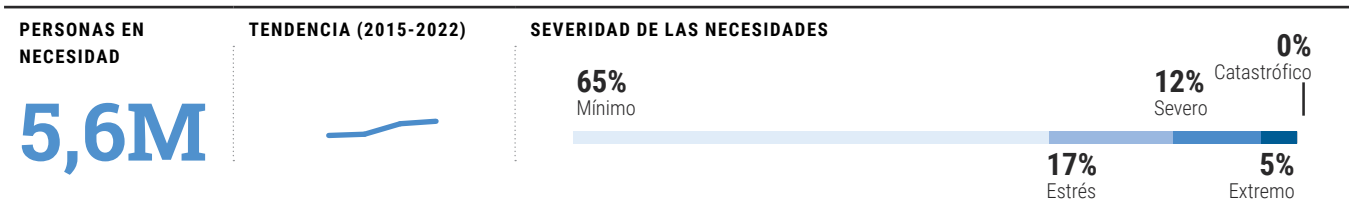
Alojamiento colectivo temporal.

Foto: Christian Jepsen, NRC, 2021.

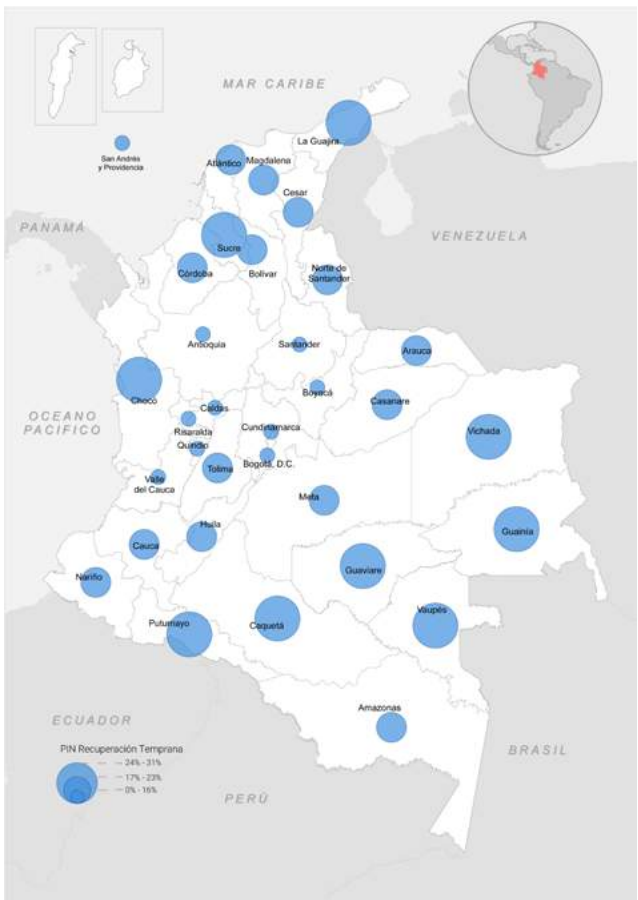


3.7

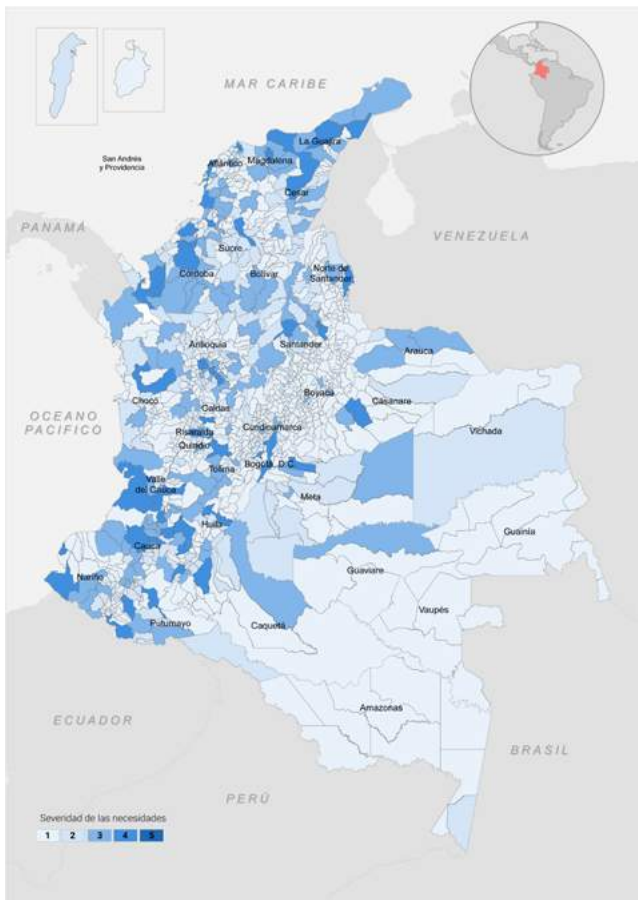
Recuperación Temprana



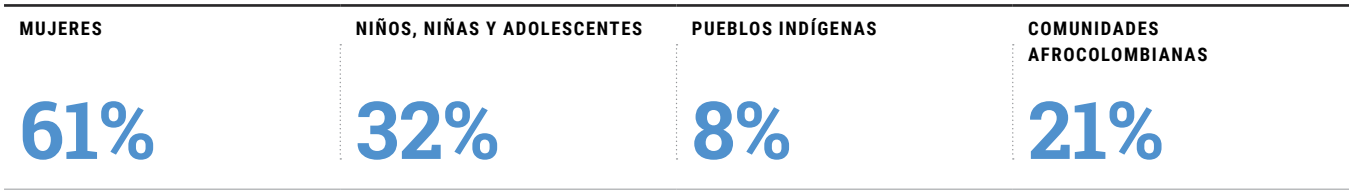
PERSONAS EN NECESIDAD



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



DESAGREGACIÓN DEL PIN





CÓRDOBA, COLOMBIA

Población participantes del Programa Anda

Foto: Fundación SAHED, 2022.

El contexto humanitario en Colombia identifica necesidades urgentes e inmediatas asociadas a una crisis relacionada con escenarios de múltiple afectación, sin embargo, es indispensable implementar intervenciones que sienten las bases para una recuperación sostenible de la población afectada, contribuyendo a superar su situación de vulnerabilidad y transitando a un estado de plena autonomía y goce de derechos.

Análisis de las Necesidades Humanitarias

Para el proceso de identificación de necesidades (concepto que buscamos reevaluar como ya veremos más adelante), se seleccionaron indicadores y

datos oficiales que permitan identificar territorios y poblaciones en condiciones y potencialidades para la estabilización y sobre todo con avances verificables en la superación de necesidades netamente humanitarias. también ha venido avanzando en su proceso de establecer soluciones duraderas y superación de estas crisis.

Proyección de las necesidades

Para el caso de la inestabilidad por conflicto armado, la Unidad para las Víctimas construyó en el 2015 el Índice Global de Restablecimiento Social y Económico⁵⁹, este fue un primer acercamiento para identificar de manera individual el proceso de

⁵⁹ Este índice se calcula a partir de la medición de superación de vulnerabilidad reglamentada a partir del artículo 14 de la Ley 1448 de 2011. La última resolución reglamentaria se puede consultar en <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Politica%20de%20Victimas/Resoluci%C3%B3n%202200%20de%202018.pdf>, y los resultados están disponibles en <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/visor-superacion-de-situacion-de-vulnerabilidad/66298>

avance de la población víctima de desplazamiento forzado en su proceso de estabilización a través de la verificación de siete derechos considerados como indicadores de sostenibilidad socioeconómica. Esta medición muestra que para el 31 de diciembre de 2021 al menos 2.892.968 víctimas habían superado su situación de vulnerabilidad a través del restablecimiento socioeconómico de sus derechos. Este resultado es el 38 por ciento del total de población víctima de desplazamiento⁶⁰, lo que indica que sea a través de intervenciones estatales o por la autogestión de la población se viene avanzando en dar el paso de necesidades humanitarias a medidas que buscan mantener este estado de estabilización, o incluso llevar a la población a una situación de autonomía como sujetos plenos de derechos.

La reactivación económica posterior a la pandemia se manifestó con un PIB en el 2021 que repuntó el 10,7 por ciento, previendo un 7,1 por ciento para el 2022 y un 0,5 para el 2023. Adicionalmente, tal como lo muestra el Banco Mundial “Con unos 1,4 millones

de personas que salieron de la pobreza en 2021, la tasa nacional se estima que 2,1 millones de personas que habían caído en la pobreza en 2020, seguían siendo pobres en 2021”⁶¹. El panorama de crecimiento económico deja un aproximado de 700.000 personas que ingresaron a la tasa de pobreza en 2020 y que no han superado su situación para el 2021, sumado a los datos generales de pobreza en el país, se enmarca un escenario de intervención con medidas de identificación de capacidades de superación de pobreza a través de generación de ingresos, empleo o emprendimiento.

Es de este modo, y a través de otros escenarios⁶² liderados por el Gobierno Nacional con apoyo de diferentes actores de la cooperación internacional, que se vienen realizando esfuerzos para identificar y focalizar la población que ha superado su etapa de crisis y requiere un acompañamiento con medidas de desarrollo, generación de resiliencia y procesos sostenibles de recuperación a la crisis.



Para más detalles

sobre las necesidades y monitoreo en Recuperación Temprana, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-cl%C3%A1ster-de-1>

⁶⁰ El universo de medición fue de 7.504.883 víctimas de desplazamiento forzado.

⁶¹ Grupo Banco Mundial. (06 de octubre de 2022). Banco Mundial. Obtenido de Colombia: panorama general: <https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20colombiana%20se%20ha,7%2C1%25%20en%202022>.

⁶² Experiencias como Red Unidos, o seguimiento a SISBEN que tienen como uno de sus objetivos principales identificar la población que ha avanzado en su superación de pobreza y estabilización socioeconómica

Parte 4

Anexos

VAUPÉS, COLOMBIA

Habitantes de Mitú en el puerto fluvial de la población.

Foto: Andrés Torres, OCHA Colombia, 2022



4.1

Fuente de datos

El análisis intersectorial realizado con la participación de los socios de la arquitectura humanitaria respondió a diferentes procesos de consulta, cronograma y metodología establecidos en las guías globales JIAF, adaptadas al país según la información disponible. Se partió de los resultados del año anterior actualizando la **información al período de análisis (2021 – 2022)**, con un alcance municipal (1.122 municipios del país) y desagregación de la población, como criterios mínimos para la revisión de datos realizada por los clústeres y que alimentaron los **59 indicadores humanitarios seleccionados (críticos y no críticos)**.

Las fuentes de **información cuantitativa** (datos abiertos de Gobierno y datos del sistema de información propio de OCHA) permiten construir indicadores que dan cuenta de las dimensiones de análisis para determinar riesgo e impacto de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente afectados por el conflicto y violencia armada, la variabilidad climática, al igual que otros factores que limitan el acceso a

servicios de salud, educación, entre otros derechos fundamentales que deterioran las condiciones de vida.

El **componente cualitativo o “juicio de expertos”**, obtenido de los resultados de los talleres regionales realizados en los Equipos Locales de Coordinación (ELC) y Equipos Humanitarios Locales (EHL) y diferentes evaluaciones de necesidades (MIRA, MSNA, ERN, ECNI, EBA, etc), complementaron las cifras generadas por medio de los indicadores, permitiendo ajustar los datos para mejor reflejo de la realidad. Es así como los cálculos tuvieron un ponderador para definir las escalas de severidad intersectorial por municipio, llegando a las Personas en Necesidad (PiN) en Colombia. El consolidado de evidencias da información más precisa sobre las necesidades humanitarias de la población, visibilizando un multi afectación que requiere una respuesta adecuada y eficiente en un corto, mediano o largo plazo. Todos los datos se comparten en plataformas como HDX.

Evaluaciones de necesidades

Entre 2021 y 2022 como parte del Ciclo de Programación Humanitario y según los reportes, las organizaciones y agencias humanitarias, desarrollaron 94 evaluaciones de necesidades la mayoría en respuesta a emergencia. De este total, 42 fueron Evaluaciones Rápidas de Necesidades (ERN) por parte del Consorcio MIRE, 39 fueron Multi Clúster Initial Rapid Assessment (MIRA)⁶³, 3 Evaluaciones Basada en Área, 3 Evaluaciones de Marcados de WASH, 2 evaluaciones MIRA adaptado través de la herramienta Premise, 2 Evaluación de Necesidades Multisectoriales 2022 (MSNA) y 1 Iniciativa Conjunta de Monitoreo de

Mercados. En general más de 40 organizaciones del sistema humanitario participaron en la realización y construcción de análisis de Evaluaciones de Necesidades. En promedio en cada evaluación participaron entre 3 a 6 organizaciones o agencias, con excepción de la MNSA en la que participaron 40 socios.



Para más detalles

sobre el mapeo de las Evaluaciones de Necesidades realizadas durante el período de revisión, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/resumen-ejecutivo-de-las-necesidades-humanitarias-2023-evaluaciones-de>

63 <https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/mira>



GUAVIARE, COLOMBIA

Misión interagencial.

Foto: Jean Paul Medina, FLM, 2022.

4.2 Metodología

Como todos los años en Colombia, este proceso se llevó a cabo en el marco del Grupo Temático de Manejo de Información (GTMI) y en coordinación con el Grupo Interclúster (GiC), además de contar con el apoyo de socios como iMMAP, REACH, el Foro de ONGs, la participación de los socios y contrapartes de otros espacios de coordinación del nivel local (ELC, EHL, Autoridades locales, Sociedad civil, Iglesia, Ministerio público) y el GIFMM para los casos donde hay puntos de encuentro (back to back).

La **metodología global JIAF⁶⁴ utilizada para el cálculo de personas en necesidad -PiN** - intersectorial para el

Humanitarian Needs Overview (HNO) 2023 es la misma que se ha venido implementando los dos últimos años⁶⁵, basada en un marco analítico que tiene como principales conductores de la crisis el conflicto armado y la variabilidad climática para el caso de Colombia, sumado a otros factores del contexto que determinan el alcance a través de diferentes eventos e impactos por la vulnerabilidad extrema y exposición a riesgos.



Para más detalles

sobre la Metodología, [por favor consultar este enlace](#)

⁶⁴ Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés: <https://assessments.hpc.tools/km/2021-jiaf-guidance>

⁶⁵ Cambiará para el desarrollo de este ejercicio el próximo año.

JIAF Escala de Gravedad

FASE DE GRAVEDAD	REFERENCIA CLAVE RESULTADO	RESPUESTA POTENCIAL OBJETIVOS
1 Ninguna/Mínima	<p>Niveles de vida aceptables (teniendo en cuenta el contexto): posibilidad de tener algunos signos de deterioro y/o servicios sociales básicos inadecuados, posibles necesidades de fortalecimiento del marco legal.</p> <p>Capacidad de satisfacer todas las necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento insostenibles (como la erosión/el agotamiento de los activos).</p> <p>Ausencia o riesgo mínimo/bajo de impacto en el bienestar físico y mental.</p>	<p>Construir la resiliencia</p> <p>Apoyar a la reducción del riesgo de catástrofes</p>
2 Estrés	<p>Niveles de vida estresados, lo que lleva a la adopción de estrategias de afrontamiento (que reducen la capacidad de proteger o invertir en los medios de vida).</p> <p>Incapacidad de satisfacer algunas necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento estresados, insostenibles y/o reversibles a corto plazo.</p> <p>Impacto mínimo en el bienestar físico y mental (bienestar físico y mental estresado) en general.</p> <p>Posibilidad de que se produzcan algunos incidentes de violencia localizados/objetivados (incluyendo violaciones de los derechos humanos).</p>	<p>Apoyar a la reducción del riesgo de catástrofes</p> <p>Proteger los medios de subsistencia</p>
3 Severa	<p>Degradación de los niveles de vida (respecto a los habituales/típicos), lo que lleva a la adopción de mecanismos de afrontamiento negativos con amenaza de daños irreversibles (como la aceleración de la erosión/el agotamiento de los activos).</p> <p>Reducción del acceso/disponibilidad de bienes y servicios sociales/básicos. Incapacidad de satisfacer algunas necesidades básicas sin adoptar mecanismos de afrontamiento de crisis/emergencia - irreversibles a corto/medio plazo.</p> <p>Degradación del bienestar físico y mental. Daños físicos y mentales que provocan una pérdida de dignidad.</p>	<p>Proteger los medios de subsistencia</p> <p>Prevenir y mitigar el riesgo de deterioro extremo de las condiciones humanitarias</p>
4 Extrema	<p>Colapso del nivel de vida, con una supervivencia basada en la asistencia humanitaria y/o en estrategias de afrontamiento extremas e irreversibles a largo plazo.</p> <p>Pérdida/liquidación extrema de los bienes de subsistencia que provocará grandes carencias/necesidades a corto plazo.</p> <p>Violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos.</p> <p>Presencia de daños irreversibles y aumento de la mortalidad.</p>	<p>Salvar vidas y medios de subsistencia</p>
5 Catastrófica	<p>Colapso total del nivel de vida.</p> <p>Agotamiento casi total de las opciones de afrontamiento.</p> <p>Mecanismos de afrontamiento de último recurso/agotados.</p> <p>Mortalidad masiva (CDR, U5DR) y/o daños irreversibles. Daños físicos y mentales irreversibles generalizados que provocan un exceso de mortalidad.</p> <p>Violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos.</p>	<p>Revertir/Prevenir la muerte masiva y/o el colapso total de los medios de vida</p>

4.3

Brechas y Limitaciones de la Información

A pesar de contar con diferentes fuentes de datos que ayudan a tener confianza y representatividad municipal en los indicadores seleccionados para el análisis de necesidades del HNO 2023, existen desafíos importantes que debemos trabajar para cerrar la brecha ante algunas limitaciones con la información. En el **proceso de consulta con los socios** se identificaron varios aspectos relevantes que relacionan a continuación:

- ▲ Algunas fuentes de información que, por su naturaleza, cuentan con desagregación departamental y no municipal, dificultan la comparación entre los municipios ante las diferentes dinámicas en un mismo departamento. Lo anterior, propició en algunos casos el uso de métodos estadísticos de extrapolación para lograr completar el análisis.
- ▲ Contrario a lo anterior, fuentes oficiales que cuentan con toda la información geográfica y niveles de desagregación, tienen rezago frente al periodo de tiempo, lo que imposibilita tener datos actualizados.
- ▲ Algunas bases disponibles presentan dificultad para obtener a algunos niveles de detalle que sugiere la metodología; es el caso de datos demográficos como el de los pueblos étnicos⁶⁶ y las personas con discapacidad que en los últimos años es un desafío para realizar la desagregación del PiN para estos grupos en situación de vulnerabilidad y con alto impacto.
- ▲ Para el análisis de este año se incluyeron evaluaciones de necesidades realizadas en varios territorios, sin embargo, se identificó que la consolidación de esta información presenta brechas entre 2021 y 2022 (corte de junio), ante la falta de reporte riguroso de datos y/o resultados recolectados por parte de los socios. Adicionalmente, algunas de las metodologías utilizadas (MIRA, ERN, línea de base WASH, MSNI) no tienen una representatividad nacional, en algunos casos ni municipal, concentrado el peso/sesgo dentro del cálculo en algunos lugares.
- ▲ Aunque existe información en los territorios, en ocasiones esta no se comparte en diferentes vías (las organizaciones internacionales no tienen respuesta por parte de la administración pública frente a las solicitudes de información, o al revés). Un ejemplo lo podemos ver cuando no se socializan los hallazgos de las evaluaciones de necesidades en los territorios, entre los mismos socios de los ELC/EHL o con las autoridades locales o viceversa, invisibilizando y limitando acciones de incidencia para el conocimiento de la situación y la por ende la toma de decisiones.
- ▲ Algunos departamentos presentan vacíos de información causados por la dispersión de la población y su ubicación en zonas de difícil acceso, al igual que la dificultad de las comunidades para comunicarse (no hay señal telefónica ni de internet, o las hay interceptadas).
- ▲ La falta de presencia institucional en ocasiones no permite realizar triangulación de información, sumándose los bajos niveles de denuncia por temor a represalias o normalización de los hechos, las fallas en la implementación de las rutas existentes o porque estas no se adaptan a las necesidades

⁶⁶ Hay limitaciones en el resultado del Censo 2018 –registro nacional–.

de las comunidades y el contexto. Igualmente, la demora en la toma de declaraciones y censos por parte de la institucionalidad, a pesar del contexto de seguridad complejo, también se da por el poco recurso humano disponible, y la baja capacidad técnica o interés de algunos funcionarios locales para ingresar información a los sistemas.

- ⚠ En varios departamentos la información oficial no siempre refleja las afectaciones, impactos y violencias, en especial los casos que tienden a invisibilizarse y de los cuales hay subregistro (reclutamiento, uso y utilización, las múltiples violencias basadas en género, masacres, desaparición forzada de colonos, abuso sexual, control social, víctimas de artefactos explosivos, desplazamientos individuales), incluyendo las necesidades sectoriales (educación, WASH, salud -suicidios en comunidades indígenas-).
- ⚠ La falta de conocimiento de herramientas o sistemas institucionales que puedan ser utilizadas para el trabajo de articulación que se realiza en los territorios. Además, muchas veces se hacen capacitaciones o se enseña el uso de herramientas, pero la capacidad instalada se pierde ante la falta de sostenibilidad (periodos electorales) por el cambio de personal en cargos públicos. No obstante, existen vacíos de información desde dos

perspectivas: i) la institucional que no recogen bien la información, ii) no existen herramientas a nivel comunitarios para que la información sea subida y difundida. *Sería importante, incentivar mecanismo para brindar información a la institución y al territorio. Comunidades Afro e indígenas dan a conocer que no es fácil la retroalimentación de la información, o de la voz a voz ante la distancia de los territorios.*

- ⚠ Afectaciones para población refugiada y migrante que afrontan riesgos de protección y otros impactos por la situación interna del país (violencia armada y variabilidad climática), se invisibiliza y repercute en la atención ante la falta de toma de declaraciones o vacíos en la ruta de atención para este grupo poblacional.
- ⚠ Dado que desde el EHP no hay una estrategia común sobre los mecanismos de reclamación y retroalimentación (la tienen de manera individual algunas organizaciones, esta información no se evidencia ni se menciona cómo se ha utilizado y/o analizado; no obstante, la comunicación con las comunidades afectadas se tiene y se refleja en la información de las encuestas/formularios de las evaluaciones, ya que los formularios tienen algunas preguntas relacionadas que se destacan en los informes/hallazgos.

Ante estos desafíos, **los expertos en datos se esfuerzan por plantear alternativas a las diferentes para mitigar estas barreras**, complementando algunos indicadores con nuevas/innovadoras fuentes de información o el desarrollo de otras metodologías (ej: evaluaciones/evidencia de primera mano sobre los grupos vulnerables), lo que podría mejorar la colecta de datos desagregados a través de un trabajo conjunto entre los socios humanitarios.



Es de vital importancia promover una estricta recolección de datos de manera más ampliada en los territorios, además de fortalecer el proceso de reporte con herramientas que permita consolidar los diferentes ejercicios, robusteciendo así el panorama de datos utilizados.



Es necesario mejorar la comunicación entre la institución y la cooperación, para que la gestión de la información sea más fluida y se pueda atender las zonas con mayor dificultad de acceso. Os coniam ta, quam teris, seri parit; et; non tu vilicul istoribus hocae molto ta suamquem quidenimius dem condis.

4.4

Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo; antigua guerrilla que hizo parte del conflicto histórico colombiano
AETCR	Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación	FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
ACPC	Ataque Contra la Población Civil	FMM	Flujos Migratorios Mixtos
AEI	Artefactos Explosivos Improvisados	FMI	Fondo Monetario Internacional
AGC	Autodefensas Gaitanistas de Colombia	FFPP	Fuerzas Públicas
CANI	Conflicto Armado No Internacional	GANE	Grupo armado no-estatal
CBPF	Country-Based Pooled Funds	GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares
CCPM	Coordinación de Clúster	GFD	Grupos Focales de Discusión
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe	GIC	Grupo Inter Clúster
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja	GIFMM	Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos
CIDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos	GTMI	Grupo Temático de Manejo de Información
CIH	Comité Interinstitucional Humanitario	GTP	Grupos Temáticos de Protección
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca	HNO	Humanitarian Needs Overview, por sus siglas en inglés
DDHH	Derechos Humanos	HRP	Humanitarian Response Plan
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas	ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
DIH	Derecho Internacional Humanitario	IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
DTM	Displacement Tracking Matrix	IDH	Índice de Desarrollo Humano
EAS	Explotación y Abuso Sexual	IPM	Incidencia de la Pobreza Multidimensional
EDA	Enfermedad Diarréica Aguda	INFORM	Index for Risk Management, por sus siglas en inglés
EHP	Equipo Humanitario de País	INML	Instituto Nacional de Medicina Legal
ELC	Equipo Local de Coordinación	INS	Instituto Nacional de Medicina Legal
ELN	Ejército de Liberación Nacional	IRA	Instituto Nacional de Salud
ENDS	Encuesta Nacional de Demografía y Salud	ITS	Infección Respiratoria Aguda
EPL	Ejército Popular de Liberación	IVE	Infecciones de Transmisión Sexual
ERA	Enfermedad Respiratoria Aguda	JAC	Interrupción Voluntaria del Embarazo
ERN	Evaluaciones Rápidas de Necesidades	LGTBIQ+	Juntas de Acción Comunal
ERM	Educación en el Riesgo de Minas		Lesbianas, gays, personas trans, bisexuales, intersexuales y queer
ERP	Evaluaciones Rápidas de Protección		
ETCR	Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación		

MAP	Minas Anti Personal	SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
MIRA	Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment, por sus siglas en inglés	SNARIV	Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
MSE	Municiones Sin Explotar	SNGRD	Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
MSNA	Evaluación de Necesidades Multisectoriales	SNU	Sistema de Naciones Unidas
MSNI	Índice de Necesidades Multisectoriales	SSR	Salud Sexual y Reproductiva
NNA	Niños, Niñas y Adolescentes	SINAS	Sistemas de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico
NNAJ	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes	TMF	Tarjeta de Movilidad Fronteriza
OACP	Oficina del Alto Comisionado para la Paz	TE	Trampas Explosivas
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos	UARIV	Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas
OCHA	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios	UNCT	Equipo de País de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés
OIM	Organización Internacional para las Migraciones	UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
OMS	Organización Mundial de la Salud	UNDAF	Marco de Asistencia para el Desarrollo, por sus siglas en inglés
ONG	Organización/es No Gubernamental/es	UNGRD	Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia	UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
OPS	Organización Panamericana de la Salud	UNMAS	Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas
OIT	Organización Internacional del Trabajo	UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética
PAE	Programa de Alimentación Escolar	VBG	Violencias Basadas en Género
PAT	Planes de Acción Territorial	WASH	Agua, saneamiento e higiene
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	WFP	Programa Mundial de Alimentos
PEP	Permiso Especial de Permanencia	ZEII	Zonas Estratégicas de Intervención Integral
PIB	Producto Interno Bruto	ZOMAC	Zonas Más Afectadas por el Conflicto
PIN	People In Need (Personas Con Necesidad)		
PMA	Programa Mundial de Alimentos		
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos		
PPR	Personas en proceso de reincorporación		
PPV	Población Proveniente de Venezuela		
REG	Remanentes Explosivos de Guerra		
RUV-UARIV	Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas		
SAN	Seguridad Alimentaria y Nutricional		

**PANORAMA DE NECESIDADES
HUMANITARIAS**
COLOMBIA